

35
2ej



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
"ACATLAN"**

**CHILE: EVOLUCION POLITICA
DEL REGIMEN MILITAR Y LA
TRANSICION A LA DEMOCRACIA**

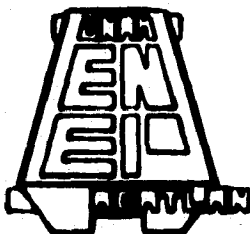
T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES**

P R E S E N T A

CARLOS ANTONIO ISRAEL SALCEDO JIMENEZ

ASESOR DE TESIS: L.R.I. GENOVEVA PORTILLA GOMEZ



NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. DE MEXICO

1996

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Gracias:

A mis Padres con Respeto y Cariño.

A mi hermano Tavo.

A mis amigos David, Paco, Yuri,

Marisa y Miguel Angel.

A la Profesora Genoveva, por su

desinteresado apoyo y valiosa

ayuda.

INDICE

INTRODUCCION.	5
-----------------------	---

CAPITULO I

EL MILITARISMO Y LAS FUERZAS ARMADAS EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO.

1.1	<u>MARCO CONCEPTUAL.</u>	9
1.2	<u>LAS FUERZAS ARMADAS EN AMERICA LATINA.</u>	15
1.2.1	LA AUTORIDAD DEL ESTADO.	15
1.2.2	LA CONFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.	16
1.2.3	EL MILITARISMO Y LA INTERVENCION MILITAR.	18
1.2.4	LA DICTADURA MILITAR.	23
1.2.5	LAS FUERZAS ARMADAS COMO INSTRUMENTO EN EL GOBIERNO.	26

CAPITULO II

LA REVOLUCION SOCIALISTA Y EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR (1970-1973).

2.1	<u>EL PROCESO REVOLUCIONARIO Y EL ASCENSO DEL SOCIALISMO AL PODEL.</u>	28
2.2	<u>OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DE LA UNIDAD POPULAR.</u>	33
2.2.1	EL PROGRAMA ECONOMICO.	33
2.2.2	LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES.	35
2.2.3	LA POLITICA EXTERIOR.	38
2.3	<u>LA CONTRARREVOLUCION Y LA CRISIS POLITICA DE LA UNIDAD POPULAR.</u>	40

CAPITULO III

EL GOLPE DE ESTADO Y EL DESARROLLO POLITICO DEL REGIMEN MILITAR (1973-1989).

3.1	DESARROLLO DEL GOLPE DE ESTADO.	47
3.1.1	CAUSAS Y ORIGENES.	47
3.1.2	IMPORTANCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS.	50
3.1.3	EL TRIUNFO DE LA CONTRAREVOLUCION.	54
3.1.4	RAZONES DE LA DERROTA.	56
3.1.5	REFLEXIONES AL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR.	58
3.2	EL REGIMEN MILITAR.	61
3.2.1	EL SOPORTE SOCIAL.	61
3.2.2	EL PROYECTO ECONOMICO NEOLIBERAL.	62
3.2.2.1	INTRODUCCION.	62
3.2.2.2	IMPORTANCIA DEL PROYECTO ECONOMICO.	64
3.2.2.3	LAS FASES DE LA POLITICA ECONOMICA.	67
3.2.3	EL PROCEDIMIENTO POLITICO.	70
3.2.3.1	INTRODUCCION.	70
3.2.3.2	LA REPRESION DE LAS FUERZAS ARMADAS Y EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION.	72
3.2.3.3	LA DEMILIDAD DEL PROYECTO POLITICO.	80
3.2.4	LAS RELACIONES CON EL EXTERIOR.	84
3.2.4.1	INTRODUCCION.	84
3.2.4.2	IMPOSICION DEL MODELO AUTORITARIO Y SU REPERCUSION INTERNACIONAL.	85
3.2.4.3	LA DIPLOMACIA EN EL REGIMEN MILITAR.	86
3.2.4.4	EL AISLAMIENTO POLITICO DEL GOBIERNO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL.	87
3.3	LA OPOSICION POLITICA.	90
3.3.1	LOS NUEVOS ACTORES POLITICOS DE LA OPOSICION.	90
3.3.2	EL DESARROLLO DE LA OPOSICION CONTRA EL REGIMEN MILITAR.	91
3.3.3	LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA.	94

**CAPITULO IV
TRANSICION DEMOCRATICA.**

4.1	<u>ESPECTATIVAS DEL PROCESO DE DEMOCRATIZACION.</u>	96
4.2	<u>LA CONCERTACION DE LA OPOSICION.</u>	99
4.3	<u>PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA TRANSICION CHILENA.</u>	102
4.3.1	EVALUACION DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL REGIMEN MILITAR Y LA OPOSICION.	102
4.3.2	LA APERTURA DEMOCRATICA Y SUS DESAFIOS.	106
4.3.3	LA TRANSFORMACION DE LA POLITICA EXTERIOR.	112
	CONCLUSIONES.	117
	BIBLIOGRAFIA.	125
	HEMEROGRAFIA.	130

INTRODUCCION

La historia contemporánea de los países latinoamericanos se ha caracterizado por un hecho común. Por un lado, ha contado con una tradición constitucional que identifica a la nación con la legalidad y la democracia representativa. Por otro lado, estos valores no han logrado sobrevivir a las tremendas convulsiones que han desembocado finalmente en dictaduras. Otra característica común es que Latinoamérica se ha distinguido por una constante presencia de gobiernos autoritarios, los cuales han sido reforzados por el clero conservador y el deficiente desarrollo de la economía. Las características de la lucha armada que se libró para asegurar a fines del siglo XIX la emancipación de los territorios en manos de las potencias coloniales europeas, llevó a que los caudillos militares se convirtieran en titulares del poder Ejecutivo, siendo líderes políticos de acción paternalista sobre la población, correspondiéndoles el ejercicio del poder político una vez pasadas las luchas de independencia, y la definición del orden normativo de los nuevos estados.

Con el creciente ascenso del imperialismo a principios del siglo XX, estos regímenes militares se fueron haciendo más presentes en el continente americano como instrumentos de los intereses del sistema capitalista, sustentados por los designios de la burguesía oligárquica, esto es, como una dictadura que el capital monopólico internacional ejercía sobre los pueblos sometidos a su explotación.

Posteriormente tenemos que en el período que va desde la Segunda Guerra Mundial a la década de los años 70, empieza a darse el paso de los dictadores personales y patriarcales a un militarismo de forma institucional, con doctrinas propias. Estas dictaduras militares son promotoras de un modelo rigurosamente elaborado y detentoras de una base ideológica mucho más

amplia que sus antecesoras y reciben el calificativo de *fascismo dependiente*, pues resultan ser, en última instancia, el marco político e institucional más adecuado a los requerimientos planteados por una nueva modalidad de acumulación en desarrollo en América Latina, que encuentra su origen en las nuevas formas que comienza a asumir la división social del trabajo en escala internacional y la acumulación capitalista en escala mundial. La experiencia del nazifascismo de entreguerras mundiales demostró, en forma práctica, la primera expresión histórica de la forma fascista de gobierno de la dictadura oligárquica de la burguesía y, del mismo modo, las situaciones de crisis económicas profundas por las que atravesó en diversas etapas el capitalismo monopólico, agudizaron la lucha de clases al extremo de poder plantear alternativas radicales de solución desde la perspectiva de los sectores oprimidos que se fue haciendo presente en América Latina en los términos ya descritos.

Con el inicio de la llamada guerra fría y la consecuente bipolaridad del mundo entre capitalismo y socialismo, ocurre en el continente una profunda transformación en la naturaleza de los gobiernos militares, los cuales se muestran más seguros de su capacidad para dirigir el cambio. A este respecto, en el mundo moderno el papel asignado a las fuerzas armadas es materia de debate permanente, particularmente en lo que se refiere al rol que estas asumen como factor real de poder y a la influencia que ejercen sobre la autoridad civil, y es aquí donde adquiere especial relevancia tratándose de las sociedades latinoamericanas, en las cuales la continua presencia del instituto marcial en la arena política y el agrandamiento de la autoridad militar con respecto a la civil, es característica común a los países del área. Es en este tipo de sociedades en donde los grupos estables de especialistas, tales como la policía y los ejércitos permanentes, equipados y organizados para el monopolio de la violencia, donde sus líderes pueden lograr persuadir a los menos para forzar a los más para erigir al Estado como aquella institución que subordina el poder de las masas al poder de una minoría armada y organizada. Es por eso que el carácter dictatorial de estos regímenes requiere para su legitimación de aquel instrumento técnico que se hará cargo de las funciones de gobierno y que cumpla con los requisitos que las condiciones específicas del fascismo dependiente requiere: las Fuerzas Armadas.

La dictadura chilena es, a este objeto, un ejemplar de estudio verdaderamente excepcional por el que me he inclinado para sostener el concepto de como la ideología del fascismo (que es la expresión de la crisis por la que atraviesa el imperialismo en el plano mundial) se hace presente en el régimen militar chileno y como éste rompe con el esquema parlamentario y democrático formal de ejercicio de la política sustituyéndola por una autoridad militar despótica, cuya ideología es la seguridad nacional. Este caso representa en la práctica una expresión máxima de centralización del poder (concentración del poder económico aparejada a la concentración del poder político en la formación social del país) y, desde esa situación, de desarrollo de una estructura represiva y opresiva controlada por una minoría organizada alrededor de la fuerza material.

De este modo, en el capítulo I titulado "EL MILITARISMO Y LAS FUERZAS ARMADAS EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO", se parte de una visión general sobre el concepto de régimen militar y lo que este representó en el caso de América Latina, incluyendo además algunas definiciones y términos conceptuales que se utilizan a lo largo del presente trabajo.

En el segundo capítulo se analizan las características de la Revolución socialista chilena y el posterior gobierno de la Unidad Popular. Lo que se intenta destacar y establecer es que el gobierno de Salvador Allende se constituyó como un desafío para el bloque dominante de la oligarquía capitalista, apoyada por los intereses imperialistas de los Estados Unidos y, del mismo modo, se hace mención de como dicho gobierno promueve un profundo proceso de independencia nacional apoyado en la movilización de clases subalternas.

En el capítulo III que lleva por nombre "EL GOLPE DE ESTADO Y EL DESARROLLO POLITICO DEL REGIMEN MILITAR (1973-1989)", la idea es presentar la evolución del gobierno del general Pinochet, mediante una perspectiva de análisis político e histórico global, la cual sustenta el objetivo general de mi trabajo, apoyado en la concepción de que la dictadura surge en Chile como un recurso del exterior para impedir la propagación de la ideología

socialista y manifestarse como un instrumento de los intereses del sistema capitalista mediante el liberalismo económico. Se consideran las principales características sobre la actitud represiva y los problemas de índole institucional del régimen militar y, del mismo modo, se examinan de manera general cuales son las perspectivas del proceso de transición democrática.

Para el capítulo IV llamado "TRANSICION DEMOCRATICA" se presenta un estudio de manera abierta sobre el proceso y la consolidación de la democracia en Chile, discutiendo en el hecho de que dicho proceso surge como una opción donde se ofrecen expectativas de cambio en todos los ámbitos de la sociedad, siendo el elemento importante la reunificación de los partidos de oposición y señalando asimismo la táctica que debía seguir el nuevo gobierno democrático frente a los problemas heredados por el régimen militar.

Finalmente, dentro de las conclusiones se circunscriben las ideas centrales de este trabajo, a la vez que se desarrollan las perspectivas correspondientes para el proceso de transición democrática. Sin embargo, deben considerarse que aun hoy día quedan reminiscencias de la presencia del régimen militar en el gobierno.

CAPITULO I

EL MILITARISMO Y LAS FUERZAS ARMADAS EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO.

1.1 MARCO CONCEPTUAL.

TRANSICION.- Dentro de la concepción de las ciencias sociales, se entiende por transición al intervalo extendido entre un régimen político y otro.

Bajo este sencillo contexto, las transiciones desde un gobierno autoritario están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria.

En el transcurso de la transición, lo característico es que las reglas del juego no están definidas. Se encuentran en un flujo permanente y de manera general son objeto de difíciles enfrentamientos. Los actores luchan por satisfacer sus intereses inmediatos y/o los de aquellos a quienes dicen representar; del mismo modo, definen las reglas y procedimientos cuya conformación determinará muy probablemente quienes serán los perdedores y los ganadores. En la medida en que existen reglas y procedimientos efectivos durante la transición, estos suelen estar en manos de los gobernantes autoritarios. Estos gobernantes conservan un poder discreto en mayor o menor

medida, dependiente de la etapa en que se halle la transición, sobre los ordenamientos jurídicos y los derechos que en una democracia estable puedan ser protegidos por la Constitución y por diversas instituciones independientes.¹

LIBERALIZACION.- Se le denomina al proceso de redefinir y ampliar los derechos. Dicho proceso vuelve efectivos ciertos derechos que protegen tanto a individuos como a grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros. Llevado a la práctica, es un índice del comienzo de la transición, la cual origina una serie de consecuencias para determinar eventualmente los alcances y dimensión de dicho proceso. Como característica de esta primera etapa de la transición es que depende en forma precaria de las facultades del gobierno.²

DEMOCRACIA.- Entendida en un sentido amplio, la democracia es un concepto filosófico, una actitud referida, tanto a lo político como a lo económico y social. La definición más conocida de democracia es la que dió Lincoln: "Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". Si bien, al principio la democracia fue política en el sentido superficial del término (constitución, poder central, derechos del hombre, elecciones, división de poderes, etc.), después la democracia enraizó a través de su estructura en lo económico y social.³

El principio rector de la democracia es el de la *ciudadanía*, la que involucra tanto el *derecho* de ser tratado por otros seres humanos como igual con respecto a la formulación de opciones colectivas como la *obligación* de quienes instrumentan dichas opciones de ser accesibles, y responder por igual frente a todos los miembros del sistema político. A la inversa, este principio impone a los gobernados la *obligación* de respetar la legitimidad y a los

¹ O'DONNELL GUILLERMO y otros. *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*. Vol. 4, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1988.

² *Idem* (1).

³ VARIOS AUTORES. *Diccionario de Ciencias Sociales*. Vol. 1. Instituto de Estudios Políticos, UNESCO, Madrid, 1976.

gobernantes el *derecho* de actuar con autoridad a fin de promover la eficacia de esas opciones protegiendo al sistema político de toda amenaza a su perduración.

De la misma manera, la democratización está referida a procesos en que las normas de la ciudadanía son aplicados a instituciones políticas antes regidas por otros principios (el control coactivo, la tradición social) o bien ampliadas, a fin de incluir a individuos que antes no gozaban de derechos y obligaciones (analfabetos, mujeres, minorías étnicas, extranjeros, etc.) o para abarcar problemas e instituciones que no participaban en la vida ciudadana (organos del Estado o militares, empresas productivas, entre otros).

Sin las garantías de libertad individual que entraña la liberalización, la democratización corre el riesgo de degenerar en un mero formalismo (el caso de las democracias populares). Por otro lado, si no hay la responsabilidad ante las masas y la institucionalización de grupos en el segundo caso, la liberalización se puede manipular fácilmente a la conveniencia de los gobernantes.⁴

Bajo esos principios podemos decir que el proceso de democratización no es meramente político, por el contrario, es un proceso universal de la comunidad, que afecta a los valores, normas e instituciones sociales, económicas, morales, culturales y juridicopolíticas.

SOCIALIZACION.- La transición hacia una democracia política marca la apertura de otra transición conocida como socialización, la cual involucra dos procesos independientes pero interrelacionados. Al primer proceso, el que algunos llaman *democracia social*, donde transforma en ciudadanos (actores dotados de iguales derechos y obligaciones para decidir las acciones que habrán de emprender las instituciones correspondientes) a obreros, estudiantes, empresarios, *ad infinitum*. El otro proceso, conocido como *democracia económica*, se refiere al suministro de iguales beneficios a la población,

⁴ Idem (1).

partiendo de los bienes y servicios generados por la sociedad: educación, bienes materiales, salud, ingresos monetarios, etc. La presencia de ambos o el logro de las mismas es lo que llamamos o conocemos como socialización, y para que se llegue a dar una compatibilidad de estos procesos, es algo que se sigue cuestionando en nuestros días. Para ello debe haber igual participación de las unidades del entorno social y se otorgue una distribución equitativa de los beneficios obtenidos a partir de las elecciones colectivas y viceversa.⁵

PLEBISCITO.- Este un procedimiento de democracia directa que utilizan los procesos democráticos y no democráticos, por el que se convoca y consulta al cuerpo electoral para que adopte o ratifique una decisión política o para que confirme su confianza a una persona. No es una forma o variedad de referéndum. Tal vez tiene ciertos puntos de conexión, pero en cuanto que ambas son procedimientos de democracia directa. En cambio, el referéndum es un procedimiento de legitimidad jurídica por medio del cuerpo electoral. El plebiscito es un instrumento o procedimiento de legitimidad política, y en él, el pueblo por medio del cuerpo electoral, se pronuncia sobre dos aspectos de importancia de la actividad política. En un caso se orienta hacia la confianza que se ha de otorgar a un gobernante. En otro caso, se les consulta y se pronuncia sobre una decisión política importante.⁶

GOLPE DE ESTADO.- El golpe de estado es un acto llevado a cabo por organismos del mismo estado. Tomando como punto de investigación tiempos actualizados, este fenómeno tuvo una verdadera proliferación a principios de los años setenta, pues más de la mitad de los países del mundo tenían gobiernos surgidos por dicho fenómeno realizados de manera exitosa y, por tanto, el golpe de estado se volvió un método de sucesión gubernativa más usual que las elecciones y la sucesión monárquica. En el mayor de los casos, quienes se adueñan del poder político por este medio son los titulares de algún sector

⁵ Idem (1).

⁶ Idem (3).

clave de la burocracia estatal: los jefes militares. De este modo, el golpe militar o *pronunciamiento* se fue transformando en la forma más corriente de golpe de estado.

El golpe de estado hoy en día implica la incautación por parte de un grupo militar o de las fuerzas armadas en su conjunto, de los órganos del poder político o sus atribuciones y, mediante una acción sorpresiva, manteniendo un margen de seguridad y reduciendo la violencia inherente al acto con el mínimo empleo de la misma. No es suficiente la mera infiltración de un grupo no militar que logre llegar a influir a un grupo de oficiales.⁷

El tema del golpe de estado es quizás uno de los más controvertidos en la literatura sociopolítica, por lo que es necesario profundizar en el análisis de sus diversos aspectos e implicaciones. De igual manera, el tema del golpismo se conecta -por otra parte- con el de estado de excepción y -a través del mismo- con el de la caracterización del desarrollo histórico de las dictaduras militares.⁸

DICTADURA.- Se entiende en el sentido general como el control ilimitado del poder estatal por parte de un individuo o un grupo pequeño. Entre sus características se pueden señalar el exclusivismo y arbitrariedad en el ejercicio del poder político, así como limitando los vínculos jurídicos del mismo, restringiendo o eliminando las libertades civiles y empleando métodos despóticos para el control político y social. Para el establecimiento de un régimen dictatorial se requiere ostensiblemente de la ineffectividad de la democracia y una debilidad interna en el sistema. Las crisis económicas, las tensiones sociales, así como un desgaste en el orden constitucional y la aparición de grupos de poder antidemocráticos son propicios para la aparición de un régimen dictatorial.

En efecto, la dictadura es la contraposición con la democracia. La democracia conlleva la separación de hecho y de derecho del poder y la

⁷ BOBBIO NORBERTO. *Diccionario de Política*. Vol. 1. Siglo XXI Editores, México, 1981.

⁸ Para un análisis detallado e interpretación del tema, véase: MARIO ESTEBAN CARRANZA. *Fuerzas Armadas y Estados de excepción en América Latina*. Editorial Siglo XXI, México, 1978.

transmisión desde abajo hacia arriba de la autoridad política. Por el contrario, la dictadura se distingue por una concentración muy marcada del poder y por la transmisión de la autoridad desde arriba hacia abajo.⁹

Una forma especial de dictadura es el Gobierno Militar, el cual es asimismo una autocracia (forma de gobierno en la cual la voluntad de un solo individuo es la suprema ley) establecida a término fijo. El gobierno dictatorial no está frenado por la ley, está por encima de ella, haciendo ley su propia voluntad.

Existen diversas clasificaciones de la dictadura, pero las más significativas se basan en la naturaleza del poder, esto es, los instrumentos de control que adoptan las diferentes dictaduras, creando una dicotomía entre dictaduras autoritarias y dictaduras totalitarias. La primera se funda sobre los medios tradicionales del poder coercitivo (ejército, burocracia, policía), teniendo escasa capacidad de propagarse y penetrar directamente en las instituciones y en los grupos sociales (ej. el franquismo español), mientras que la segunda emplea además de los medios tradicionales, al instrumento del partido único de masas siendo capaz de controlar los medios de comunicación, la educación y en gran medida a las instituciones económicas penetrando en cualquier formación social (ej. la Alemania nazi).

Por una parte, el autoritarismo emerge como un sistema centrado en el poder, donde las relaciones son de dominio y sumisión, basada en la autoridad indiscutible. Por otra parte, el totalitarismo insiste en la supremacía del Estado, sobre los grupos sociales y el mismo individuo, erigiéndose en árbitro único de los conflictos de clase.¹⁰

⁹ VARIOS AUTORES. *Diccionario de Política y Administración Pública*. Vol. 1. Colegio de Licenciados en Ciencia Política y Administración Pública, A.C.

¹⁰ *idem* (7).

1.2 LAS FUERZAS ARMADAS EN AMERICA LATINA.

1.2.1 LA AUTORIDAD DEL ESTADO.

Contando con los antecedentes de que los países de América Latina se definen por una historia paralela perteneciente a occidente y que fueron creadas por una dominación colonial con la imposición de su idioma, religión, valores y costumbres europeas,¹¹ podemos visualizar que en estas naciones predominan las relaciones de producción capitalista. De la misma manera, sus economías se caracterizan por métodos anticuados de producción y organización social, acompañados de una pobreza crónica generalizada.

Como consecuencia de lo anterior, el poder en América Latina tiene un carácter oligárquico porque se funda en una participación política limitada y el compromiso político sólo entra en un grupo reducido. En estos países, las clases medias se fueron afianzando hasta sustituir a las antiguas oligarquías tradicionales en las posiciones de prestigio y gobierno.¹²

Se debe especificar que el concepto de soberanía de los Estados se incorpora en América Latina como expresión de rechazo a cualquier injerencia externa. Esto resulta ficticio, puesto que en países donde la prosperidad económica está condicionada en gran medida por factores externos, no pueden llegar a ser autónomos en la toma de decisiones internas, resultando utópico que se presente la soberanía de los pueblos sobre bases de disparidad económica.

Una característica importante de la vida política latinoamericana es la inclinación a las instituciones democráticas de gobierno, puesto que todas sus constituciones adoptan el modelo de gobierno democrático, republicano y

¹¹ ROUQUIÉ ALAIN. *El Estado militar en América Latina*. Siglo XXI Editores, México, 1982.

¹² DUVERGER MAURICE. *Instituciones políticas y derecho constitucional*. Ediciones Ariel, Barcelona, 1970.

representativo, y las instituciones que lo dinamizan: sufragio universal, pluripartidismo, sistema electoral puro, garantías políticas, etc. y, puesto que la democracia es sinónimo de participación popular, esta no es, por tanto, ni capitalista ni socialista, de izquierda o de derecha, clerical ni anticlerical; sino que es simplemente la acción de poner y quitar gobernantes mediante el sufragio.

Tenemos entonces por un lado, que en los regímenes democráticos, el pueblo asume la categoría de elector, siendo el voto el instrumento idóneo de participación popular y el único mecanismo reconocido para la sucesión del poder. Por otro lado, la antítesis de la democracia es el régimen totalitario, en cuanto excluye la renovación periódica del gobierno mediante la consulta a la comunidad. El autoritarismo no obedece a una circunstancia coyuntural, más bien es un problema de índole estructural como resultado de las contradicciones internas generadas por la necesidad de mantener las condiciones indispensables para la reproducción del sistema.

1.2.2 CONFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Para cumplir con las obligaciones que tiene a su cargo, el Estado moderno realiza una constante división de actividades por medio de los tres órganos del poder público, correspondiendo al Ejecutivo la función de organizar y administrar los servicios públicos, entre los cuales figura el de la seguridad. Para esto se vale de las fuerzas armadas. Esta es una institución creada, equipada y adiestrada para la violencia y que basa su actividad en la aplicación de la fuerza coercitiva como medida represiva o en la amenaza del uso de la misma.¹³

¹³ DIAZ CARDONA FRANCIA ELENA. *Fuerzas Armadas, Militarismo y Constitución Nacional en América Latina*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.A.M., México, 1988.

Las fuerzas armadas (FF.AA.) están integradas por el ejército, la marina y la fuerza aeronáutica militar.

Todos los Estados que pretenden manifestar un régimen democrático, como el caso de los países latinoamericanos, contienen idénticas regulaciones en cuanto al tratamiento jurídico de las fuerzas armadas y las atribuciones y limitaciones a que están sujetas.

Todos los países de América Latina definen constitucionalmente al ejército como una institución monolítica, disciplinada, jerarquizada y dependiente de los órganos de gobierno. Siendo el régimen republicano representativo y la forma republicana de gobierno lo que perdura en América Latina, las fuerzas armadas están autorizadas para cumplir roles internos y externos, con lo que tiene gran importancia en el juego político nacional.

A este respecto, el autor Alain Rouquié¹⁴ señala que las fuerzas armadas, como institución, canalizan subordinadamente dentro del Ejecutivo las presiones políticas que se generan en la sociedad, convirtiéndose el grupo militar en un grupo de presión que cumple frecuentemente con una serie de funciones políticas y, de esta manera, las fuerzas armadas son aparatos ideológicos de Estado que se ocupan de empresas claves y que integran un elemento más de los denominados "factores reales de poder" que constituyen el país real e imponen las decisiones tras la sombra del país formal.

Consecuentemente, la actitud de las fuerzas armadas en el campo político no se queda en la mera presión, sino que explotan la necesidad del gobierno cuando existe descontento en una parte importante de sus propios funcionarios. En América Latina -que es nuestro caso-, se han presentado todas las formas de intervención militar, incluso en aquellos países con una economía y una política más desarrollados. Esto se hace más evidente por una serie de indicadores conocidos, como es el reparto ostensiblemente desigual del presupuesto nacional.

¹⁴ ROUQUIÉ ALAIN. *Poder militar y sociedad política en Argentina: 1943-1973*. Tomo II, Emecé Editores S.A., Buenos Aires, 1983.

En la misma medida, en América Latina, las fuerzas armadas no sólo han intervenido en política como grupo de presión, sino también como grupo de mando desatando un proceso que excede los límites impuestos por la ideología liberal burguesa.

Idénticamente, la presión del ejército es ejercida a través de los mismos medios utilizados por los demás grupos de presión y, cuanto más complicada sea la red de alianza y vínculos del oficial con los líderes políticos, será mayor el peso que pueda ejercer. Ahora bien, la organización militar, en cuanto grupo de presión, no es una asociación voluntaria que actúa sobre los organismos del gobierno, sino que es un órgano de gobierno que desarrolla nuevos métodos de intervención, manteniéndose imparcial y, por ser una institución del Estado, su presión suele ser discreta. Aquí cabe señalar que el aparato castrense es el aparato ideológico que más garantías ofrece a las clases dominantes, siendo el único grupo suficientemente organizado para ejecutar un proyecto de cohesión social en torno a un mismo interés de clase, siendo su mayor garantía la capacidad de sanción de que dispone y el interés en conservar ese sistema, asegurando con ello una posición de privilegio.¹³

1.2.3 EL MILITARISMO Y LA INTERVENCIÓN MILITAR.

El militarismo se usa comúnmente para designar la tendencia de las instituciones militares y de los militares mismos a extender su participación en el gobierno civil de una nación, desplazando o sustituyendo a los elementos civiles. Su significado se origina históricamente en razón con las constantes incursiones de los militares latinoamericanos en los gobiernos de sus respectivos países, haciéndose más manifiesto a partir de 1930.

¹³ ROUQUIÉ ALAIN. *Argentina, hoy. Siglo XXI Editores, México, 1982.*

Frecuentemente, el término militarismo se asocia con el de golpismo, siendo empleados ambos como sinónimos.

Esta tendencia de las fuerzas armadas latinoamericanas ha sido objeto de estudio para determinar las causas que la provocan y el hacerse cargo del poder político. Una de éstas causas es tratar de fijar cual ha sido la función y el papel que les corresponden desempeñar a las fuerzas armadas, supeditadas al gobierno civil, como la seguridad interna y la defensa externa. Del mismo modo, las fuerzas armadas conforman una entidad exterior al poder político y, por lo tanto, constituyen un sector aparte que está por encima de los intereses particulares de los distintos grupos, clases o fracciones que componen la estructura social de una nación.¹⁶

Se entiende, del mismo modo, que las funciones de las fuerzas armadas se cumplen dentro de los marcos legales institucionalizados por las Constituciones de las repúblicas burguesas. Estas fueron el modelo a seguir por los países de América Latina. Así lo destaca Edwin Lieuwen: "El militarismo latinoamericano se caracterizó porque su horizonte no se extendía más allá del escenario nacional. Sus características no fueron la gloria militar, el chocar de sables y la conquista exterior, sino la guerra civil, la lucha por el poder político y la oportunidad de explotar y oprimir a la población civil".¹⁷

Después de la Segunda Guerra Mundial, la órbita norteamericana entra en una situación de dependencia política y militar total, creándose el sistema interamericano como integración militar obligatoria de América Latina con Estados Unidos. Las misiones militares europeas darán paso a las misiones norteamericanas y del nacionalismo inculcado por las primeras, se seguirá la defensa de los valores extranjeros representados en los intereses capitalistas. Entre 1952 y 1955 se suscriben convenios en los que América Latina acepta la ayuda de los norteamericanos en equipo de guerra y material técnico, con el compromiso de limitar las relaciones comerciales con los países socialistas y permitiendo el establecimiento de misiones militares de Estados Unidos.

¹⁶ Véase más detalladamente en VARIOS AUTORES. *Diccionario de Ciencias Sociales*. Vol 2. Instituto de Estudios Políticos, UNESCO, Madrid, 1976.

¹⁷ LIEUWEN EDWIN. *Armas y política en América Latina*. Editorial Sur, Buenos Aires, pág. 37.

Asimismo, el deterioro de las economías latinoamericanas y los enfrentamientos constantes entre el pueblo y las burguesías dominantes, lleva a los ejércitos a convertirse en unidades estratégicas subalternas que transforman sus objetivos nacionales en objetivos horizontales de clase. Es entonces cuando se acrecenta la importancia de las fuerzas armadas en función del debilitamiento de las instituciones y los partidos civiles y, en este proceso, las fuerzas armadas dejan de ser medios y adquieren fines e intereses propios, transformándose en un partido político *sui generis* "liderado por un nuevo tipo de político armado o de militar político".¹⁸

Hacia 1961, emerge una variación de la doctrina militar, redefiniendo el papel de las fuerzas armadas. A Estados Unidos le corresponde la tarea de disuasión y contención general del comunismo internacional, mientras a Latinoamérica le compete la misión de impedir acciones subversivas al interior de sus territorios.

Para entonces, empieza la propagación de movimientos guerrilleros inspirados en el ejército cubano, obligando a Estados Unidos a orientar una política militar de apoyo a las acciones de contrainsurgencia. La doctrina militar del Pentágono se convierte en una elaboración de tipo ideológico-político, poniendo énfasis en la acción psicológica y organizando a los ejércitos latinoamericanos para el nuevo tipo de guerra contra la experiencia del Castro-comunismo. Las fuerzas armadas de América Latina comienzan a recibir una intensa demostración del peligro marxista, siendo inducidas a participar e incluso a poderarse del gobierno, conteniendo el riesgo de que la institución fuese absorbida y fraccionada por la acción subversiva.

Es de este modo que el concepto de defensa nacional empieza a reemplazarse por el de seguridad nacional, produciendo un cambio ideológico al interior de las fuerzas armadas. De la misma manera, resurge el concepto de filosofía política de la doctrina de la seguridad nacional (DSN), la cual tiene sus raíces en el pangermanismo del siglo XX, y que a partir de la Segunda Guerra

¹⁸ KAPLAN MARCOS. *Militarismo, crisis políticas y relaciones internacionales en la América Latina contemporánea*. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. México, Núm. 39, Año XIII, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M., sep.-dic. 1980.

Mundial comienza a ser difundida en el continente americano, para desarrollarse de manera autónoma y alcanzar su máxima expresión en las dictaduras del cono sur de América. Los gobiernos militares que se legitiman por la DSN tienden a adoptar un estilo de desarrollo neoliberal que en teoría persigue la estabilización y el desarrollo económico; pero que muy pronto conduce a un mayor grado de dependencia, agravado por una acentuada concentración de la riqueza, altas tasas de desempleo, gran endeudamiento y la caída vertical de los salarios reales, originando el aumento de la inflación y las diferencias sociales.

Esta doctrina sirve más para disimular la ilegitimidad de los gobiernos, que para fundamentar una nueva legitimidad.¹⁹ Igualmente, al ampliar el espectro de sus amenazas, la DSN otorga una base corporativa a la intervención política del ejército, pero no sienta las bases de un nuevo poder. La DSN proporcionó el marco teórico que justificó la penetración del militarismo en la vida social.

Se entiende entonces porque el militarismo es la ideología que justifica el papel protagónico de las fuerzas armadas dentro de la sociedad y se manifiesta en todos los niveles de la comunidad: políticamente, en cuanto el militar realiza actividades políticas, tiene cargos de gobierno y participa en el medio diplomático; socialmente, porque intenta el predominio de los valores y criterios militares; institucionalmente, en la medida en que el cuerpo armado controla recursos financieros y sociales; culturalmente, mediante el traspaso a la vida intelectual del espíritu militar.

Entre más autoritario sea un régimen, más politizadas estarán sus fuerzas armadas, pues el gobierno civil estará más necesitado de acudir en su apoyo para seguir manteniendo el sistema de dominación. Esta ha sido la situación en América Latina, pues la clase dominante que se adjudica el ejercicio del poder político ha ido perdiendo terreno en la batalla social, degenerando en una militarización de la sociedad; son regímenes civiles supuestamente democráticos que fortalecen al aparato armado por medio de concesiones de

¹⁹ ROUQUIÉ ALAIN. *El Estado militar en América Latina. Siglo XXI Editores, México, 1982.*

orden político, viéndose obligados a tener en cuenta el consejo militar en las decisiones que adoptan.

Hay diferentes interpretaciones sobre las funciones institucionalizadas de las fuerzas armadas y sus reiteradas intervenciones a los gobiernos civiles, a quienes sustituyen, resumiéndose como sigue:²⁰

a) El intervencionismo se explica por el origen de clase de quienes ocupan rangos de jerarquía dentro de la institución castrense. En América Latina, las élites militares son reclutadas en su mayoría en las capas sociales medias, cuyos valores son exaltados por la institución militar.

b) La intervención creciente de los militares se debe al hecho de que las fuerzas armadas son los detentores de los medios de coersión del Estado moderno.

c) El intervencionismo se debe a la agudización de los conflictos sociales en América Latina que se halla en un proceso de cambio y transformación social, económica y política.

Para finalizar en este punto, quiero agregar que el militarismo, en tanto que intervención militar en el gobierno civil de una nación, es un fenómeno permanente en América Latina, aunque las causas determinantes pueden diferir y, aún cuando la intervención de las fuerzas armadas no sea directa, es la institución militar la que fija las líneas directrices de la política nacional e internacional en mayor o menor medida.

²⁰ Idem (18).

1.2.4 LA DICTADURA MILITAR.

Aunque América Latina se caracteriza por una tradición constitucional identificada con la legalidad y la democracia representativa, estos valores no han sobrevivido a las tremendas convulsiones que han originado en dictaduras. La región se ha caracterizado por una tradición autoritaria, reforzada por el deficiente desarrollo de la economía y por el clero conservador.

En 1935, todos los países latinoamericanos -excepto cuatro- estaban bajo el mando militar; en 1945 hubo un auge democrático, el cual desapareció en 1950, cuando las naciones retornan al sometimiento castrense. En 1960 se reactiva el problema golpista con la propagación de la doctrina de la seguridad nacional hasta casi mediados de los 70 y, en los 80 se retorna a un panorama democrático general.

Cuando la sociedad presenta conflictos sociopolíticos agudos que van generando un desplazamiento del consenso general hacia otros grupos, el desorden y la inestabilidad política dan pie al cuartelazo, sintiéndose las fuerzas armadas conferidas para restaurar el equilibrio, dada su función constitucional de garantizar el orden y por ser el único grupo con la autoridad y consistencia para sustituir al grupo dominante, apoyados con justificar la toma del poder objetando que el régimen derribado se ha destruido a sí mismo por la descomposición y la corrupción del sistema, evidenciando que el poder civil es incapaz de continuar dirigiendo el conjunto social, exacerbando el sentimiento popular al grado de que las fuerzas armadas deben intervenir para evitar el derramamiento de sangre.²¹

Tenemos así que la mayoría de los golpes de estado efectuados contra regímenes democráticos han sido justificados como desviaciones transitorias de la democracia, en función de la necesidad de enmendar una situación patológica existente dentro de la estructura política.²²

²¹ STEPAN ALFRED. *Los militares y la política*. Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 1974.

²² *Idem* (15).

Si bien la figura del golpe militar carece de sustrato jurídico, en ocasiones el ejército ha llegado a invocar la legalidad de su intervención con apoyo en la norma constitucional que confía a la institución armada la defensa de la integridad de la nación.

Para que sea efectivo el golpe militar, depende de la estrategia y habilidad de los líderes militares para obtener la obediencia de la institución, pues si ésta está fraccionada se corre el riesgo de que surja una resistencia al interior.

Contamos así, por un lado que el replanteamiento del orden militar se da a partir del golpe de Estado en Brasil en 1964, dando inicio a un nuevo ciclo de este fenómeno. Al contrario del militarismo tradicional donde la fuerza armada sustituye temporalmente a una clase dirigente debilitada, surge el militarismo moderno donde los militares llegan al poder con el fin de quedarse en él, para modificar las estructuras existentes en vista a un desarrollo económico y social, tratándose de la implantación de verdaderas dictaduras que aspiran a gravitar permanentemente.

Por otro lado, no se puede afirmar que los golpes militares responden a los intereses de una sola clase, pues esto sólo revela una parte de la verdad histórica y no explicaría los casos de generales reformistas o revolucionarios que han mostrado tendencias modernizantes y abiertas, que no han actuado con el propósito de frenar los procesos de cambio. Los gobiernos militares que se perpetúan en el poder, por lo general no son como dictaduras unipersonales que dominan a las fuerzas armadas y las manejan según sus designios personales.²³

Un instrumento importante del aparato de gobierno dictatorial es la creación de organismos asesores del Ejecutivo en materia política, los cuales orientan al jefe de Estado en ejercicio de sus facultades legislativas. El más importante de ellos es el Consejo Nacional de Seguridad, por encima de comités militares o consejos de desarrollo.

²³ Idem (14).

Al Consejo Nacional de Seguridad le compete la planeación de la estrategia nacional vinculada a la seguridad del Estado, así como establecer los organismos necesarios para la defensa y las políticas internas y externas. De igual modo, se ve fortalecido este consejo por los organismos de inteligencia y por los aparatos represivos del Estado. El comportamiento de los militares en el poder sigue un mismo proceso de evolución: difusión de ilegitimidad, toma del poder, represión generalizada y, finalmente, institucionalización del régimen.²⁴

La incursión militar es seguida por la integración de una Junta Militar de Gobierno, órgano superior de la administración al que se encomiendan las labores ejecutivas. Está integrada por los oficiales comandantes de cada una de las tres ramas de las fuerzas armadas bajo la dirección ejecutiva de uno de ellos que asume la condición de presidente de la Junta. Posteriormente se procede a dismantelar el orden institucional anterior, adoptando decisiones de carácter destructivo, y que van desde la destitución de funcionarios hasta la alteración de la estructura principal del sistema mismo, con la disolución del Congreso o la afectación de la Magistratura.

Al quedar institucionalizado el poder militar, se empieza a hacer uso de las consignas de orden y moralidad, haciendo a un lado el imperativo de entablar contacto directo con la población a la cual dice servir, siendo un poder que, lejos de sentar las bases de una democracia sólida, disminuye las posibilidades de establecer un sistema de gobierno representativo.

²⁴ Idem (13).

1.25 LAS FUERZAS ARMADAS COMO INSTRUMENTO EN EL GOBIERNO.

De todas las organizaciones sociales internas sólo una satisface el conjunto de los requisitos que las condiciones específicas del fascismo dependiente latinoamericano exigen del instrumento técnico que se hará cargo de las funciones de gobierno: Las Fuerzas Armadas.²⁵

Esta capacidad está dada, en primer lugar, por el carácter nacional, centralizado y jerárquico de su organización, capaz de extender homogéneamente su acción a la totalidad del territorio nacional. Las FF.AA. son las únicas instituciones que, junto con los partidos políticos, mantienen una organización nacional integradora, capaz de conservar rígidamente el sentimiento de pertenencia en cada uno de sus miembros y su respeto a una estructura jerarquizada y centralizada.²⁶

En segundo lugar, está la mentalidad y los principios normativos de las instituciones militares, particularmente en lo relativo a la disciplina y la lealtad. Ambos principios, que constituyen aspectos fundamentales de los Códigos de Justicia Militar, garantizan la subordinación absoluta de los miembros de las Fuerzas Armadas a sus superiores, así como la mantención de una solidaridad con las actitudes de éstos y de la institución toda, impuesta de manera coercitiva. Estas características permiten a las Fuerzas Armadas el desarrollo eficiente, desde la perspectiva de los objetivos perseguidos, de actividades que, como la intervención política o la represión, pudieran repugnar a algunos de sus miembros considerados individualmente.

Una tercera característica de las Fuerzas Armadas, fundamental en relación a los requerimientos planteados por las funciones gubernamentales del fascismo dependiente latinoamericano, es su monopolio legal de la violencia,

²⁵ BRIONES ALVARO. *Ideología del Fascismo Dependiente*. Editorial Edicol S.A., México, 1978.

²⁶ En una categoría similar podrían considerarse a algunas iglesias que, como la católica, mantienen estructuras nacionales. Sin embargo, sólo los institutos armados cumplen con el resto de los requisitos impuestos por el nuevo esquema de dominación.

que permite la integración de las funciones administrativas y represivas que debe ejercer simultáneamente la organización en el gobierno, en condiciones del aislamiento social involucrado por la aplicación de la política económica que realiza los intereses del bloque dominante.

Por otra parte, las instituciones castrenses latinoamericanas son propietarias de una dilatada tradición de intervenciones políticas que las ha llevado, quizás en excesivas ocasiones, a cumplir funciones administrativas de gobierno a través de una integración institucional, obteniendo así una experiencia práctica y un sentido político imprescindibles para la exaltación de esas tareas en las nuevas condiciones.

Como ya se ha mencionado, las Fuerzas Armadas latinoamericanas son poseedoras de una doctrina político-militar, la de la seguridad nacional, que sirve de marco ideológico específico para su propia intervención como apéndice político del nuevo bloque dominante en las funciones de gobierno y permite su integración, en esta calidad, en el contexto político internacional en el que se desarrolla la nueva modalidad de acumulación continental. Cabe comentar que la DSN permite el desarrollo de una interpretación política relativamente compleja de la realidad, a partir de definiciones tan simples como una que se utiliza oficialmente en Chile y que la describe como "...la capacidad del Estado para garantizar su supervivencia, manteniendo su soberanía e independencia material y espiritual, preservando su forma de vida y posibilitando el logro de sus objetivos fundamentales".²⁷

De este modo es que las Fuerzas Armadas terminan revelándose objetivamente como el instrumento técnico necesario para ocuparse de las funciones gubernamentales directas en condiciones del fascismo dependiente, y como no existen condiciones objetivas para lograr un apoyo de masas que sustente a un partido, tampoco pueden desarrollarse las condiciones subjetivas que enmarquen ese apoyo.

²⁷ Definición utilizada por el Coronel Alejandro Medina Lora, Director de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins. Área de Estudios de Seguridad Nacional de Chile, Casa de Chile, México.

CAPITULO II

LA REVOLUCION SOCIALISTA Y EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR.

2.1 EL PROCESO REVOLUCIONARIO Y EL ASCENSO DEL SOCIALISMO AL PODER.

La historia contemporánea de América Latina comprende aproximadamente de 1880 hasta nuestros días. Este proceso corresponde con el ascenso y crisis del imperialismo y del sistema capitalista mundial. Se empieza a desarrollar un nuevo tipo de empresas conocidas como el capital monopólico, en las antiguas potencias coloniales europeas y en Estados Unidos. Estas empresas empiezan a ejercer gran influencia en los aparatos del estado, combinando las antiguas formas de expansión colonial con otras nuevas. Las conquistas de los pueblos más débiles y menos desarrollados se realizan con modernas técnicas militares; la imposición de gobernadores y la retención de los pueblos; el comercio colonial se asocia con el "libre comercio", imponiendo bajos precios a las mercancías primarias y altos precios a las industriales.

A esa historia le hace frente otra de luchas de resistencia y liberación, donde las masas populares pugnan por no ser sometidas ni explotadas. Estas luchas se fueron dando progresivamente en distintas etapas.¹ La primera etapa

¹ Para un análisis más detallado sobre las diferentes etapas de los procesos de liberación en América Latina, consúltese: GONZALEZ CASANOVA PABLO. *Imperialismo y Liberación*. Siglo XXI Editores, México, 1979.

comprende de 1880 a 1905, donde se dan las primeras manifestaciones de protesta contra el naciente imperialismo. Una segunda etapa entre 1905-1920, donde se empieza a desarrollar la ideología del socialismo, al mismo tiempo que se sentían los efectos de la guerra mundial y de la Revolución rusa. La tercera etapa de 1920 a 1935, donde las luchas de liberación adquieren un nuevo perfil. La clase obrera cobra conciencia sobre su fuerza real y se crean condiciones favorables para el desarrollo de diferentes industrias (minería, bienes de consumo, industria metal-mecánica). Existe una cuarta etapa que va de 1935 a 1959. Aquí las organizaciones de las masas se propusieron proyectos confinados a los límites del capitalismo.

Para nuestro caso de estudio, consideraremos desde la quinta etapa a partir de la Revolución cubana de 1959. Esta fue el marco de inicio para que la historia de las masas en América Latina diera un giro completo y que no se había tenido de manera tan activa y tan rica en todos los aspectos desde las guerras de Independencia contra España.

De 1959 a 1973 se dieron tantos movimientos y experiencias entre las masas y las organizaciones de liberación que sólo una historia concreta muy detallada y que tomara rigurosamente en consideración los datos esenciales podría dar cuenta de ellos.

Fue de esta manera como la historia de la liberación latinoamericana desde 1959 se planteó de una manera más abierta como un proceso revolucionario anticapitalista. Partidarios y enemigos de la liberación cobraron conciencia de que las luchas de las masas, dirigidas por grupos revolucionarios de la pequeña burguesía, podían derivar en una revolución socialista.

Del mismo modo, los revolucionarios de los años sesenta entraron a la escena de una revolución anticapitalista con una ideología del marxismo-leninismo. Por otra parte, el imperialismo alentó la desmovilización de las masas con la represión, con la retórica y con el endeudamiento externo a corto y largo plazo, atenuando las demandas sociales peligrosas.

Para 1968 se fue dando un ascenso de las masas urbanas. La muerte del comandante Guevara (octubre de 1967) causó un enorme impacto en los medios estudiantiles y universitarios. La publicación de su *Diario* adquirió resonancia mundial, pues su pensamiento era de una clara línea marxista con una decidida opción por la acción revolucionaria, dejando sentir esta ideología a los pueblos sometidos por el imperialismo, principalmente en América Latina, lo que vino a dar mayor auge al marxismo intelectual.

Mientras tanto, el inicio de la década de los setenta se caracterizó por un nuevo intento de soluciones políticas. Las organizaciones progresistas y revolucionarias buscaron regresar a las luchas legales y políticas, siendo el proyecto más importante de entonces y el de mayor alcance en la historia de las luchas por el socialismo, dentro de la legalidad y el marco de la política del gobierno de la Unidad Popular en Chile (1970-1973). Este triunfo tuvo su base en el intento de promover un proceso revolucionario socialista a partir de una victoria en las urnas y, por primera vez en la historia de América Latina y del mundo, se permitió a una alianza de partidos populares basados fundamentalmente en la unidad comunista-socialista y un hombre que se declaraba marxista, acceder mediante elecciones democráticas a la dirección de los asuntos estatales de un país capitalista dependiente, conquistando el gobierno.²

Hacia 1970, la sociedad chilena pareció enfrentar un tipo particular de crisis. Por un lado, el modelo económico seguido hasta entonces resultaba incapaz de satisfacer las crecientes demandas de las masas y de los sectores sociales organizados que ejercían presión a través del sistema político. Como resultado de esto, se fue produciendo una pérdida de confianza en el modelo del desarrollo capitalista. Por otra parte, hubo una crisis del "estado de compromiso", en términos del aislamiento y descrédito sufridos por los actores políticos que hasta ese momento habían gobernado al país. Como reflejo de este hecho, resultó una aceptación creciente de ideologías socialistas de cambio,

² GONZALEZ GABANOVA PABLO. *América Latina, historia de medio siglo*. Vol. 1. Capt. "Breve historia de medio siglo en Chile". Siglo XXI Editores, México, 1988. Págs 291-291.

como serían las organizaciones de la izquierda unidas en la coalición Unidad Popular (UP), siguiendo a una erosión del centro político.³

De este modo, la Unidad Popular se formó como una coalición de partidos encabezada por el Partido Socialista y el Partido Comunista, siendo un frente de clases amplio, donde confluyen el grueso del proletariado urbano y rural, fuertes contingentes campesinos, una vasta masa de la pequeña burguesía -especialmente en sus estratos asalariados y burocráticos- y algunos segmentos de la mediana burguesía localizados en la industria de bienes-salarios. Por una parte, el Partido comunista posee una militancia fundamentalmente obrera y, por la coherencia de su línea política y su disciplina orgánica se cataloga como el partido más fuerte del bloque. Por otro lado, el Partido Socialista también tiene fuertes contingentes obreros, aunque su dirección es de origen pequeñoburgués. Existen otros partidos, como el Partido de Izquierda Radical, donde se concentran factores de la burguesía mediana y empleados de administración pública. Otro partido es el MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria, desprendido originalmente del Partido Demócrata Cristiano), integrado en su mayoría por profesionales e intelectuales de pensamiento cristiano. Este partido logró penetrarse en sectores campesinos y obreros de la mediana y pequeña industria. Finalmente, están dos agrupaciones menores como el Partido Socialdemócrata (con contingentes a nivel de la burguesía agraria media) y el API (Acción Popular Independiente, con sectores pequeñoburgueses y empresariales medios).⁴

Por lo tanto, se puede afirmar que la Unidad Popular constituía una alianza política que fue forjada a través de una dura y aleccionadora experiencia de medio siglo de luchas populares, cuyos antecedentes más relevantes se remontan a los años treinta, cuando se constituyó en Chile el Frente Popular, conformado básicamente por radicales, socialistas y comunistas.⁵

³ O'DONNELL GUILLERMO y otros. *Transiciones desde un gobierno autoritario. América Latina*. Vol. 2. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1988. Capt. 5 Págs. 147-185.

⁴ MISTRAL CARLOS. *Chile: del triunfo popular al golpe fascista*. Serie Popular Era, México, 1974.

⁵ ALMEYDA GLODOMIRO. *Liberación y fascismo*. Editorial Nuestro Tiempo, México, 1979.

Esta unión de partidos, por medio de la lucha de clases en el terreno político e ideológico, logró plantear su programa de gobierno como el de un camino pacífico al socialismo. No podía apremiar su programa a la sola implantación de reformas que derivaran en un capitalismo de estado de bases populares en mayor o menor grado. Para entonces, el reformismo estaba desprestigiado con el fracaso del proyecto reformista-conservador de Eduardo Frei,⁶ siendo demasiado ambicioso e ilusorio y, confirmado con los hechos ocurridos en otros países latinoamericanos, donde cundían las crisis, la depresión y las dictaduras.

Este proceso revolucionario iniciado en 1970 afectó a poderosos intereses extranjeros y nacionales tanto en lo económico como en lo político. En este sentido, era evidente que el surgimiento de un gobierno popular que se proponía la construcción de un sistema socialista en Chile venía a alterar el equilibrio de las áreas de influencia en el mundo, a la vez que modificaba ideológicamente a la región del cono sur de América. Por una parte, esta situación política era de importancia para la defensa de los intereses económicos de Estados Unidos en la región pero, por otro lado, para lograr la liberación nacional era necesario destruir toda forma de dependencia imperialista, siendo indispensable además, desplazar a la clase dominante en el interior del país, constituida por los latifundistas y por la burguesía industrial-financiera, avanzando de este modo en la construcción socialista.

Para entonces, el gobierno de la Unidad Popular atacó con decisión estos intereses externos e internos, desarrollando los objetivos centrales de su programa. Ningún movimiento político llegó tan lejos en cuanto a medidas revolucionarias adoptadas, a excepción de la revolución cubana, en la historia de América Latina, siendo el protagonista de este proceso revolucionario la clase trabajadora chilena, a través de sus partidos de clase, de sus organizaciones sindicales y de los nuevos organismos generados por las masas.⁷

⁶ Presidente de la República de Chile desde 1964 hasta 1970, sirviendo a su lema "revolución en la libertad". No se presentó a la reelección en 1970 y ante la falta de mayoría de cada uno de los candidatos (Allende, Tomic, Alessandri) apoyó, como dirigente de la Democracia Cristiana, a Allende, aunque luego se opuso a su política.

⁷ Ídem (2).

2.2 OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DE LA UNIDAD POPULAR.

2.2.1 EL PROGRAMA ECONOMICO.

El programa de la Unidad Popular en lo económico afectó muy gravemente al bloque de clases dominantes: burguesía monopólica industrial y financiero-comercial (quienes constituían la oligarquía financiera), al capital extranjero, especialmente el localizado en el sector primario exportador (cobre, salitre, hierro, etc.), afectando al capital imperialista norteamericano y, por último, el programa también apuntó a la destrucción de las bases económicas de los terratenientes agrarios.

Esta aplicación de una nueva economía se compondría de tres áreas básicas: la de propiedad social, la mixta y la privada. El proceso de transformación de la economía se inició con una política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por las empresas que poseía el Estado más las empresas que se expropiaran. Como primera medida se nacionalizaron las riquezas básicas en poder de capitales extranjeros y de monopolios internos. Otro sector sería mixto, porque se compondría de empresas que combinaran los capitales del Estado con los de particulares. En cuanto al área de Propiedad Privada, ésta comprendía aquellos sectores de la industria, la minería y la agricultura y los servicios en que permanecía vigente dicha propiedad en los medios de producción, siendo estas empresas en número la mayoría.⁸ En concreto, el cumplimiento del programa debía resquebrajar casi por completo los soportes económicos del bloque político dominante.

En el programa, se otorga importancia a la planificación, buscando constituir un "sistema nacional de planificación económica". Entre las principales pautas de desarrollo propuesto en el Programa Básico se debía: (1) Resolver los problemas inmediatos de las grandes mayorías. Para esto se

⁸ Unidad Popular. *Programa de gobierno*. Santiago de Chile, 1970.

volcaría la capacidad productiva del país (...) hacia la producción de artículos de consumo popular, baratos y de buena calidad; (2) Garantizar ocupación a todos los chilenos en edad de trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado; (3) Liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero; (4) Asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado (...); (5) Ejecutar una política de comercio exterior tendiente a desarrollar y diversificar las exportaciones (...); (6) Tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria.⁹

En lo que se refiere a las principales metas macroeconómicas, se trató de acelerar el crecimiento y aplicarlo en beneficio de los sectores más postergados.

Sin embargo, Chile estaba muy lejos en 1970 de ser un país en "vías de desarrollo", y todas las tendencias indicaban que la continuación de las políticas económicas seguidas no permitía esperar cambios en esa situación, ni a mediano ni a largo plazo, pues en primer lugar no bastaba simplemente con traspasar formalmente la propiedad de las empresas privadas al Estado, por importantes que ellas fueran, para convertir el área de propiedad pública en sector dominante de la economía, ni bastaba tampoco la mera redistribución del ingreso, dentro de una economía de mercado, para reorientar las inversiones en función de la satisfacción de las más premiosas necesidades populares, por lo tanto debían de introducirse progresivamente en el funcionamiento de la economía de mercado, elementos de una economía socialista, como la planificación económica en función de la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo -en el ámbito de la producción y del consumo y en función del desarrollo autosostenido de la economía-.¹⁰

⁹ *Idem* (8).

¹⁰ ALMEYDA CLODOMIRO. *Documentos sobre América Latina. Mesa Redonda, 1970. "El socialismo en el mundo contemporáneo"*. CAUTAT, Rep. Socialista Federativa de Yugoslavia. Págs. 19-33

2.2.2 LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES.

En este ámbito, la secuencia que se le otorgó a los cambios estructurales en el caso chileno es significativa. Entre las grandes realizaciones sociales, las transformaciones recaen en un primer período en el sector agrario y en el sector primario exportador, donde prima el capital estadounidense y, de igual manera, el proceso revolucionario desatado a partir del triunfo de Allende comienza a chocar con la *institucionalidad* burguesa y a resquebrajarla profundamente.

Para entonces, la nacionalización de las riquezas básicas¹¹ se constituyó como el estandarte de la Unidad Popular. Se nacionalizó el conjunto de la Gran Minería del cobre, la cual generaba más del 80% de los ingresos de divisas del país con una productividad enorme. El salitre, (más del 95% del capital extranjero controlaba la producción), el hierro (30% de participación extranjera) y la gran minería del carbón.

De igual manera, las grandes empresas norteamericanas explotadoras del cobre chileno fueron expropiadas sin indemnización por el gobierno de la Unidad Popular y, para alcanzar este objetivo, se eligió el mecanismo de la reforma constitucional por ser el único procedimiento que permitía deshacer el proceso jurídico-económico derivada de la teoría colonialista de los contratos-leyes, que obligaban al estado chileno respecto a las compañías norteamericanas.

En cuanto a las tareas agrarias, el gobierno de la Unidad Popular pretendía eliminar las modalidades precapitalistas del gran latifundio tradicional (siendo éste el sector más débil de las clases dominantes) e impulsando el capitalismo agrario bajo formas democráticas basadas en la propiedad de tipo familiar (*farmer*). El programa de reforma agraria perseguía cinco objetivos principales: (1) Un cambio rápido en el sistema de tenencia de la tierra, eliminando los latifundios y creando cooperativas; (2) un cambio en las

¹¹ Objetivo principal del Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular.

relaciones en la agricultura y la economía, aumentando la producción y la productividad, eliminando el desempleo rural; (3) participación democrática del campesinado, mediante consejos y otras organizaciones; (4) planificación y reorientación de la producción agrícola, y (5) la eliminación del atraso y el aislamiento de los grupos rurales más pobres.¹²

Por otra parte, el sector financiero-industrial revestía mayor importancia estratégica que el sector latifundiaro para la Unidad Popular, pues este sector había sido la base de la política de desarrollo del gobierno de Frei, siendo el nervio central del capitalismo concentrado en Chile, por lo que fue el que enfrentó con mayor vigor al gobierno de Allende orientado a incorporar al área de propiedad social las empresas industriales monopólicas y/o aquellas que condicionan el desarrollo económico del país y el sistema financiero, entonces en manos del capital extranjero y nacional. Esta medida tenía un sentido revolucionario, por constituir una acción indispensable para dirigir la economía conforme a los planes gubernativos y por el desplazamiento del capital imperialista del sector productor de materias primas al sector industrial manufacturero.¹³

Fue así como la Unidad Popular se proponía reemplazar a partir del área de propiedad social al predominio de la estructura capitalista por el predominio de relaciones socialistas de producción. La burguesía colaboró -sin querer- para el éxito de éste objetivo, pues en los primeros meses del nuevo gobierno, un gran número de empresarios crearon una situación de desorden económico, utilizando maniobras como el reducir al mínimo sus niveles de producción, despedir trabajadores, retirar su capital del país o huyendo y abandonando sus empresas. Eran los tiempos de pánico financiero originados por el propio ministro de Hacienda¹⁴ del presidente Frei y del asesinato del

¹² Un análisis más detallado sobre los cambios estructurales llevados a cabo por el gobierno de Salvador Allende se puede encontrar en: BARRACLOUGH BOLON y otros. *Chile: reforma agraria y gobierno popular*. Ediciones Periferia, Buenos Aires, 1978.

¹³ *Idem* (2).

¹⁴ El democristiano ministro de Hacienda, A. Zaldívar, en septiembre de 1970 pronunció un discurso que sembró el pánico financiero. Como luego certificarían los documentos de la International Telephone and Telegraph Co. (ITT), tal discurso era parte de un plan sedicioso preparado por la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA).

comandante en jefe del ejército general René Schneider, provocados como parte de la conspiración contra el ascenso de Salvador Allende al gobierno.

Dada su importancia, la amplitud del área social de la economía dependía gradualmente de la conciencia de clase y de la voluntad revolucionaria de los trabajadores y, en efecto, en la participación de los trabajadores se registró el mayor desarrollo de conciencia social y las más grandes movilizaciones de las masas trabajadoras. Su participación alcanzó formas extraordinarias en el último año de gobierno. Miles de obreros, empleados y técnicos tuvieron la experiencia de dirigir las empresas en que laboraban, decidiendo asuntos importantes. Los representantes de sindicatos y federaciones participaban en los órganos superiores de gestión económica. Esta experiencia fue quizá el más grande logro histórico del gobierno de la Unidad Popular, haciendo sentir a los trabajadores lo que es una sociedad democrática dirigida por ellos mismos.¹⁵

En síntesis, el proyecto de profundas transformaciones contemplaba un tránsito "político-institucional", no violento, principalmente de las estructuras económicas y sociales, las cuales se iban modificando gradualmente venciendo la resistencia que el imperialismo y la burguesía opondrían también dentro de las leyes democráticas establecidas y susceptibles de ser ampliadas considerablemente. Sin duda, estos cambios permitirían generar nuevas relaciones de fuerza entre las clases de manera que la transformación de las estructuras políticas se realizaría a continuación y con el menor costo social posible, pues desde su inicio, el gobierno popular pretendía extraer su mayor cuota de poder de la legalidad mediante la cual había asumido el Poder Ejecutivo.¹⁶

¹⁵ *Idem* (2).

¹⁶ SMIRNOW GABRIEL. *La revolución desarmada (Chile 1970-1973)*. Serie Popular Era, México, 1977

2.23 LA POLITICA EXTERIOR.

En este contexto, el gobierno de la Unidad Popular se orientó, desde el principio, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, defendiendo los principios de no intervención en los asuntos internos de los estados, de igualdad jurídica entre ellos, de respeto a su soberanía y del derecho de autodeterminación. En este sentido, avocó sus esfuerzos tanto en relaciones bilaterales como multinacionales, hacia la consolidación de la paz y la cooperación internacional, extendiendo las relaciones diplomáticas y comerciales de Chile a otras naciones. En el contexto latinoamericano, se mantuvo en favor de la reducción de armamentos.

Chile se incorporó al grupo de países llamados "no alineados", por su lucha contra el retraso y la dependencia de hegemonías extranjeras y por su comunidad de intereses con pueblos de Asia y África. Apoyó en el seno de las Naciones Unidas el reconocimiento de los legítimos derechos de la República Popular China y condenó la guerra contra Vietnam.

Este mismo procedimiento se dejó sentir cuando el gobierno de la UP abrió un proceso a las relaciones de dependencia de América Latina respecto de Estados Unidos, exponiendo la crisis del sistema interamericano y el desequilibrio de poder existente entre la potencia imperialista y los países latinoamericanos. Chile, en conjunto con otros países abre la posibilidad de un desarrollo común y de integración subregional con la creación del Pacto Andino, asegurando la sustitución del mecanismo norteamericano que imponía su voluntad.

En el mismo sentido, los fundamentos de la política internacional del presidente Allende se referían reiteradamente a la situación de las naciones de América Latina y su lucha por sacudirse de la dependencia, procurando eliminar la estructura socioeconómica de poder que origina la explotación de clases, perpetuando el retraso y la pobreza. Sin embargo, la política internacional independiente inaugurada por el gobierno de Allende constituyó un ejemplo

"deplorable", contribuyendo a alterar la correlación de fuerzas en América Latina y sus relaciones con Estados Unidos.¹⁷

Cabe comentar en este punto, que la política internacional de Estados Unidos no se orienta sólo por intereses económicos de sus empresas monopólicas, sino que se guía principalmente por consideraciones estratégicas y de prestigio mundial y, el escape de cualquier país de América Latina -su zona de influencia- de su control político constituye un riesgo que siempre ha tratado de evitar.

Frente a estas afirmaciones anteriormente expuestas, el gobierno de la UP actuó en el plano de las relaciones internacionales con extrema prudencia, y si bien es cierto que mantuvo "buenas relaciones" con los gobiernos vecinos, no lo es menos que toda la zona adquiría en ese período caracteres de extrema inestabilidad, que solamente era contrarrestada por la presencia de las diferentes fuerzas armadas. Además, la política exterior se orientó a incrementar y consolidar las relaciones con los países socialistas señalando "el papel fundamental de dichos Estados en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y en el desarrollo de los países atrasados y dependientes".¹⁸

También fue intensificada la presencia de Chile en los organismos internacionales, especialmente en las Naciones Unidas, donde el propio presidente Allende denunciaba la acción imperialista contra Chile. En la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno de la UP decidió no retirarse de ella, sometiéndola sin embargo desde su interior a fuerte crítica, denunciando la profunda crisis de la OEA y la necesidad de replantear radicalmente el problema de las relaciones interamericanas en términos de mayor realismo. Del mismo modo, se denunció la escandalosa "connivencia entre la ITT (un importante conglomerado internacional) y funcionarios responsables de una agencia del gobierno norteamericano en gestiones

¹⁷ *Idem* (2).

¹⁸ ALMEYDA CLODOMIRO. *Discurso Asamblea General OEA, San José de Costa Rica, 1971.*

destinadas a intervenir en la política interna de Chile y a torcer la voluntad democrática de su pueblo".¹⁹

Resultaba evidente que el triunfo de la UP llevó el peligro a las puertas de todos los regímenes del cono sur del continente, cuyos pueblos veían con esperanzado optimismo la posibilidad de una nueva época de independencia, de democracia y de justicia para sus aspiraciones. Ante esto, el gobierno norteamericano y sus organismos contrarrevolucionarios, la CIA y los servicios de inteligencia de la marina, actuaron para "desestabilizar" al gobierno chileno y provocar su caída, puesto que los organismos públicos y privados de EU tenían importantes intereses que defender, como las grandes empresas transnacionales ITT, Kennecott, Anaconda y otras.

2.3 LA CONTRARREVOLUCION Y LA CRISIS POLITICA DE LA UNIDAD POPULAR.

Como referencia, el gobierno de la Unidad popular desarrolló su programa entre dos golpes militares: el primero, ya mencionado, se frustró con el asesinato del general Schneider en octubre de 1970, y el segundo derrocó de la manera más sangrienta tres años después al frágil gobierno popular, con la intervención de las mismas fuerzas sociales, económicas, políticas y militares del primer golpe.

Hacia mediados de 1973, Chile se ve sumido en una profunda crisis que, en las propias palabras de Salvador Allende es a la vez "económica, social y política".²⁰ Esta crisis tuvo sus raíces inmediatas en el proceso revolucionario que irrumpió en el país a partir del acceso de la Unidad Popular al gobierno, originando una "dualidad de poderes" provocada porque dentro del seno del

¹⁹ ALMEYDA CLODOMIRO. *Discurso Asamblea General OEA, Caracas, Venezuela, 1973.*

²⁰ *Idem* (4).

aparato estatal burgués, la rama del ejecutivo es el elemento más decisivo en lo que se refiere al poder civil y, el bloque dominante tradicional fue casi completamente desplazado, afectando gravemente estos sectores en lo económico y, en menor medida, en lo político.

Esta crisis tuvo su desemboque con la creación del "gabinete de seguridad nacional", también conocido como "Unidad Popular/generales". Las fuerzas armadas-partido se situaron con un carácter prácticamente permanente en el gobierno y por tanto, el gabinete "UP/generales" puso "a la orden del día" entre los cuadros el problema de la toma de partido en la lucha política. Las FFAA. forzosamente se politizaron, pues al convertirse la mayoría de las provincias del país en zonas de emergencia, cumplieron una función política, asegurando el mantenimiento de los servicios esenciales y reprimiendo las huelgas de trabajadores insurrectos, poniendo a las FFAA. en una situación muy próxima a la de los partidos de la UP y agudizaba por tanto, en el interior de ellas, la contradicción entre el grupo golpista y el grupo leal, encabezado por el general Prats.²¹

Mientras tanto, la contrarrevolución se constituía fundamentalmente en el interior por el Partido Nacional, representativo de la oligarquía terrateniente, la Democracia Cristiana, partido policlasista dirigido por sectores de las empresas extractivas y manufactureras asociadas al capital norteamericano, y otros partidos menores como la Democracia Radical y el Partido de Izquierda Radical. Todos estos partidos en conjunto constituían mayoría en el Congreso nacional.

Pero para llevar a cabo la contrarrevolución, no bastaba maximizar el uso de su control ideológico sobre la sociedad. Era necesario tener a su disposición la violencia física que se encontraba prácticamente monopolizada por las Fuerzas Armadas. Tarea que no era difícil, dado que los valores consustanciales con esas instituciones, como los de orden y disciplina, jerarquía y obediencia, tienen un explicable e indudable sesgo conservador. Si a ello se agrega que en el

²¹ CARRANZA MARIO ESTEBAN. *Fuerzas Armadas y Estados de excepción en América Latina*. Editorial Siglo XXI, México, 1978.

caso chileno, la subcultura político-militar no les permitía ver en el conflicto social otra dimensión que aquella que a sus ojos enfrentaba al orden contra la anarquía, y a la patria contra el comunismo, se explica el por qué esas Fuerzas Armadas pasaron por sobre su obediencia profesional y su juramento de lealtad al régimen constitucional, cuando vieron o fueron inducidos a ver, que lo que estaba en juego en la pugna era Chile mismo y el orden social, que ellos juzgaban como condición necesaria para la subsistencia de la patria y su progreso.²²

Esta reacción del bloque dominante tradicional tuvo una estrategia muy marcada para recomponer sus filas y organizarse mediante dos líneas. La primera reclama el derrocamiento inmediato del gobierno, mediante un golpe militar a cualquier precio. La segunda es la que pretende cercar al gobierno, socavar sus bases de apoyo popular y maniatarlo por completo. Los sectores terratenientes son los principales impulsores de la primera línea y los democristianos freístas los que impulsan especialmente la segunda. No se trataba de dos líneas contradictorias sino complementarias. La segunda se pone al servicio de la primera, prepara las condiciones *políticas* para el derrocamiento del gobierno mediante un golpe militar. Para este propósito, la burguesía desencadenó un clima político y psicológico y se empeñó desde un comienzo en crear la imagen de inseguridad y de desorden ante la opinión pública que se desarrolló mediante el sabotaje, la agitación, el terrorismo, la paralización de la producción por los patronos, las campañas publicitarias de descrédito de las autoridades, los pronunciamientos de la Corte Suprema, del Congreso nacional, de la Contraloría General de la República, de los partidos de oposición, de los colegios profesionales, servían de igual medida para alcanzar sus objetivos y, del mismo modo, la burguesía cerraba las puertas a toda posible "salida política" y haciendo funcionar maquiavélicamente los órganos de la institucionalidad, que estaban bajo su control, provocando una ruptura definitiva del estado de derecho.²³

²² *idem* (10).

²³ *idem* (8).

Es cierto que no había en Chile una paz idílica, pues el gobierno de la UP se encontraba en medio de una intensa lucha social, lo que necesariamente genera intranquilidad y desorden, pero en ningún momento las cosas llegaron al estado de caos como lo pretendía hacer creer la derecha reaccionaria y como efectivamente quiso producirlo a través de sabotajes, atentados y desmanes provocados por los grupos conspiradores fascistas, pintando ante los ojos del hombre común una imagen del país, confusa y anárquica, que estaba sin embargo lejos de la realidad.²⁴

Lo cierto era que la alternativa del golpe militar vino como consecuencia del resultado de las elecciones celebradas en marzo de 1973 donde, a pesar de que el Congreso, los tribunales de justicia, la Contraloría y con la totalidad de las fuerzas dominantes en contra de las medidas del Ejecutivo, los partidos de la Unidad Popular obtienen el 43.4% de la votación gracias al respaldo político de las masas trabajadoras. Con este resultado, se hechó por tierra la esperanza de derrocar al gobierno popular por medio de una acusación constitucional, por un golpe blanco o institucional, alzando como única alternativa para los conspiradores el golpe militar. La Unidad Popular no aprovechó esta coyuntura para contragolpear a sus enemigos con una ofensiva de masas y, en cambio, la contrarrevolución aceleró el enfrentamiento latente que amenazaba convertirse en una guerra civil.²⁵

²⁴ *Idem* (10).

²⁵ Conforme al pensamiento marxista, el Estado, en cuanto poder político, tiene siempre dos aspectos, uno *democrático* como expresión de consenso social y otro *dictatorial*, como expresión del interés de la clase dominante en la sociedad, encarnado coercitivamente en un derecho. Ahora bien, es este aspecto coercitivo-clasista del Estado, el aspecto fundamental, por cuanto en toda sociedad de clases los intereses del conjunto de la sociedad son interpretados e instrumentados en función de las necesidades de reproducción del orden social imperante. Piénsese, por ejemplo, en lo que ocurre con la educación en la sociedad burguesa, donde la actividad del Estado para satisfacer las necesidades educacionales de la población, se realiza en interés y de acuerdo con las exigencias de la reproducción y desarrollo del sistema social. Repárese, sobre todo, en la misión de las Fuerzas Armadas, cuya existencia es legítima en razones de seguridad nacional, la que es interpretada en las sociedades de clase, identificando a la seguridad nacional con los valores e instituciones en que descansa el orden social vigente.

En el período de tránsito entre el capitalismo y el socialismo el sistema político también contiene estos dos aspectos. Es *democrático* para los trabajadores, vale decir para el conjunto de la sociedad, y *dictatorial* para con los intereses de las clases hasta entonces dominantes, a quienes se reprime institucionalmente para impedir la contrarrevolución y obligarlas a conducirse conforme al nuevo ordenamiento social que se va construyendo. En este período, la satisfacción de las necesidades sociales adecúa el carácter democrático que en esta etapa va asumiendo el

Por otra parte, la conspiración externa contra el gobierno popular se inició el mismo día de la victoria popular en los comicios del 4 de septiembre de 1970 y se prolongó por los tres años del gobierno de la Unidad Popular. Esto se reflejó fundamentalmente en el aspecto económico, pues la conspiración fue planeada y financiada por el gobierno norteamericano y las compañías multinacionales, ayudadas por la CIA, sabiendo de antemano que éste era el flanco más débil del nuevo régimen. Desde el inicio de la aplicación del programa básico, el gobierno de la UP empezó a recibir las extorsiones económicas, primero con la disminución, hasta la supresión total de los préstamos de la Administración Internacional para el Desarrollo (AID), del Eximbank, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, incidiendo esta situación dramáticamente en la balanza de pagos de Chile, cuya economía se mantenía profundamente dependiente del sistema capitalista mundial.²⁶ Entre las medidas tomadas para destruir la reputación económica chilena pueden incluirse: 1) la línea dura del gobierno norteamericano en las renegociaciones de la deuda exterior chilena, en París; 2) los embargos de las cuentas y depósitos chilenos en Nueva York logrados mediante acciones legales de las corporaciones Kennecott y Anaconda, esto para forzar el pago de sumas adeudadas bajo el acuerdo de nacionalización de empresas en Chile; y 3) las acciones agresivas de la Kennecott en Europa, para bloquear el pago a Chile por la mina de cobre El Teniente que había sido vendida en ese país.²⁷ De igual manera, se provocaron trastornos en el proceso productivo interno, afectando las operaciones normales de la Empresa Nacional de Petróleo, los Ferrocarriles del Estado, La Compañía de Acero del Pacífico, la línea aérea nacional, las empresas de la gran minería del cobre nacionalizadas y, en general, la industria y la agricultura. El imperialismo colaboraba en el desarrollo de la campaña

Estado, primando ahora el interés del conjunto de la sociedad por sobre el de las minorías hasta entonces privilegiadas.

Sin embargo, aplicada esta realidad al caso chileno, se entiende que la estrategia llevada a cabo por el gobierno de la Unidad Popular de preocuparse por preservar las libertades, dejando en un segundo plano la organización para enfrentar la violencia contrarrevolucionaria, originó que su pueblo careciera de todas las libertades y, por el contrario, sufriera de manera consecuente, la más cruda y despiadada de las violencias.

²⁶ *Idem* (10).

²⁷ Un enfoque más detallado sobre la penetración imperialista en los resquicios de la sociedad chilena para afirmar su posición hegemónica se puede analizar en: FARNSWORTH ELIZABETH y otros. *Chile: el bloqueo invisible*. Ediciones Periferia S.R.L., Buenos Aires, 1973.

mundial dirigida a exhibir el gobierno de Salvador Allende como una dictadura "marxista".

En los últimos meses del gobierno de la UP, la crisis económica se agudizó al extremo, y tanto las clases dominantes como algunos sectores proletarios de vanguardia percibieron que sólo se resolvería en el plano político, mediante formas dictatoriales abiertas (militar-oligárquica o proletario-popular, según el caso). Entretanto, la dirigencia UP buscó una salida centrista: el acuerdo con una fracción de las clases dominantes. Se trataba de mejorar la correlación de fuerzas, atrayendo y/o neutralizando a los sectores medios. Esta política, al no golpear con la dureza debida a las clases dominantes, terminaba por descargar la crisis económica en las capas medias que decía defender y también en los sectores populares menos organizados. En síntesis, se terminaba por debilitar la correlación de fuerzas entregando gratuitamente algunas capas medias a la derecha y además provocando desorientación y desunión en el proletariado.²⁸

En los siguientes cuadros se muestra la evolución electoral de Chile, destacando la creciente aceptación de la sociedad por el gobierno de la Unidad Popular.

²⁸ *Idem* (4).

CUADRO 1	1969	1970	1971	1973
Unidad Popular	889,490 36.9%	1'011,209 36.3%	1'401,357 50.5%	1'589,025 43.4%
Democracia Cristiana	716,547 29.8%	774,424 27.8%	723,623 25.6%	1'049,007 29.1%
Partido Nacional y Derecha Radical	582,130 24.2%	972,209 34.9%	619,861 22.0%	915,360 25.4%

(Nota: Se ha dividido la votación del año 1969 recibida por el Partido Radical en esa fecha, en los porcentajes que se establecieron en el año 1971 entre Partido Radical y Derecha Radical, para repartirlos en esa proporción entre Unidad Popular y Partido Nacional.)

CUADRO 2	1967	1969	1971	1973
Partido Comunista	346,105 14.8%	383,049 15.9%	479,206 17.0%	584,303 16.2%
Partido Socialista	324,965 13.9%	294,448 12.2%	631,939 22.4%	672,200 18.7%
Partido Radical	377,074 16.1%	313,559 13.0%	225,851 8.0%	134,008 3.7%
Democracia Cristiana	834,810 35.6%	716,547 29.8%	723,623 25.6%	1'049,007 29.1%
Partido Nacional	334,656 14.3%	480,523 20.0%	511,669 18.1%	767,663 21.3%
Derecha Radical	En este periodo, sus votos están incluidos en la columna del Partido Radical.		108,192 3.8%	147,697 4.1%

CAPITULO III

EL GOLPE DE ESTADO Y EL DESARROLLO POLITICO DEL REGIMEN MILITAR (1973-1989).

3.1 DESARROLLO DEL GOLPE DE ESTADO.

3.1.1 CAUSAS Y ORIGENES.

Con los resultados de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, la situación prevaeciente en Chile era más crítica, puesto que la oposición mantenía permanentemente y en varios frentes simultáneos la ofensiva contra las posiciones del gobierno de Allende y, a fines de abril las calles de la ciudad de Santiago se transformaron en auténticos campos de batalla, con centenas de heridos y detenidos por las acciones vandálicas de estudiantes demócrata cristianos y nacionales.

De esta manera, la fracción más decidida de la oposición burguesa, afirmaba a través del Partido Nacional:

" ...ha llegado el momento en que el Congreso... declare que el gobierno ha perdido definitivamente su autoridad y la legitimidad de su mandato... nadie

está obligado a respetar ni a continuar obedeciendo a una autoridad que no respeta ni obedece las leyes del país".¹

Por otra parte, el sector "duro" freista de la Democracia Cristiana pasaba a dirigir su partido, presidido, desde el 14 de mayo, por el senador Patricio Aylwin quien utilizaba expresiones como "desastre económico", "tendencias totalitarias del gobierno", "nueva burocracia estatal", "combatir el intento de la UP para establecer la dictadura por el estómago".

Mientras, los partidos populares intentaban defender las posiciones conquistadas, pero no estaban en condiciones de crear alternativas diferentes, pues la legalidad y la institucionalidad burguesas los maniataban, en tanto la tensión aumentaba: se había dado una huelga generalizada de los mineros del cobre y se producían nuevos enfrentamientos violentos en otras ciudades del país.

Sin duda, las causas que dieron origen a estos enfrentamientos y diferencias, era porque los trabajadores carecían del instrumento fundamental: la organización política que unificara sus luchas, les diera una perspectiva global, nacional, y condujera teórica y prácticamente a la realización de todas las medidas de carácter material que eran indispensables. Los sectores de la izquierda revolucionaria revelaron para entonces toda su debilidad, tanto orgánica como política, para generar una dirección que fuera la vanguardia del movimiento obrero.² De este modo, la izquierda revolucionaria se encontraba dispersa entre varias organizaciones que no estaban en condiciones, separadamente, de presentar un programa alternativo a los de la reacción y del reformismo.

Todas estas deficiencias dejaron ver que la izquierda revolucionaria no pasó jamás de ser una tendencia, de corresponder a amplios sectores del movimiento popular, de formar parte de la masa trabajadora, de existir principalmente en el interior de la Unidad Popular. Solamente se limitó a

¹ Diario *El Mercurio*. Santiago de Chile, 15 de abril de 1973.

² SMIRNOW GABRIEL. *La revolución desarmada (Chile 1970-1973)*. Serie Popular Era, México, 1977.

contestar, responder y criticar las concepciones de la "vía político-institucional", pero no levantó un cuerpo de proposiciones tácticas y estratégicas que conformaran un proyecto totalizador de transformación de la sociedad.

De este modo, se puede afirmar que la construcción de un partido revolucionario fue la tarea inconclusa de la clase obrera chilena y el eslabón más débil de la cadena forjada por los trabajadores para modificar la sociedad.

Por otra parte, la contrarrevolución representada por la Democracia Cristiana pretendía el sometimiento del Poder Ejecutivo al Parlamento, donde los intereses de la burguesía estaban mayoritariamente representados, dirimir definitivamente en favor de ésta el conflicto en torno a la gran propiedad industrial, el aplastamiento del movimiento popular, todo lo anterior con la presencia activa de las Fuerzas Armadas controlando al presidente desde el gabinete.³ Todos los mecanismos preparatorios del golpe estaban funcionando aceleradamente y, por otro lado, el movimiento popular intentaba desesperadamente conservar su fortaleza y generar nuevos centros de poder alternativos frente a la embestida reaccionaria.

Para fines de agosto, la táctica de demócrata cristianos y nacionales había logrado cuidadosamente todos sus objetivos: cuestionar ampliamente la legitimidad y legalidad del gobierno, generar un movimiento de masas en apoyo a su política sediciosa, debilitar la fuerza y consistencia de los trabajadores agrupados tras el gobierno popular y acentuar profundamente la relación favorable a los golpistas en las tres ramas de los institutos armados.

³ GARCIA PIO. *Las fuerzas armadas y el golpe de Estado en Chile*. Editorial Siglo XXI, México, 1974.

3.1.2 IMPORTANCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Desde la víspera de las elecciones presidenciales de 1970, las fuerzas armadas chilenas desempeñaron una importante *función política* en la formación y consolidación del estado capitalista dependiente.⁴

Las concepciones de la Unidad Popular sobre la defensa nacional y las Fuerzas Armadas (FFAA.) se planteaban ya en el propio Programa Básico.⁵ Dentro del proyecto existía la estrategia que suponía la aceptación obediente por parte de las FFAA. de toda transformación resuelta legal y constitucionalmente.

En general, las FFAA. se constituyeron y modelaron desde un principio en relación con objetivos nacionales, y no al calor de confrontaciones internas, y se comprende porque las FFAA. carecieran de una homogeneidad específica - es decir, que no estaban formados por elementos de la misma naturaleza - que suscitara reacciones ante medidas que afectaran a fracciones particulares de la burguesía. Esto se puede explicar en el sentido de que la izquierda revolucionaria, pese a tener un buen trabajo de penetración en las FFAA., especialmente entre soldados, clases y suboficiales, subestimó el espíritu de cuerpo de la institución en su conjunto y hábitos tales como la obediencia al mando, los cuales pudieron más que su propia realidad de clase. Si se reconoce que no existe adscripción de las FFAA. a intereses particulares de fracciones burguesas, de ello no se deduce mecánicamente que las FFAA. habrán de intervenir para salvaguardar los intereses globales de la burguesía, al momento que "se toque sustancialmente a las relaciones capitalistas de producción".⁶

⁴ ALAIN JOXE. *Las Fuerzas Armadas en el Sistema Político de Chile*. Editorial Universitaria, Santiago, 1970.

⁵ Se denominó así al Programa de Gobierno de la Unidad Popular suscrito el 17 de diciembre de 1969 por todos los integrantes de la coalición: Partidos Comunista Radical, Social Demócrata y Socialista, Movimiento de Acción Popular Unitaria y Acción Popular Independiente.

⁶ CASTILLO FERNANDO. *Las masas, el Estado y el problema del poder en Chile*. Cuadernos de la Realidad Nacional, núm. 16, abril de 1973, Santiago. Pág. 38.

La actitud que mantenían las FFAA. ante la Unidad Popular mereció los airados ataques de la derecha, hasta extremos demostrativos de la histeria que cegaba su inteligencia política. Los reaccionarios derechistas no cesaron nunca en sus afanes conspirativos y en sus incitaciones hacia las FFAA., mediante relaciones que sostenían de manera subterránea con los oficiales más decididamente golpistas. Pero durante toda una primera fase, sus intentos se estrellaron contra la falta de respuesta en las FFAA., donde las consecuencias de la conspiración de octubre de 1970, fracasada con el asesinato del General Schneider, se tradujeron en la pérdida de condiciones incluso para que se manifestaran las intenciones de los oficiales que le eran más proclives.⁷

Ante tales circunstancias, la reacción derechista recubrió sus incitaciones sediciosas mediante el uso de diferentes argumentos: el primero consistía en la negativa a que se aceptara un Gobierno Popular, de inspiración marxista y propósitos socialistas, recusado como engendro de un régimen totalitario, sometido a ideas foráneas y aun a potencias extranjeras. El segundo argumento impugnaba cada iniciativa del Ejecutivo como violatoria de la legalidad, la Constitución y el "Estado de derecho", al mismo tiempo que se reclamaba el pronunciamiento de las FFAA. para dar término al Gobierno. Un tercer argumento, más elaborado, requería la creación previa de las tensiones económicas y sociales, el clima de trastornos generales, que la reacción se aplicó a estimular mediante actos de sabotaje, terrorismo, especulación, acaparamiento, paralizaciones de la producción, y cuanto expediente estuvo a su alcance. Se responsabilizó entonces al Gobierno de provocar la lucha de clases, crear la división entre los chilenos, destruir la economía y poner así en riesgo a la seguridad nacional..., que reclamaba igualmente la intervención de las FFAA. para ser salvaguardada.⁸

En septiembre de 1972, se registró el primer intento grave de provocar el pronunciamiento de los militares, como fruto de la desesperación predominante en la burguesía. Se conoce como "Plan Septiembre" -aunque se llevó a cabo en el mes de octubre-, destinado a bloquear las comunicaciones en

⁷ Ídem (8).

⁸ Ídem (8).

el país, paralizar la economía, crear disturbios y atacar a las FFAA. con ocasión del desfile militar de fiestas patrias, para dar lugar así, como reacción, a su pronunciamiento. Este paro insurreccional fue liquidado y se creó un nuevo gabinete integrado por el Presidente y el Secretario General de la Central Unica de Trabajadores (CUT), y en representación de sus respectivas armas, el Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats, en la Cartera del Interior, el Contralmirante Ismael Huerta, en la de Obras Públicas y Transportes; y el General Claudio Sepúlveda, en la de Minería. De este modo, se dejaba ver una realidad objetiva: el proceso revolucionario había alcanzado una etapa crucial donde no era posible prescindir de las FFAA., pues la participación de los militares en el Gobierno se acentuó con la designación de uniformados a cargo de las empresas de distribución estatizadas y la Secretaría Nacional de Distribución.

De esta manera, a la burguesía no le quedaron dudas de que podía reducir al Gobierno por la fuerza y, del mismo modo había comprendido dos cuestiones importantes: primero era necesario sostener y acrecentar su respaldo de masas, inclinándolo de manera permanente a la oposición concreta en contra del Gobierno y, en segundo lugar, que sólo podría derrotarse al Gobierno si se contaba con la acción de las FFAA. o parte importante de ellas. El proyecto fascista de la reacción se guió por una política centrada en la acción extra institucional para constituir una "nueva organización política y social basada en tres fuerzas fundamentales: los partidos que estén dispuestos a construir y no a provocar el caos; las Fuerzas Armadas, cuya acción es indispensable para restablecer la disciplina y la eficiencia, e impulsar el progreso; y el poder gremial, que constituye la palanca del desarrollo y el factor de cohesión de la comunidad nacional".⁹ Para entonces, Eduardo Frei se había convertido en Presidente del Senado y se erigió a si mismo como contraparte personificada del Gobierno.

Por otro lado, ante los continuos ataques y presiones de los reaccionarios de la Democracia Cristiana, el 23 de agosto, el general Carlos

⁹ De la declaración de Jorge Fontaine, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio en Chile, marzo de 1978.

Prats renuncia a sus cargos de Comandante en Jefe y Ministro de Defensa:

"...Al apreciar en estos últimos días que quienes me denigraban habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad del ejército, he estimado un deber de soldado de sólidos principios no constituirme en factor de quiebre de la disciplina institucional y de dislocación del Estado de Derecho, ni servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del gobierno constitucional".¹⁰

Como consecuencia, el sucesor de Prats fue el general Pinochet: así se completaba un ciclo en el interior de la institucionalidad militar, pues los generales "constitucionalistas" habían impedido la deliberación entre la suboficialidad y la tropa y habían desanimado a los oficiales leales al gobierno, al mismo tiempo que fracasaban en su intento de mantener la disciplina por parte de los sectores "institucionalistas", que en esa fecha se preparaban abiertamente a asumir el poder.

Es indudable que la salida del general Prats selló la derrota militar del gobierno con anticipación al golpe militar que encontraría en sus filas una resistencia limitada y disminuida, pues esto abrió las puertas al revanchismo reaccionario y totalitario que se descargó con saña sobre los trabajadores y los militantes de izquierda principalmente.

¹⁰ Revista *CMo Hoy*, 31 de agosto de 1973. El primer número de *CMo Hoy* apareció el 16 de junio de 1972 y durante sesenta y cinco semanas consecutivas, la revista ostentó su carácter de órgano independiente, unitario, al servicio de la lucha por el socialismo. El 11 de septiembre de 1973, *CMo Hoy* fue clausurada y prohibida su circulación por sus reportajes sobre los acontecimientos de los Institutos Armados.

3.1.3 EL TRIUNFO DE LA CONTRARREVOLUCION.

El gobierno de la Unidad Popular acosado por el asedio financiero, económico, político y paramilitar del imperialismo y la reacción y debilitado por la agudeza de las luchas internas, al fin fue derrocado por la traición de los generales, que dieron término a un proyecto histórico pacífico de la clase obrera chilena y subyugaron al pueblo mediante el recurso de la más brutal violencia.¹¹

En las FFAA., el alejamiento de Generales leales del Ejército había sancionado la derrota de las posiciones constitucionalistas y, en los días precedentes al golpe de Estado, al Presidente Allende ya no le quedaba la incertidumbre de que se había conformado una correlación de fuerzas enormemente desfavorable en el seno de los Institutos Armados.

Se sellaron así la suerte del proceso revolucionario y la tradición democrática de Chile, sobre las que el fascismo descargó el 11 de septiembre su fuerza militar.

Ese mismo día, combatiendo personalmente a las fuerzas del ejército y la aviación que atacaban el palacio de La Moneda, con las armas en la mano, fallecía Salvador Allende, Presidente Constitucional de Chile, asesinado por la institucionalidad que había respetado hasta el final. Encarnación suprema de la voluntad de su pueblo, Salvador Allende conservó hasta el momento de su sacrificio su lucidez de conductor para señalar la realidad, exclamando al momento de tomar las armas para combatir: "Así se escribe la primera página de esta historia. Mi pueblo y América escribirán el resto."¹²

¹¹ GONZALEZ CABANOVA PABLO. *Imperialismo y Liberación*. Siglo XXI Editores, México, 1991.

¹² *idem* (8).

Junto a la resistencia del pueblo y los trabajadores, el golpe de Estado del 11 de septiembre encontró la resistencia de sectores militares, luchando en puntos aislados y de antemano condenados a la derrota. Los golpistas arrastraron consigo la inmensa mayoría de los cuerpos armados. Se desplomó de esta manera la estrategia defensiva de la izquierda que contaba con la acción de tropas leales, minoritarias, pero significativas, implicaría transformar el intento de golpe de Estado en una declaración de guerra civil, en que la fuerza del pueblo resultaría decisiva. De hecho, el desplazamiento previo de los principales mandos leales, y la traición de Pinochet, impidieron que se articularan posibilidades efectivas de combate, ya que las disposiciones previstas en las postrimerías del Gobierno reposaban en la acción conjunta con sectores constitucionalistas de las FF.AA.¹³

Desde antes de que Allende tomara posesión de su cargo se hizo notoria la intención del golpe e incluso su preparación y, mientras el pueblo y sus representantes respetaron la legalidad, las clases gobernantes la violaron antes y después del golpe hasta acabar con ella. Al término del plan reaccionario y en el curso del mismo no existió nunca milicia popular alguna ni regimiento comprometido con el proyecto revolucionario. El pueblo fue desunido, desarmado y vencido para dar pie a un sistema de represión general, cuyo cálculo de sangre constituyó un proyecto de esclavitud y explotación que pudo rendirle frutos al imperialismo durante tiempo limitado. Pronto la represión neofascista se volvió contra las propias fuerzas de las capas medias y la burguesía local que habían prestado su apoyo al golpe. Las luchas sindicales y parlamentarias en Chile habían forjado una clase obrera que luchaba para sí en el campo político, pero el imperialismo, la oligarquía y los militares traidores buscaron someterla con una despiadada "guerra interna".¹⁴

Por su parte, el imperialismo norteamericano, utilizando medios económicos, ideológicos y militares, a la CIA y el Pentágono: su aparato de espionaje y subversión, junto a la reacción chilena, intervinieron directamente

¹³ *Idem* (3).

¹⁴ *Idem* (11)

en la preparación del golpe de Estado militar fascista, en la creación de las condiciones necesarias para su realización: con todos los medios de que disponían presionaban activamente, interna y externamente, al Gobierno de la Unidad Popular.¹⁵

3.1.4 RAZONES DE LA DERROTA.

Ciertamente, el fracaso del gobierno y las causas del golpe de Estado no son suficientes para explicar la interrupción y derrota del proceso revolucionario: éste tenía también su propia dinámica, su fuerza y debilidad. Consideremos que de la historia de Chile durante el Gobierno de la UP se desprenden tres razones fundamentales que impidieron el éxito de los trabajadores chilenos por afirmar su predominio en la sociedad e iniciar la construcción del socialismo. Estas fueron: 1) La debilidad de la vanguardia política revolucionaria, 2) El escaso desarrollo de un poder alternativo a la institucionalidad burguesa y, 3) La unidad del aparato estatal represivo dependiente del Estado capitalista.¹⁶

Está comprobado que en el combate por el socialismo, los trabajadores necesitan de un estado mayor que eduque, discipline, organice y dirija el enfrentamiento en las coyunturas precisas: es indispensable una vanguardia revolucionaria, que defienda las banderas históricas, los objetivos estratégicos y, que asegure la irreversibilidad de las conquistas del proletariado en todos los planos.

La vanguardia revolucionaria chilena es aquella que no adscribió -y por tanto no es responsable del fracaso sufrido- a la política seguida por el

¹⁵ KUDACHKIN M. *La experiencia de la lucha por la unidad de las fuerzas de izquierda y las transformaciones revolucionarias*. Editorial Progreso, Moscú, 1970. Págs. 217-226.

¹⁶ *idem* (2).

gobierno y la cúspide de la Unidad Popular, y estaba formada por un sector del Partido Socialista, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), la Izquierda Cristiana y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Sin embargo, estas diferentes organizaciones no lograron coordinar su acción, establecer objetivos tácticos comunes, ni mucho menos plantearse la unificación de sus fuerzas. Como consecuencia de ello, no constituyeron una verdadera dirección y se mantuvieron en el terreno del cuestionamiento político seguido por la alianza que ejercía el gobierno. La educación, la disciplina y la organización que impulsaban las fuerzas revolucionarias chilenas fueron insuficientes ante la magnitud de las tareas planteadas

Como segunda razón, está la insuficiencia del poder popular para convertirse en un poder global alternativo a la institucionalidad burguesa y, esto se debió fundamentalmente a dos motivos: El primero fue la resistencia, el freno que le opuso un sector de la UP y el gobierno, que temían ver sobrepasado su esquema táctico en una dinámica incontrolada por ellos. El control que ese sector ejercía sobre parte de los trabajadores le restó fuerza al desarrollo del poder popular y, cuando se decidió impulsarlo en conjunto con la izquierda revolucionaria ante el ataque de la reacción, ya era demasiado tarde para estructurar un organismo centralizado que representara un modelo propio de desarrollo y poder. El segundo, frente a la institucionalidad burguesa, se opuso un gobierno que fue acusado de ilegítimo e ilegal por esa institucionalidad, y no existió un poder, capaz de organizar nacionalmente a la sociedad, que se opusiera a la misma. De esta manera, el proceso revolucionario careció del instrumento indispensable para dirigir al país y someter la resistencia de las clases explotadoras. La existencia del poder popular sólo amenazó potencialmente el orden vigente, no llegando jamás a constituirse en una alternativa efectiva e inmediata.

Una tercera causa donde la unidad del aparato estatal represivo, al servicio de la contrarrevolución, fue el resultado -en definitiva- de la política militar aplicada por el gobierno. La división en "constitucionalistas" e "institucionalistas" se reveló fundamentalmente inscrita dentro de la táctica seguida y, en consecuencia, cuando ésta fue derrotada por la institucionalidad

burguesa que la cercó y la sometió en todos los frentes, se produjo también la derrota de su línea en el interior de las fuerzas armadas. Cuando se pretendió implementar una resistencia revolucionaria frente a los golpistas, ya se vivía un momento de reflujo y éstos tuvieron las manos libres para aplastar brutalmente los esfuerzos incipientes de los constitucionalistas.

Bajo estas condiciones, las concesiones y debilidades de las organizaciones políticas revolucionarias chilenas tuvieron como dramático resultado la confirmación de que un proceso de transformaciones profundas y la conquista del poder para permitir un cambio cualitativo de la sociedad sólo son posibles pasando por la división del aparato represivo y ganando una parte del mismo a través del esfuerzo, conciencia política, decisión de lucha y organización material de los trabajadores.

Esto nos permite confirmar que lo ocurrido en Chile muestra que si la iniciativa de la violencia reaccionaria no es el único camino para conquistar el poder e implantar el socialismo, la cuestión central de todo proceso revolucionario continúa siendo la preparación en *cada plano y en cada fase* de las condiciones necesarias para impedir *por la fuerza física* o derrotar la inexorable violencia contrarrevolucionaria.¹⁷

3.1.5 REFLEXIONES AL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR.

Durante el período 1970-1973 del gobierno de la Unidad Popular se presentó un pasaje desde una crisis parcial a una crisis total, a medida que aumentaba la polarización política y se desinstitucionalizaban los canales de confrontación. En 1970, el elemento clave que limitó la crisis del modelo de

¹⁷ *Idem* (8).

desarrollo y del liderazgo estatal fue la legitimidad del sistema democrático; hacia 1973 ese elemento se había perdido. La legitimidad fue afectada adversamente por una variedad de factores, entre ellos, la estrategia insurreccional seguida por los principales grupos organizados de la derecha, por un lado, y por el otro, la estrategia de transformación elegida por la UP. El diseño de esta estrategia estaba dentro de la legalidad, pero ella cuestionaba los principios de moderación y negociación a través de los cuales el sistema político había obtenido su legitimidad. A esto habría que añadir el creciente abandono de los valores democráticos por la clase media y por el centro político, a causa de la oposición al proyecto sustantivo de la UP. Todo esto hizo posible la intervención militar de 1973. La intervención no se produjo en 1970, a pesar de que se la pidiera. Pero tres años más tarde, las Fuerzas Armadas la vieron como la única salida de una crisis que el sistema político parecía incapaz de resolver. Es evidente que esto involucró un proceso interno activamente insurreccional para otorgar al golpe legitimidad jerárquica dentro de las Fuerzas Armadas.¹⁸

Aquí quiero hacer una referencia en cuanto a que las fuerzas armadas de Chile eran y habían sido durante mucho tiempo prescindentes -o sea, que no se tomaban en cuenta hasta cierto punto- y ajenas al proceso político, con lo cual se constituían como un arma de doble filo. Por una parte, y en condiciones normales, esa prescindencia favorecía el desarrollo común de la democracia, evitaba la injerencia de los militares en las cuestiones públicas y permitía el libre juego de los partidos políticos y de las fuerzas democráticas. Pero esa misma prescindencia de las fuerzas armadas de la política implicaba, como la otra cara de la moneda, el que ellos no entendieran ni comprendieran lo que ocurría en el mundo y lo que acontecía en Chile. Sólo veían desorden en lo que era marcha y construcción de un nuevo orden.

Resultó entonces que aprovechándose de esta singular condición de las fuerzas armadas chilenas, que aparentemente las colocaban como una fuerza neutra en la pelea política, pero en el fondo las identificaba con los valores

¹⁸ O'DONNELL GUILLERMO y otros. *Transiciones desde un gobierno autoritario. América Latina*. Vol. 2. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1988. Cap. 5, Págs. 147-185.

fundamentales de la sociedad que quería contraformar, aprovechándose de esta circunstancia, los intereses afectados por las transformaciones que el Gobierno de la Unidad Popular provocaba, se dieron a la tarea sistemática de corroer su disciplina, y lo lograron.¹⁹

En esta etapa, los reclamos y demandas de diferentes sectores sociales habían dejado de estar suficientemente bien articulados por los partidos políticos. Estos sectores se volvieron hacia sus organizaciones corporativas, lo cual frecuentemente obligó a los partidos a seguir su guía para no perder toda relevancia.

Puedo añadir que la experiencia del movimiento revolucionario en Chile ha mostrado que la victoria de las fuerzas populares en 1970 fue posible sólo gracias a la unidad de todas las fuerzas de izquierda antiimperialistas en un frente único: el bloque de la Unidad Popular. La fuerza central, su núcleo fue la clase obrera chilena y el papel rector los partidos Comunista y Socialista. La manutención de esta unidad y su fortalecimiento ulterior fue una de las condiciones básicas del desarrollo del proceso revolucionario en Chile, necesaria para la victoria final de la revolución chilena.

Finalmente, a pesar de la derrota sufrida por las fuerzas populares, la revolución chilena se puede considerar como un gran ensayo general del desarrollo pacífico de la revolución. El significado de la experiencia de lucha por la unidad de las fuerzas de izquierda reside en el hecho que aquí encontraron expresión muchos problemas de la pelea por la transición pacífica al socialismo comunes para otros países y partidos.²⁰

¹⁹ De los discursos políticos de Clodomiro Almeyda, Vicepresidente de la República de Chile durante el Gobierno de la Unidad Popular, en la conferencia pronunciada en el Auditorio Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, el 26 de febrero de 1976. Para un análisis más detallado sobre el significado del fascismo en América Latina véase: ALMEYDA CLODOMIRO. *Liberación y Fascismo*. Editorial Nuestro Tiempo, México, 1976.

²⁰ *Idem* (15). Pág. 217.

3.2 EL REGIMEN MILITAR.

3.2.1 EL SOPORTE SOCIAL.

Podemos afirmar, que desde un principio, el régimen militar se caracterizó generalmente porque se hizo acompañar de altos niveles de coerción, aplicados a la implementación de su modelo económico y sociopolítico. El régimen trató de igual modo de llevar con éxito la desmovilización política de amplios sectores de la población, especialmente de los partidos políticos, los grupos sindicales, los campesinos, los estudiantes, etc.

Con el golpe militar se puso fin al proceso de cambios revolucionarios que se inició en Chile en 1970 dando lugar a un período de brutal contrarrevolución. La clase dominante transformó el estado demoburgués en un estado totalitario y dictatorial con el propósito de reestructurar el sistema capitalista dependiente e introducir transformaciones regresivas en la sociedad chilena con el fin de asegurar la permanencia del sistema de dominación indefinidamente.

Desde un principio, las FFAA. usurparon el gobierno con el apoyo de la burguesía industrial monopólica, la burguesía agraria y diversos sectores de la pequeña burguesía. Puesto que los institutos armados no tienen un origen social oligárquico en Chile, como pasa en otros países de América Latina, sino que su composición de clase es en su mayoría pequeñoburguesa, se hace evidente la hegemonía de la gran burguesía en el proceso que manejan los militares. Ambos sectores se conjuntaron para crear un proyecto que respondiera a sus objetivos políticos de un estado totalitario y dictatorial.²¹

Respecto al soporte social que apoyó a la contrarrevolución, éste se expresó en los institutos del estado demoburgués, como el Parlamento, el Poder

²¹ GONZALEZ CASANOVA PABLO. *América Latina, historia de medio siglo*. Vol. 1. Capt. "Breve historia de medio siglo en Chile". Siglo XXI Editores, México, 1988. Págs 231-291.

Judicial, la Contraloría y las mismas FFAA.; en los partidos burgueses y policlasistas; en las organizaciones patronales de industriales, agricultores, comerciantes, etc. Pero este soporte social llevaba en su seno el germen de su propia destrucción y, a la larga esto se manifestó por las contradicciones existentes en su interior. Esto se hizo patente por las consecuencias derivadas del proyecto económico en la dictadura, donde se beneficiaba a la gran burguesía monopólica asociada al capital norteamericano en detrimento de otras fracciones de la misma clase, como los propietarios de empresas capitalistas medianas y pequeñas, y del método político utilizado que destruyó el estado de derecho e instauró un estado de excepción.²²

3.2.2 EL PROYECTO ECONOMICO NEOLIBERAL.

3.2.2.1 INTRODUCCION.

Una vez efectuado el golpe de Estado, los militares no podían ofrecer un proyecto apto para resolver la situación heredada en septiembre de 1973, y la clase capitalista era demasiado inmadura, desde el punto de vista político, como para formular un proyecto de desarrollo alternativo. Después de un período de alternativa falta de definición de un modelo (período de "tratamiento de shock" económico) que sustentara las necesidades de la sociedad, se llegó a la determinación precisa de un programa económico de reconstitución y re inserción capitalistas, proveniente no de los empresarios ni de sus organizaciones representativas, sino de dentro mismo del aparato estatal,

²² El estado de excepción es un régimen establecido por un gobierno que consiste en la suspensión de alguno o de todos los derechos constitucionales con la finalidad de ejercer radicalmente su autoridad. Para una ampliación detallada de este tema véase: CARRANZA MARIO ESTEBAN. *Fuerzas Armadas y Estados de excepción en América Latina*. Editorial Siglo XXI, México, 1978.

elaborado por un sector tecnocrático parcialmente compuesto por académicos locales y en parte reclutado en instituciones financieras internacionales. Los miembros de este grupo eran seguidores firmes de las doctrinas de Milton Friedman, de la Escuela de Economía de Chicago y de la Universidad Católica de Chile. Eran los llamados *Chicago boys*. Estos fueron los colaboradores y consejeros más allegados de Pinochet y, con el tiempo llegaron a ocupar posiciones de liderazgo dentro de los principales grupos financieros en Chile.²³

Los *Chicago boys* era un grupo de economistas-tecnócratas, monetaristas, con un alto nivel de formación. Se constituyó como un grupo homogéneo -es decir, formado o constituido por elementos de la misma naturaleza- de alto nivel técnico-económico que dispone y aplica un modelo económico que parece simple, porque es simple y tiene una respuesta para todo, ya que se restaura el juego de fuerzas económicas, la iniciativa privada y el interés personal por medio de una acción y legislación justas por parte del Estado. Como grupo tecnócrata, eran indiferentes y hostiles a los problemas sociales y políticos que acompañaban a la aplicación de su modelo económico, despreciando o rechazando a la democracia por "obsoleta" y "caduca".

Entre las características del *modelo chileno* estuvo la implementación extremadamente coherente de las teorías económicas y sociales conocidas como "neoliberales" o "neoconservadoras". Esto parecía ser parte de una corriente derechista encabezada por Gran Bretaña y Estados Unidos. Chile, bajo Augusto Pinochet y los *Chicago boys* se transformó en una especie de laboratorio, donde se puede analizar lo que ocurrió en la práctica una aplicación sistemática de las teorías neoliberales.

Por otra parte, la junta militar chilena se autocalificaba de *apolítica*, pues el mismo Pinochet afirmaba: "La política pertenece al pasado, señores. Nosotros estamos en camino de crear una sociedad verdaderamente moderna, despolitizada y guiada científicamente". La política sería sustituida por la economía, siendo elevada a un nivel de "superciencia", capaz de dar respuestas científicas a todas las interrogantes que atañen a la organización de la sociedad.

²³ *Idem* (18).

De igual manera, las decisiones colectivas serían sustituidas por soluciones de mercado; los políticos, gremios y grupos de presión reemplazados por la ley de oferta y demanda.

Estas afirmaciones del general Pinochet se manifestaron de igual manera en el ideal de los *Chicago boys* para crear una sociedad sin organizaciones civiles. Una sociedad sin partidos, gremios, organizaciones de interés, grupos de presión, confederaciones sindicales ni actores políticos.²⁴

3.2.2.2 IMPORTANCIA DEL PROYECTO ECONOMICO.

Desde el inicio, la misión de los *Chicago boys* era legitimar la coexistencia de un liberalismo económico con un autoritarismo político. La existencia de una dictadura entregó a la tecnocracia neoliberal un campo de acción ilimitado en la reestructuración de las bases y el funcionamiento de la economía chilena y en el diseño de las tareas para los diferentes sectores productivos.²⁵

Mientras, la junta militar en el poder llevó a cabo el enderezamiento de la economía que exigía en primer lugar, la privatización del conjunto de los medios de producción. Esto significó que volvieran al sector privado y a los antiguos dueños un gran número de empresas industriales, establecimientos bancarios y propiedades agrícolas que el gobierno de la UP había nacionalizado.

Todas estas medidas hicieron que la política aplicada tendiera a privatizar al máximo la economía, suprimiendo prácticamente cualquier ingerencia del Estado. Mientras que los capitales extranjeros entraban en la

²⁴ GARCIA RIGOBERTO. *Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987*. Capt. "Chile, 1973-1987: Los valores de un modelo", por Stefan de Vylder. Fondo de Cultura Económica, México, 1989. Págs. 66-100.

²⁵ SILVA PATRICIO. *Intelectuales, tecnócratas y cambio social en Chile*. *Revista Mexicana de Sociología*, Año LIV núm. 1, Instituto de Investigaciones Sociales, U.N.A.M., enero-marzo 1992. Pág. 151.

economía chilena, la junta militar despedía a miles de funcionarios del sector público.²⁶

De igual modo, la dictadura militar adoptó teóricamente una "economía social de mercado", fundamentada en los principios de la libre concurrencia, la libertad de precios y la libre empresa. Por otro lado, en la práctica se buscó restaurar las relaciones capitalistas de producción, superexplotando la mano de obra y estimulando la inversión nacional y extranjera, planteando la modernización de la economía con proyección a los mercados externos.

En síntesis, el proyecto pretendía superar la crisis económica interna generando un incremento en la capitalización privada, con una drástica reducción del nivel de vida de las masas trabajadoras y del empleo, con lo cual se disminuyen los costos de producción y se mejora la rentabilidad de las empresas. Asimismo, la política señalada hacía más rentable la explotación capitalista en la industria y el campo, atrayendo la inversión nacional y extranjera.²⁷

De esta manera, la política económica se convirtió en el vértice principal de la política de gobierno, el cual adaptó su discurso político a las necesidades del modelo neoliberal.

El proyecto económico revestía como características más sobresalientes:

Primero, una reversión del proceso de cambios estructurales desarrollados en la economía por el gobierno de la UP, provocando profundas alteraciones en el proceso productivo. Se planteó la desnacionalización de las riquezas básicas. El área de propiedad social de la economía fue enajenado a la burguesía, liquidando en beneficio de sectores privados mediante venta de empresas y fábricas a precios ínfimos. Se desnacionalizó la banca privada mediante ventas de paquetes de acciones de las instituciones bancarias más importantes a grupos económicos particulares, a la vez que se autorizó la instalación de nuevos bancos extranjeros.

²⁶ KATZ CLAUDE. *Chile bajo Pinochet*. Editorial Anagrama, Barcelona, 1976.

²⁷ *Idem* (2).

Segundo, una acentuación marcada de la dependencia de la economía nacional, adaptándola al proceso de integración monopólica internacional.

Tercero, una concentración progresiva de la propiedad y la producción en manos del monopolio y fortalecer el capitalismo en la agricultura. La política aplicada en el campo por la junta fascista fue resentida por los campesinos chilenos cuanto que su sector fue particularmente activo durante la UP. La reforma agraria quedó suspendida y se organizó la expropiación de las fincas expropiadas (unas quinientas), siendo restituidas a los antiguos propietarios latifundistas y la comercialización de insumos y productos agropecuarios pasó a manos privadas.

Cuarto, la superexplotación de los trabajadores con el fin de financiar la capitalización de empresas privadas, modernizándolas y aumentando su productividad, a la vez que se aseguraban inversiones en nuevas actividades más rentables. La junta militar pasó la semana laboral de 44 a 49 horas, cinco de las cuales no eran pagadas, y su producto debía ser entregado a un "Fondo de Reconstrucción Nacional".

Finalmente, los mandos militares de las fuerzas armadas se encargaron de desarticular a las organizaciones políticas y sindicales de los sectores sociales, sobre las cuales recaería el peso del nuevo modelo de acumulación. De este modo, el renacimiento del Estado en Chile se llevaría a cabo a través de un doble proceso de cambios tanto en el terreno político como en el económico que se expresaría en la *privatización* de la economía y la *estatización* de la política.²⁸

²⁸ *Idem* (28).

3.2.2.3 LAS FASES DE LA POLITICA ECONOMICA.

Los resultados de la política económica llevada a cabo en el lapso de 1973-1987 por el gobierno de A. Pinochet se dividen en cuatro fases:²⁹

1.- En los años 1973-1976, Chile vivió una combinación muy marcada de inflación y estancamiento, conocido como período de *hiperestancamiento*. En este período se llevó a cabo una política restrictiva que disminuye los costos de los sueldos y salarios, pero que llevó a un fuerte aumento de las tasas de interés, produciendo una subida de los costos totales de las empresas y el resultado de esto fue una producción menor y una inflación casi igual, o incluso mayor, hasta que en 1976 se fue caracterizando como un año de transición del modelo económico aplicado con un aumento de la producción y de las exportaciones y disminuyendo las importaciones, mostrando un excedente en la balanza de cuenta corriente.

2.- El período 1977-1981 se caracteriza por una estabilización del ritmo inflacionario, aunque no de los niveles de precios, y por un crecimiento económico rápido y sostenido. Podemos llamar estos años como *período de recuperación*. El período coincide también con una consolidación política del régimen militar, y con la fase más coherente en la aplicación del modelo neoliberal. Entre los factores que estimularon la economía se contaba el descenso de la tasa de interés que bajó en términos reales desde 51% como promedio anual en 1977 a 12% en 1980. Se dió una fuerte expansión de la industria manufacturera. Otras fuentes de crecimiento fueron los sectores orientados a la exportación (en primer lugar: minería, agricultura, silvicultura y pesca). Una razón importante para el desarrollo aparentemente propicio de los años 1977-1981 fueron las expectativas de éxitos y avances continuos que se crearon. La información sobre el estado real de la economía era bastante tergiversada y selectiva; en una dictadura como la chilena, las voces críticas eran acalladas, al menos en los medios de comunicación más importantes, y la

²⁹ Ídem (24).

propaganda de los economistas del sector oficialista que contribuyó a acentuar el boom, que en cierto modo era muy artificial, y basado más en créditos, consumismo y endeudamiento especulativo que en inversiones productivas. Sin embargo, con todo su cinismo, el *modelo chileno* parecía funcionar, tener cierta viabilidad. No para la clase obrera -esto nunca fue el objetivo- pero sí para los arquitectos del modelo, y para sus principales sostenedores dentro de la burguesía financiera chilena e internacional. Esta fase fue altamente exitosa en sus primeras fases, en la cual Chile tomó ventaja de su situación y se inundó de dólares, tanto por el auge exportador experimentado como por la abundante entrada de capitales.

3.- Durante el segundo semestre de 1981, la economía entra de nuevo en una fase recesiva -crisis, dirían muchos- que continuaba hasta 1985, pero esta vez con un carácter diferente a la crisis anterior. Esta etapa se destaca, además, por la pérdida generalizada de credibilidad del proyecto económico, político y social del gobierno militar, y por la forzada pérdida de coherencia en la aplicación del modelo económico. En el plano político se inicia, a partir de las primeras protestas nacionales en 1983, una masiva movilización de masas en contra de la dictadura. La mayor preocupación de este período era la situación de la balanza de pagos, pues en 1981 las importaciones aumentaron 10%, mientras que las exportaciones bajaron 18% y la deuda externa superaba los 19,000 millones de dólares a fines de 1983, colocando a Chile como uno de los países de mayor deuda externa por habitante del mundo. La falta de competitividad internacional de la economía chilena, la caída de la demanda interna y las astronómicas tasas de interés real -más factores psicológicos, como la pérdida generalizada de credibilidad del modelo hasta en los sectores más conservadores del país- condujeron, en 1982, a la peor crisis económica de los últimos 50 años, lo que representó uno de los episodios más críticos de la historia moderna de Chile, sumiendo a la economía en una profunda recesión. Para 1983 no hubo una reactivación de la economía y, por el contrario, se daba una continua caída del nivel de vida que se prolongó hasta 1984.

4.- En 1985 se inicia una etapa de reactivación económica y de recuperación de coherencia del modelo. Contrario a las expectativas y deseos-

de la mayoría de los chilenos, el período 1985-1987 no significó el fin del modelo, sino la recuperación de la coherencia perdida durante la crisis de 1982-1984. Los años 1985-1987 representan, en muchos sentidos, una vuelta a la política del período "triumfalista" de 1977-1981 (pero sin las exageraciones de consumismo y endeudamiento de ese entonces). Los *Chicago boys* volvieron a hegemonizar los altos mandos de la gestión económica, y el proceso de "modernizaciones" siguió adelante. Pasado lo peor de la crisis, el gobierno inició una política indiscriminada de privatización, vendiendo un gran número de empresas estatales a un precio muy por debajo del valor real. La gran diferencia con la fase de recuperación de los años 1977-1981 la constituyó el peso de la deuda externa, pues Chile necesitaba transferir entre 5 y 10% del Producto General Bruto cada año al exterior para servir la deuda, teniendo condiciones poco favorables para la reactivación. Pero a pesar de esto, Chile volvió a ser el "niño maravilla" de la banca internacional, la cual resaltaba los logros del "modelo" en términos eufóricos. Para entonces, la balanza comercial ostentaba un superávit de más de 1,000 millones de dólares.

Como se puede apreciar, fueron muchos los elementos clave en el éxito chileno. Sin embargo, uno fue particularmente decisivo: haber puesto mayor énfasis en mantener la dinámica de crecimiento basado en la integración al mundo que a obtener propiamente una tasa de inflación reducida. Quizá la estrategia chilena no fue del todo óptima. Tal vez pudieran señalarse algunos errores. Pero lo cierto es que la política económica se debe juzgar por los resultados, y en el caso de Chile, éstos han sido altamente favorables.

Cabe comentar que bajo el contexto de estas diferentes fases de la política económica llevada a cabo en Chile, se constata que el experimento neoliberal transformó profundamente al país, destacando lo perseverante que fue el gobierno al aplicar de manera ofensiva y sistemática una serie de reformas y modernizaciones. Sin embargo, esto significó altos costos sociales y efectos altamente negativos para la gran mayoría de la población. Es cierto que el modelo neoliberal no hubiera podido funcionar con un régimen democrático, pero del mismo modo tuvo grandes dificultades para funcionar en un régimen militar. A este respecto, surge una contradicción fundamental: una aplicación

sistemática y coherente del modelo neoliberal es incompatible con un régimen democrático, y también con un régimen dictatorial. El modelo es, en fin, *incompatible consigo mismo*. Para el buen funcionamiento de una economía social de mercado, se exige un flujo de información que no distorsione ni la verdad sobre la situación económica actual, ni las expectativas sobre el futuro.

3.2.3 EL PROCEDIMIENTO POLITICO.

3.2.3.1 INTRODUCCION.

Los regímenes militares surgidos en el Cono Sur de América se vincularon, en cierto modo, con la modernización, la profesionalización y la homogeneización ideológica de las fuerzas armadas, lo que facilitó su intervención orgánica y jerárquica, teniendo que ver con una reestructuración del orden capitalista mundial.

Todos estos regímenes, en diverso grado, combinan una dimensión reactiva ante procesos anteriores de movimientos populares con una dimensión transformadora respecto de la sociedad. La primera se expresa mediante la represión y de la ruptura del sistema sociopolítico previo. La segunda logra su expresión con la materialización de un proyecto histórico, es decir, un modelo económico, político y cultural, donde el sentido general es la reconstitución del orden capitalista en el país y su reinsertión en el sistema capitalista mundial.³⁰

³⁰ Sobre la doble dimensión del régimen, reactiva y funcional, así como sobre el proceso de institucionalización, véase el análisis conceptual en MANUEL A. GARRETÓN, "En torno a la discusión de los nuevos regímenes autoritarios en América Latina" (Documento de trabajo, FLACSO, 1988) y "Procesos políticos en un régimen autoritario. Dinámicas de institucionalización y oposición en Chile 1979-1989". Este último trabajo fundamenta una buena parte de las afirmaciones contenidas en este texto respecto al proceso de institucionalización y a los problemas de la oposición.

Diferentes formas de represión caracterizan la dimensión reactiva, mientras que la característica de la dimensión transformadora es el proceso de institucionalización del régimen. Esto consiste básicamente en el pasaje desde una dictadura sin reglas y que procura legitimarse en función de los requerimientos de una guerra interior, a una dictadura que establece sus propias reglas y busca nuevos principios de legitimidad.

En el caso de Chile, el núcleo hegemónico que obtuvo el control del Estado se mantuvo intacto hasta 1981. Por una parte estaba constituido por el liderazgo jerárquico de Pinochet en las fuerzas armadas, y por otro lado, por el grupo tecnocrático encargado del manejo estatal de la economía, grupo conocido como los *Chicago boys*.

Para entonces, los conceptos prevalecientes entre los militares, en particular la denominada doctrina de la seguridad nacional, no los equipaban para la tarea de la reorganización material y social del país. Su cohesión se desprendía no del consenso acerca de un proyecto sino de su propia naturaleza organizativa, en la que la jerarquía y la disciplina constituían las claves. Esto facilitó la personalización del liderazgo supremo frente a las decisiones cotidianas del gobierno.

Dicha personalización del liderazgo, acompañada por la subordinación creciente de las otras fuerzas armadas al ejército, tuvo lugar en varias etapas. En el nivel jurídico institucional, Pinochet, siendo comandante en jefe del ejército, pasó de jefe de la junta de gobierno a cabeza del Estado, y después a presidente de la república (movimiento consumado en el referendo de septiembre de 1980).³¹ Hubo además una mayor concentración y centralización del aparato represivo bajo las órdenes directas de Pinochet; la culminación se alcanzó con la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) en junio de 1974 y de su sucesora la Central Nacional de Información (CNI), en agosto de 1977. Se fue produciendo entonces la remoción progresiva de los oficiales de alto rango del ejército que eran pares de Pinochet en la época del golpe. Esto

³¹ Véase este desarrollo en G. ARRIAGADA. *El marco institucional de las Fuerzas Armadas*. Working Paper, Latin American Program, The Wilson Center, Washington D.C., 1989.

acentuó la relación jerárquica entre el comandante en jefe y los oficiales y generales de promoción reciente, que "se lo debían todo". En resumen, la personalización del liderazgo de Pinochet fue lograda mediante la fuerza, el control del aparato represivo y una fórmula jurídico-institucional, factores todos basados en la cohesión interna de los militares, que a su vez se fundó más en la jerarquía y organización interna que en cualquier acuerdo en torno de un proyecto político común. Este proceso no fue enteramente tranquilo, en especial cuando los poderes de la junta militar de gobierno se vieron socavados por las decisiones personales de Pinochet más tarde ratificadas de manera compulsiva.³²

3.2.3.2 LA REPRESION DE LAS FUERZAS ARMADAS Y EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION.

Desde el punto de vista de la dictadura, la institucionalización (es decir, la creación de reglas de juego en diferentes esferas de la sociedad que expresen su proyecto o ideal social) siempre tiene dos aspectos. Es la manifestación de un poder en proceso de consolidación, pero es también el espacio limitado -en cierta forma-, en el que los grupos de oposición pueden reconstituirse y los movimientos sociales regenerarse.

Mediante la concentración y centralización del aparato represivo, se fortaleció el rasgo personalizado de Pinochet dentro de las fuerzas armadas. Además, la represión condicionó el tipo de oposición en los primeros años del régimen, y también algunos de los problemas que el régimen enfrentó en fases

³² Estas confrontaciones que se produjeron entre 1973 y 1980 culminaron con la remoción del general Leigh y de casi todo el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Esto demostró la medida en que la más alta conducción política podía haber sido dividida en cualquier momento; no obstante, también demostró el poder del que gozaba Pinochet para alinear a las fuerzas armadas como un todo detrás de su posición con disciplina y orden.

posteriores. De modo que hubo una relación entre los rasgos básicos de la represión y las características de la institucionalización subsiguiente.

Si se analiza la evolución de la represión general y no en círculos específicos, se pueden identificar varias etapas.³³ Primero hubo una represión masiva, sin gran coherencia ni coordinación técnica, dirigida hacia todos los líderes militantes y a todos los simpatizantes del gobierno de la UP. La junta militar de gobierno abolió las libertades democráticas y los derechos humanos; clausuró el Congreso nacional asumiendo ella misma las facultades legislativas; sometió a su autoridad a los tribunales de justicia y a la Contraloría General de la República; intervino las universidades; ilegalizó los partidos populares incautando sus bienes y medios de comunicación de masas y disolvió la CUT y las federaciones obreras y campesinas suspendiendo el funcionamiento de los sindicatos. No existían procesos legales, no se podía procurar protección judicial, y la población fue alentada a denunciar a individuos "desleales". Este fue el período de asesinatos y ejecuciones masivas, de muertes por tortura y de "desapariciones", como consecuencia de la naturaleza arbitraria y discrecional de un poder represivo desatado por cada una de las diversas ramas de las fuerzas armadas.

De este modo, el gobierno más democrático que tuviera Chile en toda su historia fue sustituido por una dictadura del oscurantismo. La entonces burguesía chilena que defendía los principios ideológicos del liberalismo político, se transformó para poner en marcha una política totalitaria, sirviéndole de estandarte para la defensa de su ilícito enriquecimiento a costa de la inhumana superexplotación de los trabajadores, proyectando la dictadura militar la bandera de un anticomunismo delirante, provocando el repudio generalizado de la comunidad internacional. Las acciones de la dictadura militar echaron por tierra la vigencia interna de los valores democráticos y la defensa de la paz, la autodeterminación y la cooperación entre los pueblos que había logrado en el plano exterior la política de la UP.

³³ Véase H. FRUHLING. "Strategies of Repression and Legal Strategy for the Defense of Human Rights in Chile: 1973-1990" *Human Rights Quarterly* 5, núm. 4, 1983. Págs 510-513.

De igual forma, todas las medidas adoptadas se realizaron mediante la represión masiva sistemática. Partiendo del exterminio físico de miles de trabajadores desde el golpe de estado y continuando con el aplastamiento del descontento social del pueblo chileno, mediante la tortura, la delación, los juicios militares, los campos de concentración, los fusilamientos y el toque de queda. De este modo, se suprimió cualquier forma de expresión democrática, el desarrollo de los órganos represivos y la expulsión del territorio nacional de más de 200 mil personas acosados por la dictadura.³⁴

Asimismo, en el campo de la educación la junta militar fascista ejerció una de las acciones más violentas contra el pueblo. Para alcanzar el objetivo se fijó extraer de la enseñanza el "cáncer marxista", mediante cualquier medio: arresto o ejecución de centenares de estudiantes, profesores o personal administrativo; cierre de varias facultades que enseñaban disciplinas consideradas "peligrosas", sustitución de rectores universitarios por unos rectores militares y excluyendo del derecho de matrículas a miles de estudiantes, a fin de reorganizar la enseñanza bajo el control absoluto de las fuerzas militares. Progresivamente, la junta institucionalizó una enseñanza servidora de la gran burguesía. La organización escolar y universitaria respondía a los objetivos de la junta: eliminar de la enseñanza a cualquier profesor o alumno progresista, reservando únicamente esta enseñanza a los hijos de la gran burguesía.³⁵ Igualmente, se disolvieron las organizaciones sindicales de estudiantes, profesores o personal administrativo, prohibiendo todas las reuniones.

También, entre la "justicia" que llevaba a cabo la junta militar,³⁶ estaba la represión directa sin ninguna forma de proceso -bombardeo de barrios habitados, ejecuciones en el mismo lugar de la detención- suscitó en todo el mundo una unánime reprobación. Por consiguiente, la junta intentó legalizar la

³⁴ *Idem* (2).

³⁵ Para un análisis más extenso y documentado de la política educativa llevada a cabo por la junta militar ver: P. BULE. *Elementos para el análisis crítico del sistema cultural vigente en Chile*. CIDDQB-TM, Barcelona, 1974.

³⁶ A este respecto, se puede encontrar un análisis más detallado en: C. G. BROWN. "...10 años de atropellos a los derechos humanos en Chile..." Informe del Americas Watch Committee. Editado por Casa de Chile en México, 1984.

represión creando tribunales militares habilitados para época de guerra, teniendo jurisdicción en ambos terrenos; pudiendo juzgar no sólo los hechos posteriores al golpe de estado, sino también los que tuvieron lugar con anterioridad al 11 de septiembre.

No existía competencia real de éstas instancias marciales, pues estos tribunales fueron instituidos por un poder ilegal -el de la Junta Militar- agresor de un gobierno elegido democráticamente, siendo imposible reconocerles como un poder jurisdiccional legítimamente conferido. Estos tribunales serían competentes sólo en caso de guerra.

La represión desencadenada en septiembre de 1973 tenía como principal objetivo la aniquilación de cualquier oposición a la junta militar. Sin embargo no consiguieron detener y eliminar a todos los dirigentes de las organizaciones de izquierda. Los militares intensificaron entonces las torturas y adoptaron nuevos procedimientos tanto en las ciudades como en el campo. La represión masiva prosiguió en oleadas sucesivas.

Posteriormente, con la creación de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) se hizo más patente esta represión, siendo más selectiva, localizada y personalizada. Este organismo fue el símbolo de las nuevas formas de represión, centralizó y coordinó las actividades de los servicios de información de las cuatro ramas de las FFAA.. Fue montada con ayuda brasileña y norteamericana y desde su comienzo contó con la colaboración de un antiguo responsable de la Gestapo, Walter Rauff. Los miembros fueron reclutados de la organización fascista "Patria y Libertad", recibiendo instrucción paramilitar en los cuarteles. La DINA dependía directamente del general Pinochet y de la junta, y sus atribuciones respecto a la represión eran ilimitadas; tareas de orden preventivo o punitivo, intimidación de los parientes, infiltración en las redes de resistencia... La DINA no rendía cuentas a la justicia en lo que se refiere a los detenidos, los interrogatorios y las torturas, pues contaba con sus propias oficinas y centros de tortura.³⁷ El conocimiento público de la participación de la DINA en el asesinato del general Prats, en el atentado contra la vida de

³⁷ *Idem* (28).

Bernardo Leighton, y en la muerte de Orlando Letelier, fueron todos hechos que tuvieron repercusiones importantes.

En 1977 la presión de la comunidad internacional, de la Iglesia Católica y algunos sectores del régimen, condujo al régimen a disolver la DINA, que fue reemplazada por la Central Nacional de Información (CNI). En el papel, la CNI parecía ser un organismo de inteligencia sin poder ejecutivo, pero en realidad siguió los mismos métodos aplicados por la DINA. La diferencia fue que no hubo más desapariciones y que el gobierno intentó la "legalización" de la represión, aunque los límites de esa legalidad fueron reiteradamente transgredidos.

En ese mismo año y hasta 1980, mientras se definía el modelo político, la represión fue más dirigida y destinada a provocar temor y quebrar la moral, predominando las detenciones masivas, las deportaciones internas, las expulsiones y la tortura.

En cuanto al proceso de institucionalización, en 1976, con la promulgación de las actas constitucionales parecía insinuarse el proyecto de un régimen militar de tipo permanente ante lo que éste consideraba el fracaso definitivo de las democracias para combatir la infiltración marxista.³⁸ Por otra parte, el intento de institucionalizar el gobierno militar en un momento en que la presión internacional y de la Iglesia se había vuelto aguda, precipitó una discusión interna acerca del futuro modelo político. Este proceso implicó tanto una respuesta a crisis transitorias en sectores particulares, como la voluntad de transformar la situación y establecer una estructura permanente del régimen. Resultaba evidente que el modelo de desarrollo y el proceso de institucionalización produjeron cambios importantes en la sociedad chilena. El arribo de la administración Carter a Estados Unidos, y el anuncio de varios gobiernos militares latinoamericanos de retornar en alguna forma al gobierno civil, volvió a inscribir la democratización en la agenda chilena, llevando al régimen militar a replantear sus temas iniciales de "restauración de la

³⁸ Esto está explícitamente planteado en el mensaje de Pinochet del 11 de septiembre de 1976.

institucionalidad quebrantada" y de construcción de un nuevo tipo de democracia.

Con respecto al modelo de desarrollo, los principales cambios fueron: la reorientación del aparato productivo con una reducción relativa de la importancia de los sectores de la producción, en particular la industria, y fuerte expansión del sector terciario; la reducción del papel del Estado como agente económico; la concentración creciente de la riqueza en un pequeño número de grandes conglomerados; la penetración capitalista en la agricultura, y el predominio del sector financiero y la creciente dependencia respecto del capital financiero internacional.

Para julio de 1977, el general Pinochet anunció un plan político conocido como el Plan Chacarillas, donde se proponían varias fases de desarrollo institucional, que culminaban en 1985 con la transferencia del poder a civiles, a través de una forma de "democracia" restrictiva y exclusionista en extremo, en la cual se combinaban sistemas de representación con designaciones por parte de las autoridades militares. El Plan Chacarillas era un dispositivo típico para esquivar una crisis, haciendo a un lado el debate dentro del régimen y contrarrestando la presión de los organismos internacionales, los gobiernos extranjeros y la Iglesia. El plan reafirmaba la naturaleza transitoria del régimen militar, si bien proporcionaba una nueva base institucional para el gobierno de Pinochet.

En cuanto a la respuesta de Pinochet frente a la presión del exterior y al debate interno, ésta consistió en intensificar su línea personalista, signando la totalidad del proceso de institucionalización política.

Ante esta manifestación, el informe de la Comisión Ortúzar de octubre de 1978 propuso un proyecto de constitución que debían revisar Pinochet y la junta de gobierno. Se originó un desacuerdo entre quienes querían diferir cualquier institucionalización política de tipo constitucional en favor de una extensión indefinida del régimen militar, y quienes, si bien aceptaban la perpetuación del régimen, aspiraban a reintroducir elementos democráticos y

superar los problemas económicos y políticos causados por el aislamiento internacional.

En julio de 1980, el Consejo de Estado (consultivo) presentó sus observaciones sobre el Informe Ortúzar, y el debate interno sobre el futuro político se volvió más polarizado. Pinochet revisó el proyecto constitucional, tomando elementos de los informes de la Comisión Ortúzar y del Consejo de Estado, para convocar a un referendo y hacerlo aprobar. Esta iniciativa otorgó el mayor ascendiente en el debate interno, y sacó a la luz la falta de alternativas dentro del régimen. Algunos estaban conformes con que el régimen se prolongara por lo menos hasta 1989, y quizás hasta 1997, manteniendo durante ese período una capacidad represiva discreta, y con que la junta de gobierno fuera relegada a una función puramente legislativa.³⁹

Se puede dilucidar la significación que el referendo de 1980 tuvo para el régimen militar mediante un análisis en tres niveles.

Primero, se resolvió temporalmente la crisis interna y se fijó un marco dentro del cual los diferentes sectores internos debían operar y no implicar una repolitización de las fuerzas armadas. Aunque no se resolvían los desacuerdos internos de manera definitiva, los limitaba de modo que diferentes sectores del bloque dominante lo consideraron legítimo.

Un segundo nivel concierne al modelo político encarnado en la Constitución, aunque en realidad contiene dos modelos políticos. Está lo que se denomina "modelo de transición", que significa sólo el mantenimiento del *statu quo* establecido por el golpe militar de 1973, es decir, un régimen militar con rasgos sumamente personalizados. Aunque la constitución regula el poder de las autoridades, asigna a Pinochet la mayor discreción personal en cuanto al manejo de la represión, eliminando cualquier elemento subsistente de protección legal. Este modelo político establecido constitucionalmente es presentado como transitorio, dejando espacio para un segundo modelo político que sería el definitivo después del proceso de transición. Este segundo modelo

³⁹ Sobre las irregularidades del referendo, véase el artículo de PATRICIO AYLWIN y otros: "Presentación ante el Colegio Escrutador". Diario *El Mercurio*, 3 de octubre de 1980.

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

79

consistiría supuestamente en la restauración de una democracia total, aunque, en realidad, guarda como una reliquia lo que estrictamente se conoce como un régimen autoritario, donde todo aparece asegurado por el reconocimiento formal del papel tutelar de las fuerzas armadas. En este modelo se utilizan oficialmente las expresiones "democracia autoritaria" o "democracia limitada", aunque sean contradictorias.

El tercer nivel tiene significación para la sociedad como un todo y para la oposición. En este punto no es posible un análisis de los resultados electorales, debido a las anomalías e irregularidades tanto del período preelectoral como la realización misma del referendo. Este último significó un éxito para el régimen militar porque confirmó la capacidad del gobierno para la dislocación social, y la eficacia de su propaganda en torno de los terrores y traumas del pasado, su habilidad para crear dudas sobre la existencia de cualquier alternativa viable, y su aptitud para manipular el conformismo pasivo. En lo referente a la oposición política, el referendo marcó un punto alto en su unificación y movilización, pero reveló los problemas que se enfrentaban para penetrar en los sectores sociales que no apoyaban al régimen, sino que se adecuaban a éste de manera pasiva.

Así, la significación de estos tres niveles se reflejó dentro de la Constitución de 1981 que en su parte transitoria, entregaba al general Pinochet un mandato presidencial de ocho años con grandes poderes personales y encargaba a la junta de gobierno la tarea legislativa, mantenía y agudizaba las restricciones a los derechos individuales y sociales y eliminaba cualquier forma de representación y participación sociopolítica. A su vez, para el período siguiente a los ocho años de transición, la Constitución aseguraba la sucesión del gobierno por otros ocho años, creaba un sistema político de participación y representación restringidos con fuertes mecanismos de exclusión y consagraba el poder tutelar o de veto de las fuerzas armadas en forma permanente.⁴⁰

⁴⁰ Véase "Constitución política de la República de Chile", marzo de 1981. Un análisis crítico en "Las críticas del Grupo de los 24", Revista APSI, dossier, 10 al 23 de marzo de 1981.

Finalmente, para entender esta forma de institucionalización política es necesario referirse a un proceso paralelo que denominamos institucionalización social y cuyo referente no es ya el poder del Estado sino las diversas esferas de la sociedad en las que se intenta materializar el proyecto histórico de refundación o de recomposición y reinserción capitalista.⁴¹ Se trata aquí de cristalizar normativamente las transformaciones estructurales que introduce el nuevo modelo de acumulación y desarrollo, por un lado, y de redefinir institucionalmente los diversos ámbitos de relaciones sociales, por otro.

3.2.3.3 LA DEBILIDAD DEL PROYECTO POLITICO.

El referendo de septiembre de 1980 y la promulgación constitucional de marzo de 1981 marcaron la cúspide en la institucionalización política del régimen de Pinochet. Las tensiones parecían haberse resuelto y el régimen todavía podía demostrar un cierto grado de éxito económico. Por una parte, la nueva administración Reagan parecía favorecer a los regímenes militares latinoamericanos. Con estas perspectivas, el régimen puso en marcha su proyecto para transformar la sociedad, introduciendo reformas de gran alcance en la Universidad y en la Seguridad Social. Por otra parte, los partidos de oposición parecieron desorientados e impotentes después del plebiscito de septiembre de 1980.

Pero algunos meses más tarde se derrumbó uno de los grupos económicos importantes especializados en actividades especulativas e importantes funcionarios de la CNI, en Calama, mataron a algunos empleados bancarios en el curso de un robo. Estos dos acontecimientos demostraron la extrema fragilidad de la base económica del régimen y también la falta de

⁴¹ Sobre estos conceptos y procesos véase "Procesos políticos..." op. cit. (28).

control social sobre el aparato represivo, éste último reforzado por adicionales delitos de la CNI.

A partir de 1981 la crisis del modelo económico y la percepción generalizada de que no se lograba resolver los problemas del país determinaron que el régimen militar pasara a una nueva fase.

La pérdida de la capacidad del régimen para transformar la sociedad y el progresivo abandono de su visión inicial, lo llevó a adoptar una serie de políticas contradictorias e inconclusas. Existía una falta de coherencia, la intervención del Estado se acrecentó, se fortaleció la crisis socioeconómica y el régimen parecía encaminarse a su simple supervivencia antes que ofrecer una solución a mediano o largo plazo. Esta tendencia fue visible en todos los ámbitos del Estado.

De esta manera, el bloque dominante se desintegró en varias facciones, cada una de las cuales empezó a ejercer presión autónoma en favor de sus intereses corporativos, abandonando su lealtad incondicional al régimen. Los desacuerdos ya no surgían sólo dentro de la élite política, sino que abarcaban a importantes grupos sociales capaces de ejercer presión.⁴² Este desarrollo es significativo para la democratización, porque tales fuerzas son capaces, a través de su efecto en las fuerzas armadas, de provocar crisis y cambios importantes, incluso aunque no puedan asegurar que todas las transformaciones serán democráticas.

De igual forma, la debilitada capacidad del gobierno para ejercer el liderazgo se reflejó en una fragmentación dentro del aparato del Estado y en la progresiva desaparición de la corriente dominante, es decir, el "equipo económico". Algunos de los grandes consorcios erigidos por la política estatal entraron en conflicto con el equipo económico de los *Chicago boys* a causa de la crisis del sector financiero, culminando con la intervención del Estado en el

⁴² Estos eran "gremios" de industriales, comerciantes, granjeros, camioneros y pequeños negociantes. La importancia política de estos sectores data de la desintegración del sistema político chileno durante el gobierno de la UP. Puesto que estos sectores no formaban parte de la estructura política tradicional, les faltaba una clara identidad política. En el caso de los colegios profesionales hubo una evolución más nítida hacia la oposición.

sector bancario. Por otra parte, la presión de diversos sectores que culpaban al equipo económico de causar la crisis generalizada indujo a Pinochet a desprenderse de algunos miembros importantes del grupo.

Con la afluencia de estos diversos desarrollos se fue involucrando un progresivo aislamiento de Pinochet con respecto al bloque dominante. Obligado a responder a reclamos contradictorios y a la fragmentación de los grupos que lo apoyaban, vaciló entre la tentación de un populismo tardío sin alguna base social real, la posibilidad de conferir un poder político real a las fuerzas armadas, la opción de prestar el poder del Estado a la comunidad empresarial o la elección de adoptar una posición nacionalista.

La fase aguda de esta crisis recurrente -es decir, que el fenómeno volvía a su punto de partida- se produjo en 1983, al no haber señales para solucionar la crisis económica asociada con la deuda externa incrementada enormemente. La crisis financiera tuvo tal efecto en sectores de la clase media, haciéndoles vacilar su apoyo al régimen militar. Se creó un clima de descontento en las clases populares y fue el comienzo del "surgimiento de un movimiento de masas", de una radicalización más visceral que ideológica, teniendo efecto de suma importancia en el sistema político.

Para entonces, el proyecto político del régimen militar, tendiente a institucionalizar el gobierno de Pinochet para asegurar las transformaciones capitalistas que apuntalarían en el largo plazo al sistema autoritario, terminó en un fracaso originado en su base material. Esto dejó al régimen con el único propósito de la sobrevivencia. Aquí cabe comentar que un régimen militar puede fracasar en su proyecto histórico y sin embargo conservar el control, pues la ausencia de un proyecto o incluso la agudización de una crisis nacional generada por el régimen no son condiciones suficientes para provocar su caída. Esto se debe a que existen varios factores internos del régimen que impiden que pase de crisis recurrentes a un colapso total y final. Estos factores internos se pueden resumir de la siguiente manera:

En primer término, dentro del bloque dominante Pinochet se beneficia con el grado de legitimidad que le otorga la Constitución de 1981, que

establece un punto de encuentro para ese grupo. Hay rasgos impredecibles para quienes, estando dentro del régimen, deserten de sus filas. A esto se añade la voluntad personal de Pinochet de conservar el poder y su determinación de aferrarse a él a cualquier precio.

La segunda fase que bloquea el debilitamiento del régimen surge con la complicidad de las fuerzas armadas. Aislados del resto del país por privilegios y por sus repetidos actos represivos contra la población, apartados por Pinochet del ejercicio directo del poder político, los militares experimentaron, con todo, la crisis social o alguna sensación de fracaso, aunque, de cualquier modo siguieron identificándose sólidamente con el régimen.

Como tercer factor de sustento del régimen está la ambivalencia con respecto a la redemocratización que sentía la mayor parte de la derecha política. En otras palabras, no había ninguna clase política capaz de expresar el descontento de expartidarios desilusionados del régimen y, por lo tanto, de ejercer una presión tendiente a darlo por terminado.

Esto explica que pasar de una etapa de transformaciones *dentro* del régimen a una transición *desde* el autoritarismo requería cambios en los tres factores mencionados y también cambios en la orientación de la oposición.

3.2.6 LAS RELACIONES CON EL EXTERIOR.

3.2.6.1 INTRODUCCION.

Desde el inicio del régimen militar en 1973, la característica principal en cuanto a las Relaciones Internacionales fue de un permanente aislamiento político.⁴³ Sobre la base de cuatro elementos explicativos -el proyecto interno dominante, los estilos de diplomacia, el contexto internacional, y la condición de dependencia transnacional- se sostiene que el aislamiento político experimentado por el gobierno chileno desde 1973 es el resultado directo de: a) el establecimiento de un proyecto nacional autoritario caracterizado por una restricción de la participación política y los derechos humanos; b) la configuración de un controvertido estilo de diplomacia *pretoriano-ideológico* (que es aquel donde se abusa en demasía de la influencia política ejercida por algún grupo militar en el poder) que contrasta con el estilo *civil-pragmático* (a diferencia del anterior, aquí se da efecto práctico a las leyes que emanan o surgen de autoridades competentes en la materia) que tradicionalmente predominó en la diplomacia chilena; y c) la subsistencia de una política exterior marcadamente anticomunista en un contexto mundial distinto al esquema dipolar de guerra fría.

⁴³ El término *aislamiento*, aplicado a la realidad internacional de un país, se entiende no sólo como la ausencia de contactos internacionales sino, más bien, como la inhabilidad por parte de un Estado de establecer o mantener contactos externos positivos y dinámicos. El *aislamiento político* de un Estado implica un deterioro del factor *prestigio nacional*, elemento intangible del poder, particularmente en países que no cuentan con grandes recursos militares y/o económicos. En el caso concreto de Chile, el aislamiento significó que el gobierno militar no podía satisfacer los objetivos nacionales en el contexto mundial con la misma facilidad y éxito alcanzado por sus predecesores.

3.2.4.2 IMPOSICION DEL MODELO AUTORITARIO Y SU REPERCUSION INTERNACIONAL.

La imposición del modelo económico requería una apertura radical de Chile a la economía mundial y, para que se diera el éxito de este nuevo modelo se necesitaba de algo más que de un simple ajuste de la política exterior a las prioridades domésticas del país. Esto fue posible debido en gran parte por la ausencia de una oposición política organizada.

Como resultado de este desgaste de la antigua tradición democrática chilena, los países más variados en cuanto a orientación ideológica suspendieron rápidamente sus relaciones con el gobierno chileno o rebajaron el nivel de sus representaciones en Santiago. Asimismo, el involucramiento y maltrato de ciudadanos extranjeros -incluyendo a periodistas extranjeros y algunos diplomáticos- en diversos incidentes con las FFAA., fue otro factor crítico en el pronto deterioro de las relaciones internacionales del nuevo gobierno con países como Suecia, Francia y Alemania Federal.

De igual modo, el aislamiento político internacional chileno se reflejó en la Asamblea General de la ONU de 1974, donde se aprobó por 90 votos a favor, 26 abstenciones y 8 en contra la primera de sucesivas resoluciones que hasta 1987 condenaron a Chile por violaciones de los derechos humanos. Por estas mismas razones, el gobierno británico suspendió toda ayuda económica a Chile declarando que abrigaba deseos de "una pronta restauración de la democracia y del pleno respeto a los derechos humanos en Chile".⁴⁴ Ese mismo año, los restantes gobiernos europeos comenzaron a reducir progresivamente sus contactos con el régimen militar y, en varias ocasiones, forzaron al gobierno chileno a revocar medidas autoritarias específicas.

Otra expresión del aislamiento es el bajo número de jefes de Estado que visitaron Chile desde septiembre de 1973 a septiembre de 1987, pero en todo caso, recibir muchos jefes de Estado extranjeros no es siempre un indicador

⁴⁴ Declaración citada en *El Mercurio*, 31 de marzo de 1974.

preciso para evaluar la posición de un Estado-nación en el sistema internacional. Lo que sí importa es la calidad de las relaciones exteriores del país en cuestión.

3.2.4.3 LA DIPLOMACIA EN EL REGIMEN MILITAR.

El estilo de diplomacia de un país es el producto de la combinación de una serie de factores subjetivos, tales como la tradición cultural de la nación, sus prácticas políticas anteriores y los valores y enfoques ideológicos de los actores que formulan la política exterior. Desde los años cincuenta hasta 1973, el estilo de diplomacia predominante en Chile era de estilo *civil-pragmático*, caracterizado por: la insistencia en el derecho internacional, el reconocimiento práctico de las realidades del poder mundial y la preponderancia de los diplomáticos de carrera en el manejo de la política exterior. Las FFAA., al asumir el poder en 1973, rompieron con este estilo y le dieron a la política exterior chilena su estilo propio y su visión marcadamente anticomunista del mundo, dando origen a lo que se denomina el estilo *pretoriano-ideológico*, el cual se caracteriza por ser directo, poco flexible y altamente ideológico: tiende a dejar escaso margen a la negociación, el diálogo y los compromisos; y está asociado más bien con personal castrense que con diplomáticos de carrera.⁴⁵

En los primeros años del gobierno militar, la consolidación interna fue la suprema prioridad del régimen y de todos los sectores pro-gobierno. La política exterior ocupó un lugar secundario y ello facilitó la implantación del estilo *pretoriano-ideológico* de diplomacia. El general Pinochet enviaba en diversas misiones diplomáticas a colaboradores militares y civiles muy cercanos. Ello se debía, aparentemente, a que no le atraía el modelo indirecto, circunspeto y

⁴⁵ Idem (24). Capt. "Relaciones exteriores del gobierno militar chileno 1973-1987", por Herald Muñoz. Págs. 253-260.

transigente característico del estilo *civil-pragmático* y porque le interesaba asegurarse que sus emisarios ejecutaran sus encargos de acuerdo a las instrucciones que se les asignaban. Sin embargo, una vez completada la etapa de consolidación y asegurando el nuevo proyecto nacional, sectores *económicos-aperturistas* se pronunciaron en favor de una reevaluación de la importancia de la política internacional y presionaron para que se adoptara un estilo de diplomacia más pragmático y eficiente que facilitara los vínculos externos requeridos para el éxito continuado del modelo de apertura económica.

3.2.4.4 EL AISLAMIENTO POLITICO DEL GOBIERNO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL.

Con la profunda crisis económica de 1982; las restricciones impuestas por la decisión gubernamental de mantener al día la voluminosa deuda externa; el colapso financiero de los principales grupos empresariales y la intervención y liquidación de diversos bancos decretada por el Estado; el aumento del desempleo y las múltiples reformas a la política cambiaria y en la conducción económica del país terminaron por erosionar la dimensión más sólida que exhibía el gobierno militar en sus relaciones internacionales: la imagen económica.

Con todo esto, las autoridades chilenas estaban conscientes de la existencia de vínculos empresariales transnacionales y de la imagen económica positiva que Chile había logrado proyectar en el extranjero. Por ello, el gobierno trató de superar el aislamiento político a través de la senda económica, primero a nivel estatal, donde la tarea consistía en convencer a determinados gobiernos extranjeros que la sólida posición económica de Chile debía motivar replanteamientos de las relaciones bilaterales y, en segundo

término, a nivel privado, donde la meta consistía en fortalecer vínculos con banqueros, corporaciones y otros actores económicos no oficiales de, especialmente, los países desarrollados, para compensar los posibles deterioros de las relaciones públicas y, de manera conjunta, para establecer accesos indirectos regulares a los círculos gubernamentales foráneos.

Por otra parte, con el acceso de los militares al poder en 1973 y el estilo de diplomacia que implantaron, entraron en conflicto con el contexto mundial imperante, caracterizado por un relajamiento de las tensiones entre el Este y el Oeste. A juicio de un autor, el proceso de *détente* constituyó un "obstáculo sistémico" a la orientación de la política exterior del gobierno militar.⁴⁶ Existía, por lo tanto, un alto grado de incongruencia entre la posición de Chile y la realidad política internacional concreta.

Desde su instauración, el régimen chileno se lanzó en una campaña destinada a transformar el orden internacional, informando a Estados Unidos y a otros estados occidentales sobre las desventajas de la "ambivalencia política" y de los "neutralismos cómodos"⁴⁷ que involucraba la *détente*. Naturalmente, la Unión Soviética se convirtió en el blanco principal de esta campaña de denuncias. Esta ofensiva contra la *détente* contribuyó al agravamiento de la situación de aislamiento político provocado por la forma como los militares llegaron al poder y los violentos métodos empleados para combatir a los opositores. Particularmente costoso para el régimen chileno resultó el hecho de que su campaña anti *détente* provocara reacciones negativas en Estados Unidos, con quien mantuvo buenas relaciones la junta militar en un principio. Sin embargo, el gobierno chileno insistió en su discurso anticomunista y en contra de la *détente*, pasando a condenar en consideración de las políticas específicas del gobierno de Carter la actitud "blanda y vacilante" de Occidente frente al comunismo. En términos más directos, el general Pinochet, durante la conmemoración del sexto aniversario del gobierno castrense, trazó un paralelo entre el "imperialismo soviético" y el "imperialismo norteamericano", y condenó

⁴⁶ Ver WILHELMY MANFRED. "Hacia un análisis de la Política Exterior Chilena Contemporánea", *Estudios Internacionales*, núm. 48, octubre-diciembre de 1979. Págs. 468-489.

⁴⁷ Pinochet citado en *Revista Que Pasa*, núm. 288, Santiago, junio de 1978. Pág. 7.

a Estados Unidos por: a) tratar de exportar su propio modelo político a otros países; b) aplicar su doctrina a los derechos humanos en forma selectiva y c) no desempeñar el papel que le correspondía como líder mundial del anticomunismo.⁴⁸

Como un indicador de la soledad del régimen militar chileno en este nuevo contexto regional democrático, es significativo que el general Pinochet no haya concurrido a ninguna de las ceremonias de instalación de nuevos gobiernos civiles. La consecuencia inmediata para Chile fue quedar al margen de la serie de iniciativas de concertación política y económica que se concretaron en América Latina como el "Grupo de los Ocho" tendientes a enfrentar con éxito los graves y múltiples problemas que dificultan el desarrollo regional.

En definitiva, la clave para solucionar el aislamiento internacional del régimen militar no estaba en la estrategia más adecuada de política exterior a seguir, el estilo de diplomacia vigente o el contexto mundial imperante, sino en la naturaleza del ordenamiento interno de Chile. Mientras continuaran las medidas autoritarias persistiría la imagen negativa del régimen en el exterior, y el aislamiento político seguiría caracterizando a las relaciones internacionales del gobierno militar chileno.

⁴⁸ Véase: "Texto del Mensaje del Presidente Pinochet", Diario *El Mercurio*, 12 de septiembre de 1970. Pág. C-8.

3.3 LA OPOSICION POLITICA.

3.3.1 LOS NUEVOS ACTORES POLITICOS DE LA OPOSICION.

En el régimen político dictatorial, se observó un desplazamiento de la acción política hacia ámbitos que antes, sin ser apolíticos o despolitizados, no tenían acción protagónica. El más importante de éstos es el ámbito militar. Las fuerzas armadas no incursionaron en el escenario político en calidad de instrumento. Lo invadieron y destruyeron con la pretensión de refundarlo a partir de su propia estructura. La política se militarizó, pero esto no se pudo hacer sin el costo de la politización de lo militar y, además, de una creciente participación militar en la vida de la sociedad en su conjunto.

Un segundo actor político es la Iglesia Católica. Después del golpe, se convirtió en la única estructura nacional capaz, si no de oponerse, al menos de registrar y tratar de paliar los efectos de la represión masiva. Luego se le planteó el problema de redefinir sus canales de influencia ideológica hacia el gobierno, hacia otros órganos políticos y hacia la sociedad en general.

Otro sector importante como instancia de articulación de los intereses de la población y de enfrentamiento de éstos con las políticas de la dictadura es el movimiento sindical, el cual tuvo un mayor peso como actor político al destruirse el sistema político prevaleciente hasta antes del golpe.

Por otra parte, la izquierda chilena se había dividido en dos bloques en 1982, confirmándose primero por una declaración del Secretariado de la Convergencia Socialista, fechada el 1 de mayo de 1982 en Santiago de Chile, titulada "Nuestra propuesta: unidad y solidaridad frente a la crisis nacional", firmada por el Partido Socialista de Chile, el MAPU, el MAPU Obrero y Campesino y la Izquierda Cristiana y otra declaración, fechada el 21 de mayo

en México, titulada "Llamamiento a la unidad y al combate", firmada por el Partido Socialista de Chile, el Partido Comunista, el Partido Radical y el MIR.

En cuanto a la composición de sus cuadros, el bloque PC-PR-PS-MIR, reunía a los políticos más integrados a la élite profesional del sistema político chileno, es decir, mayor número de cuadros con trayectoria política profesional en cargos de elección popular antes de 1973 (con la excepción del MIR). En cambio, la Convergencia Socialista reunía, en general, cuadros más jóvenes, por lo tanto, de menor trayectoria dentro del antiguo sistema político y distintivamente marcados por su formación universitaria, que les permitió una integración al aparato de Estado en puestos de designación más que de elección.

Estaba claro que las características de la derrota militar sufrida por la izquierda a manos de las FFAA. tenían importancia en la definición del carácter de la dictadura en los aspectos político, militar e ideológico. Más indudable era la aparición de nuevos actores políticos si se entiende que la victoria militar en una guerra interna nunca puede ser completa. No es posible la destrucción de un enemigo político en el terreno militar, en tanto éste enemigo tenga raíces en algún sector relevante de la sociedad.⁴⁹

3.3.2 EL DESARROLLO DE LA OPOSICION CONTRA EL REGIMEN MILITAR.

Sin lugar a dudas, la división de la izquierda chilena era un hecho grave que mostraba un movimiento de retroceso. Los problemas teóricos que se planteaban en cada bloque eran generales, surgidos de una situación concreta y dentro de esta misma situación se debían buscar los elementos para responder

⁴⁹ VOCELEVZKY RICARDO. *La izquierda chilena en 1982*. Revista Mexicana de Sociología. Año XLV, Núm. 3. Instituto de Investigaciones Sociales, U.N.A.M., México, julio-septiembre 1983.

a ellos. La única fuente confiable donde podían indagar era en su propia historia, pues ésta les planteaba redefinir y revisar su papel en el sistema político chileno antes de 1973 y el sentido de su participación en el gobierno de la UP. La clarificación de posiciones respecto de estos puntos podía producir nuevas escisiones, pero, en el largo plazo, podía fortalecer alternativas claras para el presente y el futuro. Resultaba lógico que ignorar estas cuestiones no produciría la unidad y, por el contrario, postergaría la creación y fortalecimiento de los instrumentos políticos necesarios para enfrentar la dictadura.

La crisis que tuvo que enfrentar el régimen militar desde 1981 no se originó por las acciones de la oposición. Existe una cierta paradoja en la oposición al régimen militar chileno y a otros del mismo tipo,⁵⁰ en los que la meta de la oposición consiste en la eliminación del régimen mismo y no sólo en la sustitución del gobierno por una oposición, como ocurre en las democracias.

Un hecho importante es que en estos regímenes la acción de la oposición tiene varios propósitos. El primer objetivo, fundamental, es la supervivencia, el mantenimiento y la reproducción de las estructuras organizativas. El segundo, más obvio, es la lucha por derrocar al régimen. El tercero es la elaboración y preparación de una alternativa al régimen militar. El cuarto es la tarea de introducir la democracia en la sociedad. Bajo un régimen militar, este cuarto objetivo tiene por lo menos tres dimensiones. Primero está la constitución y organización de los actores sociales que expresan la propia dinámica e independencia de la sociedad civil. El segundo es la resistencia a las transformaciones que el proyecto del régimen trata de imponer a la sociedad, los obstáculos y barreras colocadas en el camino de las políticas estatales. El tercero se refiere a victorias democráticas parciales y al progreso en la creación de espacios democráticos.

Desde 1980 en adelante, después del referendo, el tema del derrocamiento o la terminación del régimen militar comenzó a figurar

⁵⁰ Estos son regímenes que, sin proponérselo, suscitan oportunidades y espacios políticos en los cuales pueden expresarse diversas formas de disidencia y oposición, aunque dentro de límites estrictos y con riesgo de represión.

prominentemente en el pensamiento de la oposición. Esta oposición inicial al régimen militar provino de los sectores sociales y políticos identificados con la UP, es decir de quienes fueron en realidad los derrotados por el golpe militar. La magnitud de la represión aseguró que la oposición tuviera que preocuparse casi exclusivamente por la supervivencia física de sus líderes y activistas y por la preservación de una estructura organizativa mínima.

Después de un tiempo, la represión tocó al centro político demócrata-cristiano. El bloqueo de su intento inicial de colaboración condicional con el régimen militar, junto con una creciente conciencia de la verdadera naturaleza del gobierno, fueron orillando de manera paulatina a los democristianos hacia el campo de la oposición. El proceso de unificación de la oposición culminó en la época del referendo de 1980. El predominio público del centro político se hizo evidente en ese momento, pero la mayor parte del respaldo social a la oposición provenía de los sectores izquierdistas. No obstante, el período del referendo también marcó el agotamiento de un tipo de actividad política que consistía en la revitalización y coordinación de estructuras partidarias que databan de la época democrática. Pero, al mismo tiempo, la estructura política de partidos que surgió durante el régimen democrático, a pesar de fragmentarse, había sido capaz de sobrevivir bajo el régimen militar. Por lo tanto; existió una oposición política cuyas organizaciones derivaron de condiciones históricas muy diferentes de las actuales. Esto explica el por qué de la lentitud de la reconstrucción política de la oposición.

Para 1983, se marcó la división del cauce histórico del régimen militar. Por primera vez desde 1973, el gobierno y la oposición operaban en la misma arena, de modo que las actividades de la última afectaban al primero y lo obligaban a responder. La ocupación de este espacio político y la necesidad de enfrentar al gobierno en ese nivel obligó a la oposición a reorganizarse desde la base, constituyendo grandes bloques.⁵¹

⁵¹ Estos fueron la Alianza Democrática (compuesta por un sector de la derecha democrática, los demócrata-cristianos, los socialdemócratas, el Partido Radical, y uno de los partidos socialistas); el Bloque Socialista (compuesto por el mismo Partido Socialista y los nuevos grupos de la izquierda socialista, como el MAPU, Izquierda Cristiana y Convergencia); y el

3.3.3 LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA.

Con la destrucción de la institucionalidad democrática no sólo se afectó la forma de organización estatal sino la existencia de una "red de múltiples organizaciones que se articulaban desde el nivel local hasta el nacional, siendo canales efectivos de participación. Este proceso incluye a las organizaciones de los sectores que apoyaron el golpe porque lo incompatible con el gobierno militar era precisamente esa forma de organización".⁵²

Los gobiernos autoritarios como el chileno buscaron bloquear el desarrollo o rearticulación de organizaciones representativas, pero el mismo modelo de desarrollo generó fuertes tensiones y conflictos que no pudieron ser absorbidos ni canalizados, por lo que, el surgimiento espontáneo de nuevas fuerzas políticas era inevitable.

En este mismo sentido, los espacios que el pueblo chileno fue conquistando se originaron por la incapacidad de la junta militar para paralizar a toda la población, para aniquilar la capacidad de lucha de un movimiento popular que resistió en todos los terrenos buscando nuevas formas de expresión.

Así, las primeras jornadas de protesta fueron producto de la crisis económica y tuvieron un carácter heterogéneo y espontáneo, manifestado en términos de un frente muy amplio. Estas jornadas de protesta fueron convocadas al margen de los partidos políticos expresado por la situación de desarticulación que vivían los partidos de izquierda. Resultaba claro que a la oposición todavía le faltaba una definición precisa del proceso de transición que confiaba generar y, de igual manera enfrentaba el problema de como relacionarse con una base social diversificada, que encontraba problemas enormes en la vida cotidiana. La desarticulación entre el "mundo político" y el

Movimiento Democrata Popular (compuesto por el Partido Comunista, el otro Partido Socialista, el MIR y otras fracciones socialistas).

⁵² Artículo de José M. Insulza. "Chile: los obstáculos de la Democracia", en *Diario Excelsior*, 11 de septiembre de 1984.

"mundo social" obligó a la oposición a diversificar sus apelaciones políticas y culturales y a aceptar una mayor autonomía de la conciencia popular y de la organización social, encontrando las vías de articular a los distintos actores políticos, pero en un proyecto nacional democrático de nuevo tipo y no simplemente restauracionista donde confluyeran todas las formas de lucha populares³³

A este respecto, El planteamiento *mutatis mutandi* es válido para esta situación de análisis, pues frente a la emergencia de nuevos sujetos políticos, por un lado, y por otro, frente a la necesidad de recuperar formas de ejercicio y participación democrática, de rearticulación de partidos políticos y sindicatos, el problema era el de articular estos dos procesos, evitando, como dice Poulantzas, la reducción de uno en otro o el simple paralelismo y yuxtaposición de ambos.³⁴

Para finalizar este punto, se puede afirmar que la gran tarea consistía en forjar un instrumento político, de una vanguardia que rompiera el esquema tripartita del arco político nacional, capaz de constituirse en fuerza política dirigente, que orientara, organizara y condujera al movimiento social desencadenado. Pero, no había viabilidad para proyectar simplemente el modelo político de acción anterior, sino que este proceso debía insertarse en una situación nueva que planteara nuevas contradicciones y nuevos campos de lucha y enfrentamientos.

³³ CASTRO ESCUDERO TERESA. *Movimiento popular y democracia en Chile*. Revista Mexicana de Sociología. Año XLVIII, Núm. 3. Instituto de Investigaciones Sociales, U.N.A.M., México, julio-septiembre 1986.

³⁴ POULANTZAS NICOS. *Estado, Poder y Socialismo*. Siglo XXI Editores, México, 1980. Pág. 303.

CAPITULO IV

TRANSICION DEMOCRATICA.

4.1 EXPECTATIVAS DEL PROCESO DE DEMOCRATIZACION.

Para reexaminar el tema que se ha venido desarrollando a lo largo de este trabajo ubicándolo en el contexto general de las transiciones desde los regímenes autoritarios a los democráticos, es necesario tener presente la distinción entre las transformaciones que se producen dentro de un régimen militar y lo llevan a abrir espacios para la competición y la representación políticas restringidas (es decir, a institucionalizar un modelo autoritario), por un lado, y por el otro los procesos que conducen a un régimen propiamente democrático. Ciertamente podría darse una combinación entre los dos procesos y que la institucionalización desencadenara un proceso de transición, aunque es importante no confundir entre sí estas formas de apertura, ni verlas a todas como transiciones a un régimen democrático.¹

La oposición a los regímenes autoritarios no concierne sólo a la sustitución de un gobierno por otro, o a la reinstalación de un régimen anterior, sino que del mismo modo tiene que ver con la resistencia a un determinado proyecto de dominación.

¹ O'DONNELL GUILLERMO y otros (Compiladores). *Transiciones desde un gobierno autoritario. América Latina*. Vol. 2. Capt. 5 "La evolución política del régimen militar chileno y los problemas en la transición a la democracia" por Manuel A. Garralón. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1988. Págs. 147-185.

En Chile, el autoritarismo no estuvo asociado a una modernización capitalista exitosa. A diferencia de lo que aconteció bajo la dictadura franquista en los años sesenta y bajo la dictadura brasileña en los setenta, en Chile no tuvo lugar un proceso de urbanización e industrialización, no hubo una expansión de la educación ni de la organización sindical y gremial, con lo cual, no se afirma que la sociedad chilena no haya sufrido transformaciones. Hay cambios sociales, pero más como destrucción de las anteriores estructuras que como desarrollo de nuevas. Por consiguiente y haciendo una comparación, no se vió surgir una nueva cultura política que impulsara los procesos de democratización en España y Brasil, como producto de la modernización socioeconómica, mientras que en el caso chileno, la experiencia autoritaria ha modificado la cultura política tradicional (revalorización de la llamada "democracia formal" y de las estrategias de concertación, énfasis en los derechos humanos) pero de un modo defensivo, como denuncia del autoritarismo.²

De igual forma, en este caso fue necesario el paso de varios años para que se diera la pauta a un genuino proceso de transición a la democracia, una vez que se reunieron algunas condiciones indispensables atingentes a este tipo de transformaciones sociopolíticas y, desde el punto de vista de las transiciones democráticas. la coyuntura en Chile presentó cierta paradoja, pues en una perspectiva histórica, este país poseía las condiciones necesarias para la pronta restauración de la democracia perdida en el golpe militar de 1973. Entre otros factores, se puede citar la larga tradición de regímenes democráticos, la fuerza relativa de aparatos partidarios de extensión nacional, y el aliento de la participación política y una extensa sociedad civil.

Ciertamente, la solidez histórica de la estructura política de partidos y la debilidad de las organizaciones independientes de la sociedad civil mostraban un aspecto negativo, con lo cual el proceso de renovación y reconstrucción resultaba difícil y complicado.

² MEYER LORENZO y REYNA JOSE LUIS (Coordinadores). *Los sistemas políticos en América Latina*. Capt.: "El sistema de partidos en Chile: una continuidad problemática" por Herbert Lechner. Editorial Siglo XXI, Universidad de las Naciones Unidas, 1989. Págs 69-105.

A falta de una crisis terminal del régimen militar, la democratización progresó más en términos de organización social que en el nivel político, dando la impresión de una transición invisible a la democracia, medida en términos de la democratización de la sociedad y de la reconstrucción política de la oposición.

La existencia de fuerzas armadas modernas y unificadas relativamente, y una clase media diversificada y políticamente autónoma, hacía improbable que una insurrección que derrotara a los militares pusiera fin al régimen, considerándose carente de realismo. La oposición necesitaba de un doble enfoque ante la situación de aislamiento y marginación de las fuerzas armadas frente a la crisis social. Primero, se debía promover una movilización social que persuadiera a los militares de que la sociedad era ingobernable, forzándolos al reconocimiento de su fracaso. Segundo, la oposición debía crear un frente político que congregara reclamos sociales en torno de una alternativa propuesta para reemplazar el régimen militar. Esta opción debía darse bajo dos niveles. Uno involucraba un acuerdo acerca del final de la dictadura y las instituciones que la reemplazarían, es decir, un acuerdo político que englobara a todos los sectores opuestos a la dictadura. El otro nivel requería el establecimiento de un bloque sociopolítico en favor de una perspectiva de cambio social. Resultaba pues evidente que las fuerzas sociales y políticas que constituyeran este bloque provendrían de los sectores que en décadas anteriores chocaron entre sí a consecuencia de sus proyectos conflictivos de transformación y que fracasaron a causa de su retraimiento.³

³ *idem* (9).

4.2 LA CONCERTACION DE LA OPOSICION.

Una vez extinguidas las protestas sociales por el régimen militar, resulta oportuno destacar -a manera de referencia- el notable despegue económico de Chile a mediados de la década de los ochenta, al entrar en funciones un nuevo equipo económico de la misma orientación neoliberal de los *Chicago boys*, encabezado por el economista Hernán Buchi. De esta manera, la modernización autoritaria chilena logró cambiar radicalmente el modo de funcionamiento de la sociedad. Una vez comenzada la transición política, el país se encontraba sin sobresaltos económicos y en las mejores condiciones para asentar una sociedad política que había aprendido las lecciones de los desencuentros del pasado.⁴

Tenemos entonces que la primera coalición política opositora que se gestó se constituyó por la Democracia Cristiana, por una parte sustancial del Partido Socialista, y por otros sectores menores -la Alianza Democrática-, que en ausencia de una propuesta transicional, exigían la renuncia inmediata de Pinochet, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la constitución de un gobierno de transición. Se debe agregar que el Partido Comunista, aunque no participó en la coalición política, también se adhirió y llamó a su militancia a votar por el candidato único de la oposición democrática, aunque tardíamente y deteriorado por pugnas internas y mediando una radicalización de sus juventudes.

Fue así como los partidos políticos empezaron a jugar un papel más destacado a partir del período que va del plebiscito (octubre de 1988) a las elecciones parlamentarias y presidenciales de diciembre de 1989, abriéndose espacio gracias a las protestas del movimiento social. La alianza de partidos de centro y de izquierda que se formó para el plebiscito se denominó Concertación de Partidos por el NO, y luego pasó a llamarse Concertación de Partidos por la Democracia para enfrentar las elecciones de diciembre de 1989 y asumir el

⁴ HIDALGO PAULO. *Reformas económicas y actores políticos en México y Chile. Un análisis exploratorio*. México, 1990.

poder ejecutivo en marzo de 1990, encabezando el gobierno de transición a la democracia de cuatro años de duración.⁵

En Chile, la transición fue en parte posible porque la oposición democrática elaboró un conjunto de pactos o entendimientos básicos para llevar al país a la democracia. Esto se llevó a la práctica pagando determinados costos, pero, sin duda, logrando beneficios que encaminaron al país por una senda de democratización gradual. Esta serie de convenios se pueden resumir de modo sinóptico en cuatro puntos elementales:⁶

1) *Pacto constitucional*. Esta fue la certidumbre de la oposición después de discutir sobre la imposibilidad de un cambio de régimen político sin reconocer la Constitución de 1980, junto con la legalidad que sostenía el régimen militar creada en el mismo organismo legal. La oposición se conjuntó primero alrededor de la denominada "Concertación por el NO", es decir, la campaña que emprendió la oposición, primero, para inscribir en los registros al mayor número de votantes, y después para realizar una campaña promoviendo a la ciudadanía a votar NO en el plebiscito convocado por el gobierno militar, que ratificara por otro período de ocho años el régimen del general Pinochet. Este evento se realizó el 5 de octubre de 1988. La oposición democrática triunfó con un 56% de los sufragios, y la posición SI (por la continuidad de Pinochet por ocho años) obtuvo un 44% de los votos. Este fue el acto que dió pauta hacia la transición política.

2) *Pacto o acuerdo partidista*. Esta fue la etapa de una coalición inestructurada a una coalición de tipo más permanente, con algunas normas de funcionamiento. Se creó la Concertación de Partidos por la Democracia que proponía a Patricio Aylwin para la elección presidencial del 14 de diciembre de 1989. Este obtuvo un 55.2% de los votos, el candidato del régimen militar Hernán Buchi logró un 29.4%, y Francisco J. Errazuriz, un empresario de éxito

⁵ BARRERA MANUEL. *Política de ajuste y proceso de democratización en Chile*. Revista Mexicana de Sociología, Año LVI, Núm. 1, Instituto de Investigaciones Sociales, U.N.A.M., enero-marzo de 1994. Págs. 105-129.

⁶ BRUNNER JOSE JOAQUIN. "Chile. Clave de una transición". Leviatán. Núm. 40. Verano 1990. También consúltese el artículo de Manuel Antonio Garretón, "La transición chilena: un cerdo de caja". Revista NEXOS, Núm. 150, México, Marzo 1991.

que se lanzó improvisadamente a la arena política con un discurso de corte populista, obtuvo un 15,4% de los votos.

3) *Pacto electoral y de gobierno.* Este se orientó en doble sentido. Por una parte, se acordó la repartición de diputaciones y senadurías mediante negociación, puesto que el sistema electoral que heredó el régimen militar forzaba a un bipartidismo, y en consecuencia, a crear dos grandes coaliciones para lograr atraer el mayor número de votos posibles. Por otro lado, se elaboró un programa de gobierno que atendió medidas destinadas a democratizar en plenitud al país, resolver del mejor modo la terrible herencia de la violación de los derechos humanos y sanar mediante reformas (laboral y tributaria) ciertos problemas sociales urgentes, como la falta de servicios mínimos, salarios deprimidos y desempleo. Se debe estipular que en el período que media entre el plebiscito y la elección presidencial, se acordó entre el gobierno militar saliente y la oposición democrática triunfante, una serie de reformas a la Constitución votadas en un referendium *ad-hoc* que por lo menos moderó los aspectos más autoritarios que aún lo afectan: Permanencia del general Pinochet en la Comandancia en jefe del Ejército, existencia de senadores designados, inamovilidad de la mayoría de los alcaldes del país, existencia del Consejo de Seguridad Nacional.

4) *Pacto en torno a las claves del desarrollo del país.* Se refiere a ciertos acuerdos a largo plazo en torno a la absoluta mantención de una economía abierta, con una fuerte inversión privada tanto nacional como extranjera y a reconocer el papel primordial del mercado como asignador de recursos. Desde un principio se apaciguó o desactivó cualquier amenaza al funcionamiento del régimen de acumulación capitalista en el país, ante los temores de los empresarios nacionales.

5) Aunque implícito, también se dió en esta etapa lo que se puede denominar un pacto *intraélite* dentro de la propia coalición democrática (demócratacristianos y socialistas), que más allá de las identidades partidarias permitió el reencuentro de la élite de origen católico hoy día establecida en su mayoría en los puestos directivos del Partido Socialista, con el viejo liderazgo

demócratacristiano perteneciente a la misma matriz elitaria. Esto nos indica como ha triunfado este grupo de élites en la política chilena, constituyéndose en el eje de la estabilidad democrática del país.

4.3 PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA TRANSICION CHILENA.

4.3.1 EVALUACION DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE REGIMEN MILITAR Y OPOSICION.

La derrota sufrida por Pinochet y el régimen militar en el Plebiscito del 5 de octubre tuvo un doble significado. Por un lado, puso fin a la intención de proyectar la dictadura a través de un régimen autoritario como el previsto por la Constitución de 1980 y al propósito de Pinochet de perpetuarse en el poder para asegurarse ese paso de dictadura militar a régimen autoritario. Por otro lado, desató un proceso de transición a la democracia, que se desarrolla dentro de plazos y mecanismos establecidos por el régimen pero modificados en parte por la oposición y alterados de manera sustancial en su significado por esta última. Sin duda, se trató de una elección fundante o crítica, y los resultados de la elección presidencial y parlamentarias de diciembre de 1989 no hacen sino ratificar este carácter⁷.

Si se afirma que el Plebiscito desató un proceso de transición, ello no significó que estuviera completamente terminado cuando se inaugura el régimen democrático con el primer gobierno elegido. Desde esta perspectiva, se pueden analizar los siguientes fenómenos.

⁷ Después de la victoria del NO en el Plebiscito de 1988, Pinochet se mantuvo un año en el poder, realizándose elecciones presidenciales y parlamentarias en diciembre de 1989.

En primer lugar, después del Plebiscito, se produce el aislamiento político de los sectores "duros" identificados con el mantenimiento de Pinochet en el poder o con la total continuidad institucional autoritaria. En el plano militar, todas las señales apuntaron a un gradual retiro del poder político por parte de las Fuerzas Armadas, pese a la retórica y amenazas de Pinochet, de algunos de los oficiales más allegados a él, inclusive de algunas declaraciones del Ejército. En este sentido, la voluntad declarada de Pinochet de continuar como Comandante en Jefe del Ejército en el régimen democrático y el apoyo del Ejército al mismo eran elementos defensivos evidentes dentro de este retiro gradual y obedecían a imperativos internos jerárquico-institucionales del Ejército, pero resultaba obvio que variarían en un escenario político democrático. Esta tendencia tuvo luego una contraparte. Para la segunda mitad de 1989, tanto Pinochet como el núcleo duro en torno a él, especialmente en el Ejército, iniciaron una estrategia conducente a mantener la mayor autonomía corporativa y de influencia política de los militares en el régimen futuro, por un lado y, por otra parte, a institucionalizar la mayor cantidad de enclaves autoritarios que proyectaran al régimen militar en el futuro régimen democrático e hicieran la tarea del primer gobierno extremadamente difícil, posiblemente buscando su rápida decadencia. Sin embargo, las reformas constitucionales que los partidos de la opositora Concertación de Partidos por la Democracia, junto con un sector de Derecha, lograron imponer a través de complejas negociaciones con el gobierno y hacer plebiscitar en junio de 1989 tendía precisamente a reducir algunos de estos enclaves autoritarios exclusivamente en la cuestión institucional (flexibilización del sistema de reforma constitucional, reducción a cuatro años del primer período presidencial, entre otros).

En segundo término, en el plano civil, este aislamiento inicial de los sectores "duros" o continuistas del régimen militar, se expresó en una aparente derrota política de los grupos fascistas como Avanzada Nacional o de los sectores expresados en la Unión Demócrata Independiente (UDI), carentes de todo proyecto político viable que expresara a la Derecha social y política. Por primera vez, fueron obligados a sumarse subordinadamente a Renovación

Nacional, esto porque surgió del mismo modo, un sector "blando"² en el régimen (Renovación Nacional) que miraba más a su futuro como partido de derecha democrática que a su carácter de heredero y proyección del régimen militar, lo que lo llevó a distanciarse de éste y a negociar con la Concertación opositora las reformas constitucionales en julio de 1989. Este proceso fue contrarrestado por los convenios en la Derecha respecto a las candidaturas presidenciales y parlamentarias. En ellas, las presiones del gobierno, del sector empresarial, de la UDI, carentes de toda visión a largo plazo, impusieron la candidatura de un independiente, ligado al régimen militar y, por lo tanto, a la "derecha heredera" de éste (H. Buchi) en desmedro de un político que representara la tendencia de la "derecha democrática" (S. Jarpa), la que sí obtuvo compensaciones en el plano de las candidaturas parlamentarias. Se destruía, de esta manera, la mejor posibilidad de construcción de una derecha partidaria con un papel claro de oposición democrática en el futuro.

En tercer lugar, el proceso de la negociación entre régimen y oposición expresado en las reformas constitucionales aprobadas en el plebiscito del 30 de julio. Si bien, esta negociación parecía haberse efectuado a través de intermediarios civiles, la Derecha expresada en Renovación Nacional y el Gobierno expresado en el Ministerio del Interior, es un hecho que se trató de una negociación entre las Fuerzas Armadas, y el paso por la junta así lo confirma, y la Oposición política expresada en la Concertación de Partidos por la Democracia, resulta además obvio que tratándose de una negociación hecha bajo una dictadura que terminaba, ella no consagró una democracia política plena, sino que dejó importantes aspectos pendientes, en la forma, como se ha indicado, de "enclaves autoritarios". Las reformas constitucionales que se sancionaron era un primer paso que debía completarse en el primer gobierno y parlamento democráticos.

² Los llamados sectores "blandos", en la primera fase del régimen autoritario, conocida como fase "reactiva" es casi imposible distinguirlos de los sectores "duros". Al igual que éstos, estarán dispuestos a recurrir a la represión y tolerarán las arbitrariedades del ministerio o del organismo de seguridad correspondiente. Lo que los convierte en "blandos" es su creciente conciencia de que el régimen que contribuyeron a implantar, y en el cual, por lo común ocupan cargos importantes, tendrá que recurrir en un futuro previsible a algún grado o forma de legitimación electoral.

Aquí se debe analizar que para la Oposición, el proceso de transición que se desencadenó del Plebiscito del 5 de octubre de 1988, tuvo un doble significado. Por un lado, se convirtió por vez primera en quince años, en el actor principal y dirigente del proceso político. Por otra parte, le puso una tarea central: llegar a las primeras elecciones en las mejores condiciones democráticas, con la finalidad de asegurar un primer gobierno democrático mayoritario. Se trataba de transformar la coalición victoriosa del Plebiscito en coalición de Gobierno, implicando, por ende, un convenio de gobierno entre todos sus integrantes, lo que, a su vez, significaba un candidato presidencial común y único. Esto se haría seguir por un acuerdo electoral y parlamentario que correspondiera a la diversidad político-partidaria de la oposición. Finalmente, un programa que asegurara complementar la transición en términos institucionales, terminando con los enclaves autoritarios mencionados y empezar las transformaciones sociales que el país requería: ataque a la pobreza, democratización y modernización en los ámbitos en que el gobierno militar impuso su modelo, creación de mecanismos con mayor participación y libertad para restituir la dignidad y plena ciudadanía social y política de los chilenos.⁹

Sin embargo, cabe comentar que se debían afrontar dos obstáculos. El primero era la sugestión del centro político, la Democracia Cristiana, de reproducir su camino propio, aislándose en una coalición de centro o centro-derecha que sería necesariamente minorista. La segunda sugestión venía de ciertos sectores izquierdistas para constituirse en oposición democrática al primer gobierno, para no pagar los costos de la transición, convirtiéndose en el partido de las demandas sociales que hace "pagar la cuenta" al partido que administra la transición.

Pese a todo, se impuso la línea más adecuada, cual era la constitución de una mayoría sociopolítica de Centro e Izquierda (Concertación de Partidos por la Democracia, que también integró a algunos grupos de centro-derecha) que enfrentó, con un sólo candidato presidencial, un programa común de gobierno y un pacto electoral parlamentario, las primeras elecciones competitivas en

⁹ Ver "Programa de Gobierno de la Concertación por la Democracia", Santiago, julio 1989.

diciembre, para realizar lo que se denominó "gobierno de transición de cuatro años" y que, en realidad corresponde al primer gobierno democrático. Este era, sin duda, el logro más importante de la transición chilena y en ello residía la fuerza de dicho gobierno, aun cuando haya habido tareas de transición pendientes.

Ello resolvería en teoría tres problemas cruciales: El drama de los gobiernos chilenos minoristas, el drama de las transiciones en que unos administran la transición y otros administran las demandas sociales, retrocediendo a situaciones de inestabilidad y reproduciendo la polarización que puso fin al régimen democrático precedente y, la incorporación del Partido Comunista como fuerza minoritaria en el interior del sistema democrático, aislando sus sectores insurreccionales.

4.3.2 LA APERTURA DEMOCRATICA Y SUS DESAFIOS.

El 11 de marzo de 1990, con la apertura del gobierno de Patricio Aylwin, terminó la transición chilena desde un régimen militar a uno democrático y, se realizó un proceso de transición a la democracia política. En ese sentido, aunque en el discurso de la Concertación se habló de "Gobierno de transición por cuatro años", técnicamente la transición terminó cuando ese Gobierno se instaló. Sin embargo, como se trató de una "transición incompleta" con enclaves autoritarios o herencias dejadas por el régimen militar, el primer gobierno y parlamento democráticos debía enfrentar simultáneamente la tarea de completar la transición e iniciar la consolidación democrática. En este punto quiero enfatizar y tener presente que las transiciones sólo resuelven el problema del cambio de régimen (dictadura por democracia) pero dejan pendientes los problemas de transformación social, que en países latinoamericanos sólo pueden realizarse en democracia. De igual manera, estas

transformaciones exigen la participación y movilización de amplios sectores populares y de capas medias y señalan a la democratización de la sociedad. En un país como Chile esta democratización y modernización más globales son una de las condiciones de la consolidación de la democracia política.

Resultaba evidente que existían diversos escenarios posibles para esta apertura democrática. El eje que definía estos escenarios era el resultado de las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre de 1989 en el supuesto de que no habría regresión militarista en el período que va desde diciembre hasta la instalación del Gobierno y Parlamento democráticos en marzo de 1990.

En este contexto es importante destacar que si en esas elecciones hubiera sido derrotada la Concertación de Partidos por la Democracia, se habría dado el caso de prolongación de una situación de transición incompleta y de extensión de los enclaves autoritarios. Esto habría llevado a una situación de gran inestabilidad política, la que hubiera implicado una presencia más directa de las Fuerzas Armadas en el poder político. Se trataba pues de un escenario altamente improbable, dado el carácter ratificador de las elecciones respecto del rasgo fundante del plebiscito de 1988.

Las condiciones en que se inaugura la democracia en Chile tienen que ver con las tareas planteadas por las características de la transición vivida y por las exigencias de la consolidación democrática. Ambas tareas debían ser asumidas por el primer gobierno democrático. De tal manera, las condiciones de la inauguración democrática se pueden examinar desde una triple perspectiva:

1) La primera es vista desde la perspectiva de la naturaleza del primer gobierno democrático. En general, las condiciones sociopolíticas en que se inaugura la democracia en Chile eran sin duda más favorables que los que se presentaron en otros casos latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la naturaleza del primer gobierno democrático, como fue la existencia de una

coalición entre todos los sectores opuestos a la dictadura.¹⁰ Las condiciones negativas estaban dadas por los enclaves autoritarios y, particularmente, por la tendencia de algunos sectores a la "bunkerización" del Ejército en torno a Pinochet para buscar mantener su liderazgo institucional.

2) Una segunda perspectiva son las condiciones que se derivan del tipo de transición al que se ha hecho referencia. En primer plano, estaban las condiciones heredadas del proceso de transición -ya se mencionó que se trataba de una transición incompleta-, expresada por la permanencia de enclaves autoritarios.¹¹ Estos enclaves autoritarios son de tres tipos: Institucionales, actorales y ético-simbólicos.

a) El enclave institucional se refiere tanto a aspectos y elementos de la Constitución que quedaron sin modificar y que marcan un rasgo predominantemente autoritario como de otras cuestiones en ámbitos más específicos de la sociedad (leyes constitucionales sobre Banco Central, Fuerzas Armadas, Educación, Congreso, Municipalidad, etc., y otras normas como la legislación laboral). La superación, eliminación o neutralización de estos enclaves era cuestión, por una parte, de mayorías políticas más allá de la Concertación en el caso de Quorum altos, implicando, por ende, acuerdos o pactos parlamentarios; por otro lado, de concertación y movilización de actores en el ámbito específico, bajo el amparo del régimen democrático. Esto era posible en el primer momento de mayor legitimidad del nuevo régimen y nuevo gobierno.

b) El enclave actoral se refiere a las Fuerzas Armadas, a la Derecha política y al sector empresarial. El primero, las Fuerzas Armadas, el más importante de ellos, el problema debía pensarse en términos de correlación de fuerzas en el plano de la legitimidad frente a la población.¹² En ese sentido, era

¹⁰ En Brasil, el caso no fue el mismo, por cuanto se trató de una primera coalición con sectores significativos provenientes del régimen militar y no sólo de un gobierno de oposición.

¹¹ Para una explicación más detallada y definida de los "enclaves autoritarios", ver MANUEL ANTONIO GARRETON: "La Posibilidad Democrática en Chile", Cuaderno de Difusión, FLACSO, Santiago, 1989.

¹² Ver AUGUSTO VARAS: "La legitimidad social de las Fuerzas Armadas en política", (Documento de Trabajo 424, FLACSO, Agosto 1989) donde se muestra el desequilibrio entre

posible reducir la influencia política de las Fuerzas Armadas, sin desmedrar su integridad institucional, ello, suponiendo la capacidad del actor político y de la sociedad de generar formas alternativas de conocimiento sobre lo militar que permitiera la interlocución en igualdad de términos. Se debía transigir por la seguridad que se les ofreciera a las Fuerzas Armadas en torno a la cuestión de los juicios y castigos por las violaciones de derechos humanos o de seguridad personal. El segundo actor, la Derecha política, donde el problema residía en si se lograba constituir como polo dominante en el interior de la Derecha el sector que aspiraba a ocupar un espacio de oposición democrática al primer gobierno elegido (Renovación Nacional) o si sería el sector hereditario del autoritarismo (UDI) el que se imponería, neutralizando los esfuerzos del primero. En cuanto al actor empresarial, no habiendo sido en ningún momento motor de la transición, sino más bien antagónico a ella, su mayor diversificación, así como la carencia de un proyecto y una representación política definidos, hacía suponer que una vez establecida la legitimidad democrática, participara dentro de las reglas del juego, refugiándose más en una posición corporativa.

c) El enclave ético-simbólico se relaciona a la cuestión de los derechos humanos, donde no había una fácil solución, por cuanto se enfrentaba la lógica ética, expresada en los movimientos de Derechos Humanos, con la lógica político-estatal. Lo importante a considerar, era la existencia de un alto nivel de racionalidad en las organizaciones de Derechos Humanos y la alta sensibilidad de la población respecto a este tema, radicalizando, en cierto grado los aspectos simbólicos e instrumentales que, significando satisfacción a las demandas de los afectados y retiro de los militares de la acción política, no afectara la seguridad personal o grupal de éstos.

En otras palabras y resumiendo, el tratamiento de los enclaves autoritarios suponía una estrategia de la coalición gobernante, combinando una dimensión legal o institucional, para dar lugar a la transformación de algunos de ellos a través de las mayorías políticas necesarias, con una

la tendencia del núcleo duro del pinochetismo a bunkerizar las Fuerzas Armadas y mantener su rol político y la muy escasa legitimidad que ellas tienen frente a la población.

dimensión estrictamente política, donde otros enclaves se superaran o eliminaran por la vía de la negociación directa o la presión política favorecida por la legitimidad democrática del gobierno.

3) Finalmente, visto desde la perspectiva de la consolidación democrática y asociando ésta al proceso de modernización y democratización, dos son las condiciones de la apertura a la democracia que es importante resaltar.

En primer lugar, no se enfrentaba, a diferencia de otros procesos de transición, una crisis económica aguda en el corto plazo, que obligara a planes de emergencia (como los planes Cruzado del Brasil o Austral de Argentina o el caso peruano) que conmocionaran toda la sociedad, ni una presión desmedida desde la sociedad por demandas no satisfechas. Esto permitía concentrar toda la capacidad del gobierno en las reformas propiamente políticas o institucionales (reforma constitucional, descentralización del Estado y participación en la base, reforma del Poder judicial, etc.), aprovechando su enorme legitimidad y el aislamiento de los sectores autoritarios. El problema radicaba en el largo plazo, haciendo referencia a la cuestión del modelo de desarrollo e inserción internacional para las próximas décadas, donde tanto, el vigente hasta 1973, como el que se implantó desde aquella época parecían haberse agotado.

En segundo lugar, producto de las transformaciones y modernizaciones incompletas ocurridas bajo el régimen militar, la consolidación democrática debía enfrentar el problema de las nuevas relaciones entre política y sociedad, lo que va desde una mayor autonomía de las organizaciones sociales respecto del sistema político-partidario hasta el problema de descentralización del poder estatal, fortalecimiento del poder y de los diversos niveles de participación.

Queda entonces claro, por una parte, que las transiciones exitosas son aquellas donde existe un fuerte sistema de partidos y una mayoría política que recoge a la vez y en conjunto, los requerimientos propios de la transición (superación de los enclaves autoritarios) y las demandas sociales por democratización global, sin la cual no hay consolidación democrática. Por otra parte, las transiciones en crisis o fracasadas son aquellas en que estos

elementos se disocian y polarizan, permitiendo nuevas desestabilizaciones e intervenciones militares. Desde este punto de vista, Chile estuvo en las puertas de una transición exitosa, resolviendo el gran problema histórico de este siglo que llevó al derrumbe democrático: la ruptura entre clases medias y sectores populares, entre el centro y la izquierda, es decir, entre quienes pueden asegurar democracia política y cambio social. La Concertación de Partidos por la Democracia, sus candidaturas presidencial y parlamentarias, su programa de gobierno, fueron expresión de esta posibilidad.

De tal forma, los dos problemas iniciales que debía afrontar el primer gobierno democrático, eran, por un lado, el de la estrategia político-legal, la que obliga a establecer prioridades, para superar los enclaves autoritarios centrales, permitiendo, a su vez, eliminar los otros y completar la transición. Por otro, la reforma del sistema político que permitiera soluciones institucionales a la tensión entre unidad y competencia dentro de la coalición del primer gobierno democrático, ya que ésta presentó la particularidad, respecto de otras transiciones, de combinar a la vez democracia y cambio social, es decir, de ser una coalición de centro e izquierda. Y decimos que ambos son problemas iniciales, porque si recordamos otras experiencias democráticas en Chile que intentaron cambio social, su Talón de Aquiles (y esto es válido tanto para el gobierno de Frei como de Allende) fue la ausencia de una estrategia de apoyo político y el recurso inflexible a las medidas programáticas, sin contar con la base política para ello.¹³

¹³ Cabe recordar que el gobierno de Frei buscó a través de medidas programáticas, como la reforma agraria y la promoción popular, cambiar a su favor la correlación de fuerzas políticas, fracasando en ello. En el caso de la Unidad Popular, por medio de la creación del Área de la UP y de medidas redistributivas, se intentó ampliar la base de apoyo socio-político, llegando también al fracaso. En ninguno de los dos casos se antepuso con realismo el problema de formulación de una estrategia propiamente política destinada a provocar el acuerdo inter-partidario para tales programas.

4.3.3 LA TRANSFORMACION DE LA POLITICA EXTERIOR.

Los cambios ocurridos en la política exterior de Chile durante 1990 revisten una doble importancia de análisis. Por un lado, son producto de la transición del autoritarismo a la democracia y, por otra parte, este período coincide con los sucesos de un nuevo orden mundial. La elección del presidente Aylwin tuvo lugar cinco semanas después de la caída del Muro de Berlín. La manera en que un país con una cultura política altamente ideologizada -cuyos partidos políticos han estado tradicionalmente muy unidos a las principales corrientes políticas internacionales reacciona frente a estos grandes cambios en el sistema internacional.¹⁴

Como elemento adicional para este contexto, está el hecho de que el gobierno militar se haya visto sometido a un fuerte aislamiento internacional, cuya contrapartida fue el apoyo de muchos gobiernos y organizaciones mundiales a las fuerzas políticas que integraron la Concertación por la Democracia. El cómo capitalizar lo que fue el principal pasivo del régimen anterior y era uno de los principales activos del nuevo gobierno, fue uno de los mayores desafíos del presidente Aylwin en el marco de un complejo proceso democrático, donde el que fuese autoridad suprema del país, con poderes omnímodos por más de 16 años, continúa como jefe del Ejército hasta 1997, en calidad de inamovible.

La llamada "reinserción internacional de Chile" fue uno de los cinco objetivos fundamentales del programa de gobierno de la Concertación, el cual se logró plenamente. Desde el inicio de la toma de posesión del presidente Aylwin, que contó con una gran asistencia de jefes de gobierno latinoamericanos y europeos, así como delegaciones de todas partes del mundo, fue seguido por una intensa actividad internacional por parte del nuevo gobierno. Esto se puso de manifiesto no sólo por la visita de numerosos

¹⁴ HEINE JORGE (Compilador). *¿Hacia unas relaciones internacionales de mercado? Anuario de Políticas Exteriores Latinoamericanas 1990-1991*. Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1991. Págs. 233-259.

dignatarios extranjeros a Chile; en las giras al extranjero de Patricio Aylwin, incluyendo la primera visita de un presidente chileno a la Asamblea General de Naciones Unidas desde 1972, sino que, además, en numerosos acuerdos de cooperación internacional, sobre todo con países europeos y en la incorporación del país al Grupo de Río.

Esta normalización de las relaciones exteriores de Chile se reflejó de igual manera en la opinión pública. La tarea efectuada en el área de las relaciones internacionales aparece en casi todas las encuestas como el principal logro del gobierno. Sin embargo, mientras en la opinión pública la gestión exterior del gobierno del presidente Aylwin fue visto con gran beneplácito, en las élites -esto es, dentro de la dirigencia política, medios de comunicación y sectores académicos- la percepción existente fue muy distinta, pues aquí abundaron las críticas de todo orden, evaluaciones muy negativas de la Cancillería y un consenso publicado en numerosos artículos de los cinco semanarios más importantes de Chile (desde *Análisis*, a la izquierda, pasando por *APSI*, *Hoy* y *Que Pasa*, hasta llegar a *Ercilla* en la extrema derecha) en torno a que la política exterior en 1990 dejó mucho que desear.

Lo que se planteó originalmente en el gobierno de Patricio Aylwin en el marco internacional fue despejar el terreno ante la pesada carga heredada por el régimen militar, lo que implicó el restablecimiento de relaciones diplomáticas con numerosos países que las habían roto, así como reasumir una sucesión de compromisos (como en materia de tratados internacionales de derechos humanos) acordes con los constantes cambios producidos en el mundo, situando a los valores democráticos como uno de los ejes en torno a los cuales se definiría las relaciones exteriores de Chile.¹⁵

Los organismos internacionales recibieron una atención preferente por parte del nuevo gobierno democrático, en un esfuerzo por mejorar la posición discriminada en que el país se había encontrado por varios años. Esta

¹⁵ HEINE JORGE. "El Nuevo Chile y la Nueva Europa". Artículo publicado en la revista *Cono Sur*, Santiago, enero-febrero de 1991. Págs. 17-21.

receptividad se tradujo en la elección de representantes chilenos a importantes funciones en diversos organismos internacionales.¹⁶

Cabe mencionar el nuevo estilo que se le imprimió a la política exterior de Chile, a través de las giras presidenciales del presidente Aylwin. A diferencia de antes, en que tenían un fuerte contenido ideológico, es esta ocasión se procuró darles un carácter suprapartidista que expresara una política de Estado, haciéndose ver la participación de parlamentarios de oposición en las mismas. Aquí resalta la llamada "diplomacia parlamentaria", surgida en 1990, como otra importante expresión de la democratización de la política exterior chilena.

Por otra parte, la relación con los Estados Unidos merecía especial atención. Aunque Chile es de importancia económica marginal para Estados Unidos, no lo es necesariamente así desde el punto de vista político. En Washington, el caso chileno fue visto como un posible modelo para el resto de América Latina, tanto por lo pacífico de su transición como por la apertura de su economía. Sin embargo, el restablecimiento de la democracia en Chile no significó poder despejar la agenda de temas pendientes entre Washington y Santiago, lo que dió lugar a numerosas críticas de la oposición al gobierno de la Concertación, acusándolos de tener una actitud concesiva hacia Estados Unidos. Para distintos observadores, en un esfuerzo por congraciarse con Estados Unidos, Chile tomaba medidas tan cuestionables como reconocer al gobierno de Guillermo Endara en Panamá, establecido después de la invasión norteamericana de diciembre de 1989, y se negaba a restablecer relaciones con Cuba, pero no obtenía nada a cambio.

Para finalizar en este punto, la principal deficiencia que muchos observadores encuentran en la política exterior chilena, es que ésta no ha sabido desarrollar un perfil más elevado que le permitiera asumir el liderazgo en numerosas áreas temáticas de la región. Esta deficiencia está dada -afirman

¹⁶ Entre otros se pueden mencionar la elección del ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, a la presidencia del Comité de Desarrollo del Banco Mundial; del embajador Juan Somavía a la presidencia de la Comisión Económica-Social de las Naciones Unidas; del embajador Hernán Muñoz a la presidencia del Comité de Medio Ambiente de la OEA y del embajador Hernán Gutiérrez a la presidencia del Grupo de los 77 en los organismos de la ONU en Viena.

los observadores en mayor medida por haber desaprovechado la gran oportunidad otorgada a Chile por la atención internacional recibida en 1990 para lanzar a la arena política importantes iniciativas de carácter regional y mundial. Sin embargo, esta concepción ignoraba definitivamente que la política exterior chilena responde a la conducción del Presidente, y que Patricio Aylwin, tanto por preferencia personal como por razones de estrategia política, prefirió que Chile volviera paulatinamente al escenario internacional con un estilo consensual y sin pretensiones de liderazgo de ningún tipo.

Estas características se pueden analizar en el siguiente cuadro donde se muestran estas nuevas estrategias a seguir dentro de la política exterior llevada a cabo por el gobierno democrático de Patricio Aylwin.

AREAS	SITUACION DURANTE EL GOBIERNO MILITAR	POLITICA EXTERIOR DEL GOBIERNO DE PATRICIO AYLWIN	
		Objetivo	Medios
Política Exterior General	Aislamiento Político	Reinserción Internacional	Cambios en tipo, calidad y frecuencia de contactos exteriores
Democracia y Derechos Humanos	Defensiva	Posición Asertiva	Adscripción al régimen internacional de Derechos Humanos. Democracia como eje ordenador de la política exterior.
Organismos Multilaterales	Pasividad	Activismo Moderado	Coordinación de consensos.
Comercio Exterior	Economía abierta Auge exportador	Continuidad	Profundización de mercados tradicionales. Apertura de nuevos mercados. Búsqueda de cooperación. Atracción de mayor inversión.

Fuente: Adaptado de Carlos Portales, Director General de Política Exterior, "La nueva política exterior de Chile", charla ofrecida en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, 16 de julio de 1990.

CONCLUSIONES

Si analizamos a grandes rasgos el tema sobre los regímenes militares en América Latina, así como la posterior transición a la democracia, nos encontraremos que ambos son de una complejidad extrema por todo el contexto que involucran.

Primero, considero importante señalar que no ha sido el objeto central de este trabajo el establecer una definición estricta y clara de lo que representó el régimen autoritario militar en Chile por todos los matices que lo envuelven. Lo que se ha procurado es establecer las características de índole político e histórico sobre la dinámica y los procesos del régimen, analizando del mismo modo, la problemática que involucra un proceso de transición de un régimen autoritario a uno democrático. En el caso chileno - al igual que la mayoría de los países latinoamericanos-, el establecimiento de este tipo de dictaduras están fundamentadas en favor de los intereses imperialistas de los Estados Unidos, siendo la estrategia a seguir no sólo la aparente expansión del socialismo comunista, sino también los fundamentos que involucra la Doctrina de la Soberanía Nacional (DSN), así como la defensa del capitalismo.

En términos generales, el gobierno presidido en Chile por el general Pinochet se encuentra entre los regímenes militares más antiliberales de América Latina y entre los que menos concesiones hicieron, incluso a la retórica democrática. Fundamentados el discurso autoritario de los militares chilenos, con su insistencia en la necesidad de una renovación de las instituciones recuerda la España franquista. Los asesores del régimen y los responsables de su línea "dura" (los "renovadores" como se hacían llamar) rechazaron en forma absoluta las instituciones parlamentarias y partidarias que rigieron hasta 1973, y expresaron sin disimulo sus inclinaciones corporativistas. Inmediatamente después del golpe de Estado, el general Pinochet prometió una nueva Constitución que habría de "suprimir para siempre la politiquería, el sectorismo y la demagogia".

Cabe destacar que las características del modelo político del régimen militar estaban en base a la institucionalización con un peso decisivo del elemento represivo en las relaciones entre Estado y sociedad. Este elemento represivo, ya se ha mencionado, se expresó en la Constitución y en el conjunto de leyes que dictó el gobierno,¹ concluyendo que estos casos se acercan a un verdadero terrorismo de Estado; no sólo son muy numerosas las víctimas, sino que pocas personas pueden sentirse completamente a salvo del terror, la inseguridad y el miedo que afectan a amplios sectores de la población, incluso a muchos que apoyaron la formación de ese régimen.

Otro rasgo significativo que me parece importante señalar, fue la tendencia personalizadora que hizo coincidir la máxima jerarquía militar con la máxima autoridad del Estado. En el caso de Chile, el alto nivel de las fuerzas armadas y su limitada experiencia política no estaban desvinculados del proceso de institucionalización personalizado del régimen militar. La disciplina jerárquica sustituyó al consenso político y, el temor a un retorno de los "derrotados" cimentó la cohesión en torno de un líder único que simbolizara una política contrarrevolucionaria que nadie, dentro del ejército cuestionó. Aquí quiero hacer vehemencia por el doble proceso que se le dió. Por un lado, estuvo la subordinación de las diversas ramas de las fuerzas armadas al ejército y dentro de éste una rígida disciplina en torno al liderazgo de Pinochet. Por otro lado, la concentración de poderes políticos impersonales consagrada institucionalmente, pero que se reforzó con la ausencia de un sistema objetivado de procesamiento de demandas y toma de decisiones.

Se entiende entonces porqué estas características se expresaron de tal manera para la prolongación por amplio plazo del régimen militar. Sin embargo, es importante recordar que la capacidad para construir un nuevo orden social por parte de dicho régimen chocó con ciertas limitaciones, pues a mi juicio, el punto crucial que se constituyó como la columna vertebral de la sociedad chilena, fue su sistema político. Es cierto que la clase política y sus organizaciones estaban parcialmente desconectadas, además de sufrir la represión, pero para entonces se hizo necesario enfrentar un nuevo modo

¹ Por ejemplo, la disposición 24 transitoria de la Constitución que entregaba poderes omnímodos a Pinochet, eliminando el recurso de *habeas corpus* para una amplia gama de asuntos y las denominadas leyes antiterroristas.

de constituir sujetos sociales, es decir, de hacer política; y el período estratégico para esta reconstitución de sujetos y actores sociales fue después del plebiscito de 1980.

En este mismo sentido, las fuerzas armadas enfrentaron ciertas contradicciones, pues ante la creciente tensión de los sectores empresariales que buscaban transferir la totalidad del poder político al capital privado y los grupos ideológicos trataban de retener el control estatal del país, las fuerzas armadas se hallaban en encrucijada y, mientras existieran bases de inestabilidad del régimen, éstas se verían comprometidas en la lucha política. Las perspectivas de cualquier fuerza política nacional pasaban por la presencia de sus posiciones y modelos económico, social y político. De este modo, las fuerzas armadas pasaban de un estado de deliberación y obediencia a constituirse en un estratégico campo de lucha y, una mayor unidad del bloque en el poder alteraba el curso de los acontecimientos. Por el contrario, su debilitamiento y la activación de las fuerzas armadas por parte de otras fuerzas políticas abría perspectivas junto a otros factores, a lo que entendemos como una real democratización del país.

Por otra parte, si se acepta la idea de que toda transición es un período en el que las reglas del juego no están definidas, resulta obvio que el tiempo en el que se llevó a cabo es escenario de un indeterminado número de procesos y reajustes que tienen por sujetos a diferentes actores políticos. Aquí cabe registrar varios elementos que ejercen una influencia directa en el proceso de conformación del nuevo sistema democrático dentro de las transiciones latinoamericanas: el camino de redemocratización llevado a cabo; la relación entre liberalización y democratización del régimen anterior, y el proceso de democratización considerado en sí mismo.

De igual forma, se deben destacar tres aspectos de la democracia que son decisivos para el proceso de transición. Primero, la democracia es una forma de institucionalización de conflictos permanentes. Segundo, la capacidad de los grupos particulares para satisfacer sus intereses está determinada por los arreglos institucionales específicos de cada sistema. Por último, aunque esta capacidad está dada *a priori*, los resultados de los conflictos no están determinados de manera unívoca, -es decir, que están

convenidos en una misma razón- ni por arreglos institucionales, ni por el lugar que ocupan los participantes dentro del sistema de producción. Se puede dar el caso de desenlaces improbables. Como decía el diario El Mercurio después de la victoria de Salvador Allende en Chile: "Nadie esperaba que un presidente marxista fuera elegido por medio del voto secreto y universal de la burguesía".

La mayor parte de las transiciones políticas se han producido siguiendo el camino definido como de "redemocratización" iniciada en el seno del régimen autoritario anterior, en el que las fuerzas armadas han desempeñado un papel activo. El caso de la transición democrática en Chile constituye una de las excepciones a esta regla general. Y es que en las tres últimas décadas, en la abrumadora mayoría de casos de redemocratización, el papel clave lo cumplieron fuerzas sociopolíticas y no fuerzas militares externas.

Si tomamos como base de apoyo razones abstractas e históricas, podemos afirmar que el camino que llevó a poner término al régimen militar-autoritario en Chile e iniciar el proceso de redemocratización se dió por un pacto partidario (con la participación y ausencia de elementos consociativos, esto es un socio con respecto a otro u otros). Esta categoría se refiere a la construcción interna de un gran pacto opositor. Los miembros de este convenio se unen para derrotar al régimen autoritario y sientan las bases de un régimen democrático posterior donde el poder esté abierto a la mayoría de las fuerzas opositoras.

En teoría, se entiende porqué este camino (en especial en su forma consociativa plena) revistió gran interés para las estrategias de redemocratización, pues atacó de manera simultánea dos cuestiones críticas. Por un lado, el establecimiento de un pacto de esta índole contribuyó a erosionar los cimientos del régimen autoritario, sobre todo cuando este último se apoyaba en el argumento de que en ausencia de autoritarismo sobrevendría un conflicto muy violento. Por otro lado, ayudó a fundar el régimen democrático posterior con elaboradas fórmulas para compartir el gobierno, fijando el poder de veto mutuo y creando grandes coaliciones.

Visto desde el punto de vista práctico, el comienzo de una verdadera transición hacia la democracia hacía suponer un acuerdo político muy exacto y detallado sobre aquellas tareas y problemas que permitieran asegurar una administración estable al país durante el período en que se debían definir las bases del nuevo sistema político democrático. Del mismo modo, los partidos que integraron el bloque democrático se tuvieron que aproximar al cumplimiento de tareas de gran magnitud y que quedaran fuera del quehacer del aparato gubernamental que conduciría a la democratización.

Quiero enfatizar del mismo modo que los procesos de democratización vividos en América Latina entrañan dos tipos de transiciones. La primera es la que va del régimen autoritario anterior hasta la instauración de un gobierno democrático. La segunda va desde ese gobierno hasta la consolidación de la democracia o, en otras palabras, hasta la vigencia efectiva de un *régimen democrático*. La democracia a la que me he referido en el presente trabajo es a la democracia política (o poliarquía, según la definición de Robert Dahl)² que puede coexistir con diversos grados de democratización (y con la ausencia de ella) en los planos económico, social y cultural. Por dos razones es por lo que quiero dejar bien sentada esta distinción: una, porque la conquista de la democracia política es sumamente valiosa por sí misma; la otra, porque la diferencia entre la democracia política por un lado y la democratización socioeconómica y cultural por otro es precisamente lo que nos permite explorar las relaciones y variaciones entre ambas. Y es que la discusión teórica en torno a cuando termina un proceso de transición política resulta trivial y carente de importancia. En términos generales, la transición política puede considerarse como un período concreto en el que se llevan a cabo diferentes procesos tendientes a instaurar una poliarquía; estos procesos generan la puesta en marcha y el cumplimiento de una serie de reglas de juego que en su mayoría son aceptadas. A partir del momento en que se alcanza esta situación, el nuevo régimen político democrático comienza a funcionar con el proceso de

² DAHL, ROBERT. *Polyarchy. Participation and opposition*. New Haven, Yale University Press, 1971. Las condiciones mínimas de la poliarquía (o democracia política) según este autor consisten en que: "[...] todos los ciudadanos deben tener la libre oportunidad de 1) Formular sus preferencias; 2) Expresar sus preferencias a otros ciudadanos y al gobierno por medio de acciones individuales y colectivas; 3) Conseguir que sus preferencias tengan el mismo peso que otras ante el gobierno; es decir, que no sean discriminadas por el contenido o la fuente de esas preferencias."

demandas de los ciudadanos y la elaboración de medidas que tienen una inmediata repercusión en los distintos ámbitos de la esfera pública.

Queda entonces claro que para los países latinoamericanos que hicieron a fines de los ochentas la primera transición, la segunda transición no sería menos ardua ni menos prolongada, resultando tal vez simplista la idea de que a una transición política le sigue evidentemente un período de consolidación del régimen político, pero debe considerarse que los caminos que van de un gobierno a un régimen democrático son inciertos y complejos, existiendo la posibilidad de una regresión al autoritarismo. Aquí la excepción la constituye el caso de Chile -al igual que Uruguay-, pues se dió como un caso muy significativo de redemocratización, más que nada por vincularse con una larga tradición democrática y la fuerza relativa de los aparatos partidarios de extensión nacional, así como por una amplia sociedad civil. Igualmente, Chile se constituyó como un pionero y un modelo a seguir por el resto de los países de América Latina en el aspecto económico y comercial, pues con todo y padecer los mismos problemas de la región, se convirtió en un caso de éxito con resultados altamente favorables que se observan aun hoy día.

De la misma manera, en el caso de la transición chilena, entra en contraste con las transiciones en regímenes por colapso³. Este tipo de transición deja a la nueva democracia con los problemas resultantes de una economía destruida y de las profundas heridas políticas y psicosociales de la extensa represión anterior. El caso chileno, por el contrario, se puede considerar hasta cierto punto como una transición "transada" mediante acuerdos o pactos donde, por lo general, los gobernantes autoritarios logran imponer a la oposición buena parte de su agenda. Además, cuando el régimen autoritario está respaldado centralmente por las fuerzas armadas, el fuerte poder de negociación de que gozan origina una componenda o

³ Se les llama regímenes por colapso, porque es debido a una explosión de sus propios conflictos internos, con el auxilio de una oposición firme, aunque largo tiempo silenciada por la represión. En algunos casos esos regímenes precipitan su colapso al proyectar al exterior sus problemas internos y emprender alguna aventura bélica (como la de las islas Malvinas en el caso argentino). El colapso conduce a un tipo de transición en la cual, aunque no dejen de existir negociaciones con la oposición, los gobernantes autoritarios no logran controlar la agenda de los temas de la negociación ni los resultados de ésta (véanse por ejemplo las tentativas típicamente fracasadas de imponer un extenso papel institucionalizado de las fuerzas armadas en el futuro gobierno civil)

transacción en la cual reciben sólidas garantías de que no será "revisado el pasado" y obtienen una amplia participación en el nuevo gobierno civil.

En cuanto a la Concertación de Partidos por el NO, que posteriormente pasó a ser la Concertación de Partidos por la Democracia, pienso que ésta no se constituyó como una coalición política. Probablemente la clave de su éxito residió precisamente en que no lo fue, en el sentido de que no intentó resolver anticipadamente los problemas que toda coalición tiene que abordar para ser tal. En esa misma medida, entonces, ese movimiento generó las condiciones para una concertación política y social amplísima.

Por un lado, con el triunfo en el plebiscito, la oposición optó por dar continuidad a la unidad lograda y asumiendo la tarea de convertir esa convergencia en una coalición que se propusiera gobernar al país. Desde el punto de vista de la experiencia internacional, esto era un hecho inédito, pues las mismas fuerzas que dieran paso al proceso de democratización, resolvían no competir entre sí en una primera etapa y asumir en conjunto la tarea de gobernar, al menos durante un período. Considero que esa fue una opción clave, la cual perfiló un rasgo distintivo de la transición chilena.

Por otro lado, y en mi opinión, la debilidad de la oposición residía en que se trataba de una coalición con un marcado tinte de centro-izquierda, y que por tanto requería necesariamente complementar su política con un acento muy grande en los acuerdos nacionales, para poder ejercer con éxito su vocación de ser artífice de la transición. En pocas palabras, se trataba de una coalición que tenía un déficit a la derecha.

Finalmente, en el futuro inmediato que se le presenta a Chile, se puede analizar desde una doble perspectiva. Las posibilidades de construir un sistema democrático estable en el largo plazo, de reconsolidar su democracia se presentan bastante aceptables... a condición de que en el corto plazo se lograran superar los conflictos heredados por el régimen militar, los problemas no resueltos; y de que se completara realmente el proceso de transición. Ciertamente se presentaban riesgos y problemas muy sensibles de resolver en el corto plazo, y no se imaginaba una regresión autoritaria como una posibilidad real y seria. Sin embargo, se dieron los

pasos fundamentales de la transición a la democracia y las perspectivas de un Chile políticamente estable, con una economía abierta y dinámica y con un desarrollo creciente de las condiciones de justicia social están a la vista de todos.

Se dice que en Chile se ha gustado siempre de las utopías, pero se ha dicho también que las utopías los llevaron a la tragedia. En realidad hay utopías que nacen de un voluntarismo desmedido y que están condenadas al fracaso, pero también las hay que son fuerzas movilizadoras de energías que claman por alcanzar un mundo mejor. En Chile se han movilizado esas energías, no sólo de quienes pudieran haber obtenido un éxito electoral, sino de un país entero que descubre que es posible reconciliarse, siendo una utopía mucho más modesta, pero también mucho más realista. Es la utopía de un país que puede reencontrarse a sí mismo.

BIBLIOGRAFIA



- ALAIN JOXE, Las Fuerzas Armadas en el Sistema Político de Chile. Editorial Univeritaria, Santiago, 1970.
- ALAMINOS ANTONIO, Chile: Transición política y sociedad. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1991.
- ALMEYDA CLODOMIRO, Documentos sobre América Latina. Mesa Redonda. "El socialismo en el mundo contemporáneo". CAUTAT, República Socialista Federativa de Yugoslavia, 1976.
- ALMEYDA CLODOMIRO, Liberación y Fascismo. Editorial Nuestro Tiempo, México, 1979.
- ALMEYDA CLODOMIRO Y OTROS, Chile: más allá de la memoria. Coordinación de Humanidades, U.N.A.M., México, 1986.
- ALTAMIRANO CARLOS, El movimiento socialista chileno. Discurso con motivo de la conmemoración del 45 aniversario del Partido Socialista de Chile. México, 1978.
- ALVARADO GONZALEZ JOSE LUIS, El fascismo en América Latina, caso específico: Golpe de Estado y dictadura chilena. Tesis para obtener el título de Lic. en Relaciones Internals. E.N.E.P. Acatlán, U.N.A.M., 1986.
- ARRIAGADA G., El marco Institucional de las Fuerzas Armadas. Working Paper, Latin American Program, The Wilson Center, Washington D.C., 1980.
- BARRACLOUGH SOLON Y OTROS, Chile: reforma agraria y gobierno popular. Ediciones Periferia, Buenos Aires, 1973.

- BOBBIO NORBERTO, Diccionario de Política, Vol. 1. Siglo XXI Editores, México, 1981.
- BRIONES ALVARO, Ideología del Fascismo Dependiente. Editorial Edicol S.A., México, 1978.
- BROWN C. G., ...10 años de atropellos a los derechos humanos en Chile... Informe del Americas Watch Committee. Edit. Casa de Chile en México, 1984.
- BRUNA SUSANA, Chile: la legalidad vencida. Ediciones Era, México, 1976.
- BRUNNER JOSE JOAQUIN, Chile. Clave de una transición. Leviatan, Número 40. 1990.
- BULE F., Elementos para el análisis crítico del sistema cultural vigente en Chile. CIDOQB-TM, Barcelona, 1974.
- CARRANZA MARIO ESTEBAN, Fuerzas Armadas y Estados de excepción en América Latina. Editorial Siglo XXI, México, 1978.
- DAHL ROBERT, Politerchy. Participation and opposition. New Haven, Yale University Press, 1971.
- DIAZ CARDONA FRANCIA ELENA, Fuerzas Armadas. Militarismo y Constitución Nacional en América Latina. Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.A.M., México, 1986.
- DUVERGER MAURICE, Instituciones políticas y derecho constitucional. Ediciones Ariel, Barcelona, 1970.
- ENRIQUEZ EDGARDO, Dos momentos históricos paralelos en la sociedad chilena. Casa de Chile en México, 1983.
- FARNSWORTH ELIZABETH Y OTROS, Chile: el bloqueo invisible. Ediciones Periferia S.R.L., Buenos Aires, 1973.

· FRUHLING H., Strategies of Repression and Legal Strategy for the Defense of Human Rights in Chile: 1973-1980. Human Rights Quarterly 5, 1983.

· GARCIA PIO, Las fuerzas armadas y el golpe de Estado en Chile. Editorial Siglo XXI, México, 1974.

· GARCIA RIGOBERTO, Economía y política durante el gobierno militar en Chile, 1973-1987. Fondo de Cultura Económica, México, 1989.

· GARRETON MANUEL ANTONIO, En torno a la discusión de los nuevos regímenes autoritarios en América Latina. Documento de trabajo, FLACSO, Santiago, 1980.

· GARRETON MANUEL ANTONIO, Procesos políticos en un régimen autoritario. Dinámicas de institucionalización y oposición en Chile 1973-1980. Documento de trabajo, FLACSO, Santiago, 1980.

· GARRETON MANUEL ANTONIO, El proceso político chileno. Documento de trabajo, FLACSO, Santiago, 1983.

· GARRETON MANUEL ANTONIO, La Posibilidad Democrática en Chile. Cuaderno de Difusión, FLACSO, Santiago, 1989.

· GARRETON MANUEL ANTONIO, La transición chilena: una evaluación preliminar. Doctos. de trabajo. Serie Estudios Políticos, FLACSO, Santiago, 1991.

· GOMEZ-MARTINEZ JOSE LUIS, Chile 1968-1968. University of Georgia, Athens, Georgia, 1988.

· GONZALEZ CASANOVA PABLO, América Latina. historia de medio siglo. Vol. 1. Siglo XXI Editores, México, 1988.

· GONZALEZ CASANOVA PABLO, Imperialismo y liberación. Siglo XXI Editores, México, 1991.

· HEINE JORGE (Compilador), Hacia unas relaciones internacionales de mercado? Anuario de Políticas Exteriores Latinoamericanas 1990-1991. Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1991.

- HIDALGO PAULO, Reformas económicas y actores políticos en México y Chile. Un análisis exploratorio, México, 1990.
- KATZ CLAUDE, Chile bajo Pinochet, Editorial Anagrama, Barcelona, 1975.
- KUDACHKIN M., La experiencia de la lucha por la unidad de las fuerzas de izquierda y las transformaciones revolucionarias, Editorial Progreso, Moscú, 1978.
- LIEUWEN EDWIN, Armas y política en América Latina, Editorial Sur, Buenos Aires, 1980.
- MAIRA LUIS, Chile: Autoritarismo, democracia y movimiento popular, CIDE, México, 1984.
- MARINI RUY MAURO, El reformismo y la contrarrevolución, Ediciones Era, S.A., México, 1976.
- MEYER LORENZO Y REYNA JOSE LUIS (Coordinadores), Los sistemas políticos en América Latina, Editorial Siglo XXI, Universidad de las Naciones Unidas, 1989.
- MISTRAL CARLOS, Chile: del triunfo popular al golpe fascista, Serie Popular Era, México, 1974.
- MOORE STANLEY, Crítica de la democracia capitalista, Siglo XXI Editores, México, 1985. 7a. edición.
- MUÑOZ OSCAR, Transición a la democracia. Marco político y económico, CIEPLAN, Santiago de Chile, 1990.
- O'DONNELL GUILLERMO Y OTROS (Compiladores), Transiciones desde un gobierno autoritario. América Latina, Vol. 2. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1988.
- O'DONNELL GUILLERMO Y OTROS (Compiladores), Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas, Vol 3. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1991.

• O'DONNELL GUILLERMO Y OTROS (Compiladores), Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, Vol. 4, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1988.

• PETRAS JAMES Y MORLEY MORRIS, La construcción nacional para darroc a Allende, Editorial Nuestro Tiempo S.A., México, 1988.

• FOULANTZAS NICOS, Estado, Poder y Socialismo, Siglo XXI Editores, México, 1988.

• REIMANN W. ELIZABETH Y RIVAS S. FERNANDO, Chile: antecedentes para un análisis, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977.

• RODRIGUEZ FELIPE, Crítica de la Unidad Popular, Editorial Fontamara, Barcelona, 1978.

• ROUQUIÉ ALAIN, Argentina hoy, Siglo XXI Editores, México, 1982.

• ROUQUIÉ ALAIN, El Estado militar en América Latina, Siglo XXI Editores, México, 1982.

• ROUQUIÉ ALAIN, Poder militar y sociedad política en Argentina: 1862-1973, Tomo II, Emecé Editores S.A., Buenos Aires, 1983.

• SMERNOW GABRIEL, La revolución desarmada (Chile 1970-1973), Serie Popular Eca, México, 1977.

• STEPAN ALFRED, Los militares y la política, Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 1978.

• URIBE ARMANDO, El libro negro de la intervención norteamericana en Chile, Siglo XXI Editores, México, 1978.

• VARAS AUGUSTO, "La legitimidad social de las Fuerzas Armadas en política", Documento de trabajo 434, FLACSO, Santiago, agosto de 1989.

• VARIOS AUTORES, Diccionario de Ciencias Sociales, Vol 1. Instituto de Estudios Políticos, UNESCO, Madrid, 1976.

• VARIOS AUTORES, Diccionario de Ciencias Sociales, Vol. 2. Instituto de Estudios Políticos, UNESCO, Madrid, 1976.

• VARIOS AUTORES, Diccionario de Política y Administración Pública, Vol. 1. Colegio de Licenciados en Ciencia Política y Administración Pública, A.C.

• WIARDA HOWARD J. Y KLINE HARVEY F., Latin American Politics and Development, Westview Press, 1980.

• WILHELMY MANFRED, Hacia un análisis de la Política Exterior Chilena Contemporánea, Estudios Internacionales, Núm. 68, octubre-diciembre de 1979.

HEMEROGRAFIA



• Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, Núm. 39, año XIII, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M., México, sep.-dic. 1980.

• Cuadernos de la Realidad Nacional, Número 16, Santiago, abril de 1973.

• Concertación por la Democracia, Programa de Gobierno, Santiago de Chile, julio de 1989.

• Diario El Mercurio, Santiago de Chile.

• Diario Excelsior, México, D.F., 11 de septiembre de 1984.

• Mensaje del general Pinochet del 11 de septiembre de 1976.

- Revista "APSI", dossier, Santiago de Chile, 10 al 23 de marzo de 1981.
- Revista "Cono Sur", Santiago de Chile, enero-febrero de 1991.
- Revista Mexicana de Sociología, Año XLIV, Núm. 2. Instituto de Investigaciones Sociales, U.N.A.M., México, abril-junio 1982.
- Revista Mexicana de Sociología, Año XLV, Núm. 3. Instituto de Investigaciones Sociales, U.N.A.M., México, julio-septiembre 1983.
- Revista Mexicana de Sociología, Año XLVIII, Núm. 3. Instituto de Investigaciones Sociales, U.N.A.M., México, julio-septiembre 1986.
- Revista Mexicana de Sociología, Año LIV, Núm. 1. Instituto de Investigaciones Sociales, U.N.A.M., México, enero-marzo 1992.
- Revista Mexicana de Sociología, Año LVI, Núm. 1. Instituto de Investigaciones Sociales, U.N.A.M., México, enero-marzo 1994.
- Revista Mexicana de Sociología, Año LVI, Núm. 3. Instituto de Investigaciones Sociales, U.N.A.M., México, julio-septiembre 1994.
- Revista "NEXOS", Número 159, México, Marzo 1991.
- Revista Paraguaya de Sociología, Año 26, Núm. 76. Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, Asunción, septiembre-diciembre 1989.
- Revista Paraguaya de Sociología, Año 30, Núm. 86. Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, Asunción, enero-abril 1993.
- Revista Paraguaya de Sociología, Año 31, Núm. 89. Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, Asunción, enero-abril 1994.
- Revista "Que Pasa", Número 268, Santiago de Chile, junio, 1976.
- Unidad Popular, Programa de gobierno. Santiago de Chile, 1970.